

# El escándalo de la desigualdad 2

Las múltiples caras de la desigualdad en América Latina y el Caribe  
March 2017





**Autores:**

Sophie Richmond, Christian Aid

Gaby Drinkwater, Christian Aid

Luisa Fulcher, Christian Aid

Caroline McCarthy, Christian Aid

**Agradecimientos:**

Queremos agradecer a los siguientes colegas de Christian Aid por sus recomendaciones y aportes a este informe: Ana Guisella Arellano, Karol Balfe, Cecilia Córdova, Andrew Croggon, Alison Doig, Emma Donlan, Sophie Efange, Moisés González, Eric Gutierrez, Victoria Jean-Louis, Amilcar Kraudie, Pedro Lazaro, Priya Lukka, Mara Luz, Alexis Moncada, Thomas Mortensen, Jocelyn Numa, Toby Quantrill y Sarah Roure.

Este informe está dedicado a todas nuestras contrapartes locales en América Latina y el Caribe que se esfuerzan diariamente para detener las múltiples caras de la desigualdad.

**Christian Aid es una organización cristiana, que insiste en que el mundo puede y debe ser cambiado rápidamente a uno en el que todos puedan vivir una vida plena, libre de pobreza.**

**Trabajamos a nivel mundial para un cambio profundo que erradique las causas de la pobreza, tratando de lograr la igualdad, la dignidad y la libertad para todos, independientemente de la fe o nacionalidad. Somos parte de un movimiento más amplio por la justicia social.**

**Proporcionamos asistencia urgente, práctica y efectiva donde hay mayor necesidad, afrontando los efectos de la pobreza, así como también sus principales causas.**

**[christianaid.org.uk](http://christianaid.org.uk)**

## **Contáctenos**

Christian Aid  
35 Lower Marsh  
Waterloo  
Londres  
SE1 7RL  
T: +44 (0) 20 7620 4444  
E: [info@christian-aid.org](mailto:info@christian-aid.org)  
W: [christianaid.org.uk](http://christianaid.org.uk)

## Contenido

Introducción	6
Visión general de la desigualdad en América Latina y el Caribe	10
1. Desigualdad, identidad racial y étnica	17
2. Desigualdad, gobernabilidad y poder	25
3. Desigualdad y violencia	36
4. Desigualdad y justicia fiscal	44
5. Desigualdad y trabajo digno	54
6. Desigualdad y desarrollo bajo en carbono	61
Conclusión y recomendaciones	69

**Portada:** Manifestación de jóvenes en São Paulo reclamando mejores políticas para la juventud en la Constitución.

Fotos: Portada: Christian Aid/Clare Paine; página 10: Christian Aid/Federico Rios; página 17: Christian Aid; página 18: Christian Aid/Paula Plaza; página 25: Christian Aid/Thomas Mortensen; página 31: Christian Aid/Amy Smith; página 36: Christian Aid/Paula Plaza; página 42: Christian Aid; página 44: Christian Aid; página 54: Christian Aid/Thomas Lohnes; página 55: Christian Aid/Tom Price; página 61: Christian Aid/Tom Price; página 67: Christian Aid/Amy Smith

## Lista de acrónimos

<b>CEDLA</b>	Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos
<b>CGGDH</b>	Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos
<b>CODEFEM</b>	Colectiva para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en Guatemala
<b>COPINH</b>	Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
<b>CPI</b>	Comissao Pró-Índio de São Paulo / Comisión Pro Indio de São Paulo
<b>CREAS</b>	Centro Regional Ecuménico de Asesoría y Servicio
<b>CEPAL</b>	Comisión Económica para América Latina y el Caribe
<b>FARC</b>	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
<b>IED</b>	inversión extranjera directa
<b>AGJF</b>	Alianza Global por la Justicia Fiscal
<b>VG</b>	violencia de género
<b>PIB</b>	producto interior bruto
<b>DDH</b>	defensor de los derechos humanos
<b>ICEFI</b>	Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales
<b>IEEPP</b>	Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas
<b>OIT</b>	Organización Internacional del Trabajo
<b>INESC</b>	Instituto de Estudios Socioeconómicos
<b>CIJP</b>	Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
<b>LGBTI</b>	lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros e intersexuales
<b>MAB</b>	Movimento Nacional dos Atingidos por Barragens / Movimiento Nacional de Afectados por Represas
<b>MISSEH</b>	Mission Sociale des Églises Haïtiennes / Misión Social de las Iglesias Haitianas
<b>MIPYME</b>	micro, pequeña y mediana empresa
<b>ONG</b>	organización no gubernamental
<b>OCDE</b>	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
<b>SADD</b>	Servicio Anglicano de Diaconía y Desarrollo
<b>ODS</b>	Objetivo de Desarrollo Sostenible
<b>ONU</b>	Organización de las Naciones Unidas

<b>OACDH</b>	Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
<b>PNUD</b>	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
<b>CMNUCC</b>	Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
<b>UNITAS</b>	Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social

## Introducción

La versión actualizada del informe de 2012 de Christian Aid es tanto oportuna como acertada. Durante mucho tiempo, las profundas y generalizadas desigualdades que definen y afectan a la mayoría de las sociedades de América Latina y el Caribe se han aceptado como aspectos de la vida cotidiana. A medida que nuestro conocimiento aumenta, reconocemos y comprendemos mejor los distintos aspectos y manifestaciones de la desigualdad, especialmente el cómo estos se traducen en pérdida de oportunidades, desaprovechamiento de potencial en la región y sufrimiento directo de la pobreza o violencia y, en el peor de los casos, una combinación de ambas.



Nuestra comprensión de la naturaleza y manifestaciones de la desigualdad ha aumentado considerablemente. La colaboración con nuestras contrapartes, particularmente en lograr una conciencia más profunda sobre la naturaleza de género de la desigualdad, nos ha dado una mayor capacidad de análisis sobre esta, al igual que entender mejor la relación que existe con aspectos tales como la raza, la etnicidad y, más recientemente, la sexualidad. En nuestro trabajo con las contrapartes podemos aplicar esta comprensión más amplia para mejorar las estrategias y enfocarnos mejor en las respuestas.

La adopción global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible bajo el lema unificador “que nadie se quede atrás” ofrece una oportunidad única de tener una mirada diferente sobre las formas en que la desigualdad se expresa en América Latina y el Caribe desde nivel regional hasta el nivel de la comunidad local, y proporciona a la sociedad civil elementos de análisis y las herramientas necesarias para exigir a los gobiernos y otros organismos oficiales que rindan cuenta por sus acciones.

Hechos recientes muestran que tras distintos intentos oficiales en la región por superar las desigualdades o resolver sus consecuencias, sigue habiendo una fuerte reacción por parte de las fuerzas que históricamente se han beneficiado de la arraigada desigualdad social.

Una vez más, se está definiendo el campo de batalla en medio de una creciente polarización política. En vez de volver a cometer los mismos errores del pasado, es labor de todos los líderes de la justicia social el tratar de aprender y aplicar las lecciones del pasado, así como también en recordarle al mundo lo que se había pactado con los ODS.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Valentin'.

**Paul Valentin, International Director, Christian Aid**

## Resumen ejecutivo

La desigualdad en América Latina y el Caribe es profunda y generalizada. Tiene un enorme efecto en las vidas de muchas personas de la región. En el año 2012 Christian Aid publicó El escándalo de la desigualdad en América Latina y el Caribe con el fin de resaltar la inaceptable situación en la región y sus consecuencias en el desarrollo. Mientras que la desigualdad ha pasado a primer plano en el discurso sobre el desarrollo, creemos que los niveles de desigualdad en América Latina y el Caribe basados en la identidad, el género, la situación económica o la situación geográfica siguen siendo alarmantes y la vida de millones de personas que sufren discriminación y marginación poco ha cambiado.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) han situado con firmeza la desigualdad en el núcleo del discurso sobre el desarrollo. Los ODS, en el que los países de la región se han inscrito, incluyen un objetivo que trata específicamente de la desigualdad.

El creciente impacto del cambio climático, la incierta y polarizada situación política de muchos países, con el poder en manos de las élites y compañías multinacionales en el mundo, hacen que los cambios estructurales para reducir la desigualdad sean un reto. Aun así, creemos que hay oportunidades. La desigualdad está en la agenda sobre el desarrollo; la violencia contra las mujeres y la desigualdad de género están más presentes en el debate público que durante las últimas décadas y el cambio climático y la urgente necesidad de encontrar modelos alternativos de desarrollo bajo en carbono tiene que seguir estando en el primer plano de la agenda política mundial, independientemente de los giros geopolíticos.

En el capítulo 1, explicamos cuán generalizada está la discriminación racial y étnica y cómo los grupos indígenas y afrodescendientes experimentan un mayor nivel de pobreza y carecen de acceso a servicios básicos de calidad, a tierras, a la oportunidad de tener trabajo digno y de participación en el sistema político. También resaltamos cómo a mujeres indígenas y afrodescendientes les afectan más estas desigualdades.

En el capítulo 2 exploramos el actual panorama político y el cómo una injusta distribución del poder exacerba las desigualdades para muchas personas de la región. Algunas instituciones, incluidos gobiernos locales y nacionales, compañías multinacionales, y élites locales, han abusado habitualmente de su poder y como resultado la concentración de tierras ha quedado en pocas manos y el desarrollo de megaproyectos han sido ambientalmente insostenibles, en perjuicio de grupos vulnerables y marginalizados. Damos ejemplos de cómo con frecuencia a defensores de los derechos humanos y del medio ambiente son silenciados y, cómo las mujeres se enfrentan al permanente reto de su participación en la vida política. Creemos que, para acabar con la pobreza, las voces de las personas más vulnerables y marginadas se tienen que oír y las instituciones tienen que rendir cuentas a todos los ciudadanos.

El capítulo 3 trata sobre los críticos niveles de violencia que experimentan en América Latina y el Caribe. Las desigualdades sociales y económicas se perciben como la mayor causa de violencia en la región. La violencia basada en crimen y pandillas es

Christian Aid cree que reflexionar sobre las formas en que las desigualdades se interrelacionan y afectan a las vidas de las personas es esencial para reducir desde la raíz las causas de la desigualdad en la región. Esto quiere decir que es necesario un acercamiento donde se tenga en cuenta el contexto para entender cómo se puede mejorar las vidas de aquellos a quienes afecta. Christian Aid está comprometida con el principio "que nadie se quede atrás".

solamente una faceta de esta, ya que los niveles de violencia de género y violencia basada en la identidad sexual son también extremadamente altos. Las normas sociales y una estructura patriarcal exacerban la violencia de género. Para mitigarla, los gobiernos tienen que ir más allá de las medidas políticas basadas puramente en la ley y el orden y centrarse en la puesta en marcha de medidas que generen empleo, proporcionen protección, faciliten el acceso a la justicia y, aspiren a un cambio de actitud.

En el capítulo 4 explicamos cómo unas políticas fiscales justas, incluida la reforma de política fiscal (sistemas tributarios más progresivos, eliminación del sesgo de género, lucha contra la evasión y la elusión fiscal y uso transparente y responsable de los incentivos fiscales), junto con un gasto social, tienen el potencial de desempeñar un enorme papel en la reducción de la desigualdad. La justicia fiscal debería ser una prioridad, dados los decrecientes niveles de ayuda internacional al desarrollo y la necesidad de financiar servicios públicos básicos para garantizar un desarrollo inclusivo y el respeto a los derechos humanos en la región, tal como prevén los ODS.

En el capítulo 5 describimos cómo el acceso a un empleo de calidad es uno de los grandes retos que se afrontan en la región y es uno de los obstáculos para alcanzar una futura reducción de la desigualdad. Resaltamos, cómo mujeres, poblaciones indígenas, afrodescendientes y comunidades rurales tienen un limitado acceso a empleos adecuados. El trabajo informal, los bajos salarios y las políticas laborales inadecuadas (incluidas las políticas sobre derechos laborales y la inversión en micro - pequeñas - medianas empresas) contribuyen, todas ellas, a una falta de oportunidades laborales para los grupos marginados. También, en el capítulo se habla sobre la problemática de los empleos sostenibles.

En el capítulo 6 destacamos la urgente necesidad de hacer la transición a modelos de desarrollo bajo en carbono. Los efectos del cambio climático ya se hacen sentir en la región, especialmente por parte de los más pobres y vulnerables. Si no se hace algo, el cambio climático puede hacer que crezca la desigualdad. También resaltamos la desigualdad en el acceso a la energía. Creemos que un desarrollo sostenible tiene que tener en cuenta no solo los aspectos económicos sino también los medioambientales y sociales. Afirmamos que el modelo de desarrollo de la región, que se basa primordialmente en las industrias extractivas y la expansión de las agroindustrias, debe cambiar. Las inversiones públicas y privadas deben apartarse de los combustibles fósiles y respaldar alternativas bajas en carbono.

Este informe se centra en áreas claves en las que Christian Aid/InspiraAction y sus contrapartes de toda América Latina y el Caribe reclaman y proponen acciones para reducir las desigualdades. No abordamos cada desigualdad, pero resaltamos algunas de las formas principales de desigualdad que consideramos que afectan al desarrollo de la región, como lo demuestra el trabajo con nuestras contrapartes.

Las mujeres se ven desproporcionadamente afectadas por la pobreza, marginación, discriminación, violencia, cambio climático y ausencia de oportunidades políticas o de empleo.



Más que dedicar un capítulo al género en este informe, consideramos los caminos en que las situaciones de desigualdad tienen un efecto diferente en hombres y mujeres.

Para que se dé un cambio, los gobiernos tienen que desarrollar y poner en vigor medidas políticas efectivas que aborden las distintas facetas de la desigualdad. En muchos casos dichas medidas se han desarrollado, pero los gobiernos no las han implementado o no se le ha exigido al gobierno su adecuada puesta en marcha. Los movimientos de redes sociales, ONG y organizaciones de fe tienen un importante papel de supervisar y el acompañar dicha implementación, así como también despertar el interés sobre estas problemáticas a los gobiernos regionales e instituciones globales que influyen en las políticas fiscales, medioambientales y de desarrollo mundial– y hacerlos responsables del advenimiento del cambio.

## Visión general de la desigualdad en América Latina y el Caribe



**Arriba** Típica casa familiar de Buenos Aires, Colombia. Contraparte de Christian Aid/InspiraAction Corambiente examina a los niños y suministra medicamentos antiparasitarios y suplementos nutricionales.

En América Latina y el Caribe las oportunidades de crecimiento están muy ligadas a dónde se haya nacido y a la identidad, lo cual incluye el género, grupo étnico, raza, religión u orientación sexual. La desigualdad de ingresos es solamente un aspecto de la situación, ya que hay enormes brechas en el acceso a servicios esenciales (de salud y educación), seguridad social (pensiones y permisos de maternidad) y acceso al empleo o a mercados para vender lo producido. Las mujeres sufren desproporcionadamente los efectos de la pobreza, marginación, cambio climático, discriminación y violencia.

El Presidente de Christian Aid, el doctor Rowan Williams, antiguo Arzobispo de Canterbury, se ha sumado a un creciente coro de voces, que incluye al ex-presidente de los Estados

Unidos Barack Obama y al economista francés Thomas Piketty, cuya preocupación aumenta ante la amenaza que la creciente desigualdad supone la cohesión social, la prosperidad y la democracia. Los niveles de desigualdad están aumentando en muchos lugares del mundo, incluso en países desarrollados como el Reino Unido, España y los Estados Unidos de América.

**Que el clamor de los excluidos se escuche en América Latina y en toda la tierra... La globalización de la esperanza, que nace de los pueblos y crece entre los pobres, debe sustituir esta globalización de la exclusión y la indiferencia.'**

Papa Francisco

Aunque la desigualdad ya no es un factor dominante solo de América Latina y el Caribe, la región mantiene lamentable distinción de ser la de mayor desigualdad en el mundo.<sup>1</sup> Las desigualdades, como las de origen de género, orientación sexual, raza, grupo étnico, religión, situación económica y situación geográfica, siguen afectando a la región y muchos de sus habitantes continúan sumergidos en la pobreza.

Sostenemos que disminuir la desigualdad – y especialmente en la que distintas desigualdades se relacionan en la vida de las personas– sigue siendo tan necesario hoy en América Latina y el Caribe como lo era cuando nuestro primer informe se publicó. *El Escándalo de la Desigualdad en América Latina y el Caribe*, publicado por Christian Aid en 2012, subrayaba el alto grado de desigualdad que se daba en toda la región.<sup>2</sup> Algo particularmente relevante en un momento en que los donantes se estaban apartando cada vez más de los llamados países de ingresos medianos y la desigualdad no estaba tan integrada en el ámbito del desarrollo como ahora. Aquel informe fue fundamental en situar la desigualdad en todas sus formas firmemente en la agenda de política e incidencia de Christian Aid/InspiraAction.

La desigualdad se resalta ahora más en el discurso general sobre el desarrollo y se vincula muy estrechamente con los ODS. Uno de los 17 objetivos, en el que todos los países de la región se han inscrito, se centra específicamente en la desigualdad y han situado la equidad mundial en el centro del debate sobre el desarrollo.<sup>3</sup>

El actual contexto regional y mundial presenta un camino cuesta arriba para tratar de reducir la desigualdad. Los crecientes efectos del cambio climático, la mayor polarización e incertidumbre en la situación política de muchos países, el poder en manos de élites y compañías multinacionales del mundo entero, junto con un reducido espacio en América Latina y el Caribe donde la sociedad civil pueda alzar su voz son factores que hacen que un cambio estructural sea un verdadero reto.

Creemos que debemos afrontar ese reto. La desigualdad está más que nunca presente en la agenda política. A nivel mundial, aspectos como el papel que juega la política fiscal en la reducción de la desigualdad, la violencia contra las mujeres y la desigualdad de género, así como el apoyo a quienes sufren los efectos del cambio climático, están teniendo más presencia en las agendas políticas.

Este informe resalta algunas de las áreas claves en que se percibe la desigualdad, asociadas con el foco estratégico de Christian Aid/InspiraAction y da sugerencias de cómo y dónde está y sus contrapartes consideran que tiene darse que el cambio.

## Pobreza y desigualdad económica

En *El escándalo de la desigualdad en América Latina y el Caribe* hablábamos de algunos de los avances en la región en la década previa a 2012. Desde 2003 más de 72 millones de personas han salido de la pobreza<sup>4</sup>. Más empleo, incremento en los salarios mínimos, medidas políticas para aumentar el gasto público (en particular los programas de transferencias monetarias condicionadas) y mejoras en la educación primaria han sido importantes en el advenimiento de este cambio.<sup>5</sup>

La nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible cubre los vacíos que quedaron en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La base social de la Agenda es más amplia y más ambiciosa, al tiempo que establece un vínculo más estrecho con los pilares económicos y medioambientales del desarrollo sostenible.<sup>1</sup>

Los 17 ODS que son el núcleo del plan de acción de la Agenda ponen el énfasis en sacar a las personas de la pobreza, mantenerlas a salvo de ella, y la importancia de mitigar las desigualdades, más allá de lo económico. El ODS 1 habla de terminar con la pobreza en todas sus formas y se complementa por el ODS 10, que aspira reducir la desigualdad entre y dentro de los países.

Los ODS buscan no sólo la igualdad de oportunidades sino de resultados. El informe de Christian Aid *Que nadie se quede atrás – de los objetivos a la aplicación* mostraba cómo el concepto “que nadie se quede atrás” está implícito en la ambición de erradicar la pobreza en todas sus formas de aquí a 2030.

Para países como Brasil, cuya desigualdad se oculta tras las estadísticas macroeconómicas, esto es esencial. Por ejemplo, a nivel nacional un 3% de brasileños ganan menos de la mitad del sueldo mínimo, y en territorios Quilombola ese porcentaje sube hasta el 18%.

Christian Aid aspira garantizar que a nadie –independientemente de su origen étnico, género, ubicación geográfica, discapacidad, raza u otros criterios- se le niegue el acceso a los derechos humanos universales o a las oportunidades económicas básicas.

Y esta sólo se debería considerar lograda si cada grupo – definido por nivel de ingresos, ubicación u otro criterio- la ha alcanzado.

Es necesario que los países de América Latina y el Caribe garanticen que la aplicación de los ODS significa que las poblaciones marginadas o los sectores más vulnerables de la población no se quedan atrás.

<sup>1</sup> Inclusive social development, ECLAC, 2015

Mientras que la desigualdad también descendió, se halló que el aumento del PIB había tenido un limitado efecto en la desigualdad de ingresos.<sup>6</sup> Esta reducción de la desigualdad podría haberse atribuido al auge de bienes de consumo y las altas tasas de crecimiento que se dio tanto en países de rápido como de lento crecimiento.<sup>7</sup> Los estudios disponibles sugieren que son las políticas gubernamentales (en particular políticas sociales y redistributivas e inclusivas) las que han sido críticas a la hora de reducir la desigualdad económica.

A pesar de ciertas mejoras, las desigualdades sociales, de ingresos y de riqueza permanecen profundamente ancladas en muchos sectores de la sociedad y en todos los países en los que desarrollamos nuestro trabajo. Tras una década de crecimiento económico y mejoras en varios indicadores sociales (como el acceso a los servicios básicos), el reto de superar las desigualdades estructurales aún está en juego en toda la región. Aunque millones de personas han salido de la pobreza, alcanzar los ODS es un reto ya que, por primera vez en muchos años, una parte de la población se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad. Algunas han vuelto a caer en la pobreza o están en peligro de hacerlo. Un modelo que depende de las exportaciones y por tanto está a merced de los precios de las mercancías ha dejado a la región en situación vulnerable y es esencial encontrar un modelo de desarrollo sostenible. La región tiene ahora los mayores niveles de violencia del mundo y la inversión en áreas vitales como la salud, la educación y la seguridad social a menudo sigue siendo casi inexistente.<sup>8</sup>

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) calcula que 1,7 millones de personas de la región volvieron a caer en la pobreza en el 2014 y que, para finales de 2016, se les unió otro millón y medio.<sup>9</sup> Christian Aid/InspiraAction reconoce que la desigualdad no es sólo resultado de la situación económica, sino que personas están en peligro de volver a caer en ella por catástrofes ambientales o por falta de políticas sociales. Las políticas sociales que abordan la desigualdad por razones de identidad – género, grupo étnico, orientación sexual o ubicación geográfica – son claves.

Esta contracción ha resaltado que es importante centrarse en encontrar no sólo maneras de sacar de la pobreza a las poblaciones, sino estrategias para asegurarse de que se mantengan a salvo de volver a ella. El PNUD destaca que:

“Los factores asociados con salir de la pobreza no son los mismos que aquellos vinculados con la resiliencia ante los eventos económicos, personales y ambientales adversos. Los primeros tienden a estar relacionados con el logro educativo y el mercado laboral. Los segundos, por su parte, tienden a relacionarse con la existencia de protección social (bajo la forma de transferencias de auxilio social o de pensiones no contributivas), y con el acceso a activos físicos y financieros”<sup>10</sup>

Los niveles de pobreza en la región se estimaron por parte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en un 29,2% de la población en el 2015 (comparado con un 28,2% en 2014), es decir, 172 millones de personas.<sup>11</sup> El aumento de la tasa de pobreza se dio especialmente en Honduras, México y Venezuela.

## Los orígenes históricos de la desigualdad en América Latina y el Caribe

La actual situación de desigualdad en la región tiene sus profundas raíces históricas en la distribución desigual de la tierra y otras formas de riqueza y poder político que beneficiaron a una pequeña oligarquía agraria y comercial. Con todo ello, tampoco hay duda de que las políticas aplicadas en el marco del Consenso de Washington recientemente tienen gran parte de responsabilidad.<sup>1</sup> Las pruebas de las dos últimas décadas del último siglo muestran que, en lo que a igualdad se refería, la región estaba retrocediendo.<sup>2</sup> La crisis de deuda a principios de los ochenta, seguida de los programas de ajustes estructurales y la aplicación de un modelo económico de libre mercado, llevaron a recortes generales en gasto social, la desregularización de los mercados laborales y privatizaciones generalizadas. Entre los efectos negativos estuvieron la baja creación de empleo, las altas tasas de subempleo, el rápido crecimiento de la economía informal, el debilitamiento de los sindicatos, salarios más bajos, un aumento en la inseguridad laboral y un empeoramiento en la prestación de servicios sociales. Desde la crisis financiera del 2008 la credibilidad del Consenso de Washington se ha visto minada, aunque desafortunadamente muchas de sus estructuras siguen implantadas en la región.

1 El Consenso de Washington propugnaba el libre comercio sin trabas, la liberalización financiera, la desregulación y la privatización.

2 La hora de la igualdad: Brechas por cerrar, caminos por abrir, CEPAL, 2010.



Millones de personas de toda la región siguen careciendo de acceso a servicios básicos, empleo y protección social. El Índice de Desarrollo Humano sitúa a Haití en el puesto 163 de 188 países.<sup>12</sup> Colombia, Guatemala, Haití y Honduras aún tienen niveles de desigualdad extremadamente altos y están por encima de 55 puntos en el coeficiente de Gini.<sup>13,14</sup> En toda la región, en el 2014, los ingresos per cápita del 10% más rico eran 14 veces más que los del 40% de la población más pobre.<sup>15</sup> Esto oculta también algunas extremas diferencias - por ejemplo en Brasil, Colombia y Guatemala los ingresos del 10% más rico son al menos un 17%, y en Honduras un 24%, más altos que del 40% de la población más pobre.<sup>16</sup> Es más, en Colombia el 1% más rico de la población gana el 20% de los ingresos totales (comparado con menos de un 10% en Europa).

Este informe destaca que la desigualdad y la exclusión se experimentan debido al cruce de un enorme número de factores basados en diferencias raciales, de género, de orientación sexual, edad, grupo étnico, discapacidad, ubicación geográfica y situación económica. Esto exige atención en la región y aún hay mucho por hacer para disminuir la desigualdad en dichos ámbitos.

El informe sobre Desarrollo Humano del PNUD para la región aborda las desigualdades tanto por encima como por debajo del umbral de pobreza y sobre la importancia de centrarse en cuestiones que incluyen el trabajo digno, la protección social, el sistema asistencial y las divisiones por razón de género asociadas con el trabajo del cuidado.<sup>17,18</sup>

## Desigualdad étnica y racial y violencia

Las poblaciones indígenas y afrodescendientes no han experimentado el crecimiento económico y la reducción de la pobreza en la década pasada de la misma manera que otros sectores de la población de América Latina y el Caribe. Las mujeres y hombres indígenas y las personas afrodescendientes se enfrentan a la exclusión y discriminación en el acceso a tierras, educación, servicios básicos, participación política y trabajo digno además de sufrir el racismo estructural y mayores niveles de violencia. El tema sobre la desigualdad, grupo étnico y raza se trata en el siguiente capítulo. Este informe aborda la desigualdad y la violencia, incluida la violencia que enfrentan las poblaciones indígenas, la violencia de género (VG) y las maneras en que la desigualdad contribuye a la clasificación de la región como uno de los lugares más violentos del mundo.

## Desigualdades territoriales

Existen grandes divergencias entre países, en términos de progreso, y las diferencias dentro de cada país también son de importancia. Las desigualdades entre territorios del mismo estado raramente merecen suficiente atención en la formulación de políticas nacionales y reducir esas brechas debería ser una prioridad nacional si la igualdad es parte de la agenda. Por ejemplo, en el 2013, un poco más del 40% de la población rural de América Latina y el Caribe estaba bajo del nivel de pobreza en ingresos, comparada con el 20% de la población urbana. Si se le suma a este cálculo quienes están en situaciones de vulnerabilidad económica, estos porcentajes suben aún más- hasta el 80% en el caso de las

poblaciones rurales y el 59% en el de las urbanas.<sup>19</sup> El acceso a la tierra es también una gran problemática en la región. Garantizar tierras y derechos culturales para los grupos étnicos rurales son claves y un requisito estructural para parar la desigualdad. La problemática sobre la tierra y la desigualdad se trata más a fondo en el capítulo sobre gobernabilidad y poder.

## Desigualdad por razón de género

La desigualdad por razón de género se manifiesta de muchas formas en la región. Si bien las mujeres han accedido a más cargos políticos en los últimos años, están sub-representadas en los cargos de poder. Cada vez más niñas y mujeres jóvenes están asistiendo a la escuela y llegando a la educación superior, pero con frecuencia las jóvenes más pobres, indígenas de zonas rurales, están en desventaja en comparación con sus más equivalentes en zonas urbanas. Mientras que más y más mujeres están accediendo al mercado de trabajo, sus salarios son inferiores a los de los hombres y a menudo trabajan en el “invisible” sector informal, en malas condiciones. Comparadas con los hombres, las mujeres pasan una cantidad de tiempo desproporcionada cuidando de los niños y otros miembros de la familia y ocupándose de las tareas domésticas, lo cual afecta sus oportunidades laborales, su autonomía económica, su independencia y su calidad de vida.

La violencia de género está generalizada en la región, incluidas la violación y el feminicidio, que a menudo quedan impunes. En Brasil un 52% de los jueces y policías no creen que ese tipo de violencia sea un problema.<sup>20</sup> Por tanto, incluso con leyes que apoyan a las víctimas de esa violencia – como la Ley Maria da Penha en Brasil-, su implementación ha fallado. Las políticas públicas y sociales son un requisito para que haya cambios, pero es necesario además un cambio cultural en el sistema patriarcal, que favorece el machismo. Los medios de comunicación, la educación formal y los servicios de salud pueden ser herramientas para avanzar, pero también pueden ir en detrimento de las mejoras en igualdad entre los hombres y las mujeres.

## Políticas de desarrollo, políticas fiscales y desigualdad

La ubicación geográfica pesa mucho en relación con la pobreza y la desigualdad, así que también debería pesar en la formulación de políticas públicas. Debería haber una discriminación positiva para las regiones más pobres – en términos de transferencias de impuestos, gasto social en bienestar, servicios sociales como salud y educación de buena calidad y estrategias de desarrollo económico que incluyan como mínimo programas de formación profesional, apoyo a las MIPYME y programas de desarrollo agrario. Este informe explora cómo la desigualdad determina las oportunidades laborales y cuáles son las medidas políticas necesarias para facilitar un acceso más justo a un trabajo digno. También, habla sobre la desigualdad de quienes viven en los lugares más afectados por el cambio climático y la necesidad de un modelo de desarrollo bajo en carbono.

La justicia fiscal tiene un importante papel en la reducción de la desigualdad en la región – no sólo a través de las transferencias de

### Lado a Lado: religión y justicia de género

Christian Aid apoya a Lado a Lado, movimiento mundial religioso para la justicia de género en donde muchas de nuestras contrapartes de América Latina y el Caribe son miembros. En su simposio latinoamericano, que se celebró en São Paulo en el 2015, hicieron una Declaración de Compromiso en la que destacaron cómo la desigualdad de género tiene un papel esencial en la desigualdad de la región y expresaron su compromiso de mitigar esa situación. “Reconocemos que las organizaciones religiosas han hecho varios esfuerzos por superar la opresión que experimentan las mujeres a través de proféticos actos de condena y proclamas. Sin embargo, reconocemos asimismo que hay casos en que las instituciones religiosas refuerzan los valores que subyacen a esa subordinación y son cómplices de los sistemas patriarcales. Dichos casos requieren que hagamos una autocrítica y enfatizamos la necesidad de reafirmar el papel transformativo de las organizaciones religiosas en la promoción de valores como la justicia, la inclusión y la solidaridad.”

impuestos sino también con la puesta en marcha de unos sistemas fiscales más progresivos, una inversión de ingresos tributarios en sistemas de protección social universal y unos sistemas más justos y transparentes para hacer inversiones en los países.

## ¿Un giro a la derecha?

A menudo se destaca como importante el giro hacia gobiernos de izquierdas de finales de la década de los noventa y principios de la siguiente, dado el mayor enfoque social de estos. Ese giro a la izquierda - con la elección de gobernantes como Hugo Chávez en Venezuela, Luiz Inácio “Lula” da Silva en Brasil - más tarde Dilma Rousseff en Brasil, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador- parece haberse revertido.

La impugnación de Dilma Rousseff, la elección de Mauricio Macri para sustituir a Cristina Kirchner en la presidencia argentina, la toma del control de la Asamblea Nacional por parte de la oposición venezolana, la elección de un antiguo banquero de inversiones en Perú y el “no” en el referéndum sobre el proceso de paz en Colombia – se consideran señales que apuntan a un retroceso en las tendencias progresistas observadas en la región en los últimos años. En una región donde las élites económicas y políticas (junto a empresas multinacionales) controlan gran parte de la riqueza, los recursos naturales y los medios de comunicación, otra transferencia más de poder hacia éstas supondrá retos extra para quienes reclaman unas políticas fiscales, sociales y medioambientales más justas y una reducción de la desigualdad.

Las circunstancias políticas tienen un papel importante en la configuración de las decisiones sobre el desarrollo que se toman en la región. Por ejemplo, el proceso de paz colombiano tendrá un indudable efecto en las futuras políticas de desarrollo. En Brasil el Instituto de Estudios Socioeconómicos (INESC), contraparte de de Christian Aid/InspiraAction, destacó que tras la impugnación de Dilma Rousseff en el 2016 el gobierno hizo recortes en áreas claves del presupuesto que estaban destinadas a disminuir la desigualdad. Eso incluyó una reducción del 23% del presupuesto para la Fundación Nacional para los Indígenas y una reducción del 56,3% en recursos potestativos para la Secretaría de Políticas de Promoción de la Igualdad Racial.<sup>21</sup> para los Derechos Humanos también sufrió un recorte del 56,3%. INESC señala que un peligro aún mayor para los derechos sociales en Brasil es la Propuesta de Enmienda Constitucional 241, que establece un techo al aumento real en gasto público primario (gasto social que promueve los derechos) durante 20 años, a pesar de que hay grandes aumentos de presupuesto para las agroindustrias y la inversión militar.

## La importancia de una perspectiva regional

Christian Aid/InspiraAction comprende la importancia que tiene la perspectiva regional en América Latina y el Caribe. Por ejemplo, apoyamos a nuestra contraparte Centro Regional Ecuménico de Asesoría y Servicio (CREAS), al Banco de Desarrollo Interamericano, al Banco de Desarrollo de América Latina, a economistas y teólogos claves para trabajar juntos en la creación de un diálogo de alto nivel sobre la arquitectura financiera internacional, de manera que se exploren oportunidades de hallar una economía

En Brasil y otros lugares, a medida que las posiciones políticas cambian en la región, hay un riesgo real de que las poblaciones marginadas pierdan derechos y medidas políticas positivas sólo recientemente disfrutados. Haití también merece una mención especial debido a su falta de estabilidad política y los efectos que eso tiene en las estructuras de toma de decisión y en el planteamiento del desarrollo en el país.

más inclusiva y ética para la región. Además, Latindadd, también contraparte de Christian Aid/InspirAction, continúa denunciando asuntos fiscales mundiales que afectan a la región y trabajando con el objetivo de abrir espacios para la sociedad civil en los organismos regionales como la Unión de Naciones Suramericanas.

A lo largo y ancho de toda la región las sociedades civiles están denunciando la reducción de espacios para dichas organizaciones, incluyendo casos de restricciones de acceso los medios de comunicación, cambios en la legislación sobre ONG y de sociedad civil y de violencia, incluso asesinatos, contra los activistas.

La continua agitación política y económica, la polarización y conflicto entre gobierno y oposición y el aumento de la violencia en Venezuela no sólo afectan a sus vecinos cercanos (Colombia, en particular) sino también a las perspectivas de acuerdos bilaterales con países como Nicaragua, Haití, la República Dominicana y a organismos regionales como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América.

## **Conclusión**

América Latina y el Caribe continúa siendo la región con más desigualdad del mundo. La experiencia nos muestra que mientras que el crecimiento económico puede conllevar una reducción de la pobreza, las desigualdades pueden retrasar significativamente ese proceso. Disminuir la desigualdad en todas sus manifestaciones requiere un cambio político que garantice unas políticas sociales inclusivas que no dejen a nadie atrás y un cambio económico que promueva sistemas fiscales más progresivos. Un desarrollo sostenible no debe suponer una amenaza para el medio ambiente. La sociedad civil, las organizaciones de fe y los movimientos sociales tienen un papel clave a la hora de hacer responsables a los gobiernos, pedir cambios y denunciar los casos de desigualdad. Todas las medidas – sociales, políticas y medioambientales- deben tener en cuenta las necesidades de los más vulnerables y aspirar a reducir la desigualdad. Es esencial que haya un cambio en las relaciones de poder para garantizar derechos para todos.



## 1. Desigualdad, identidad racial y étnica



Arriba Miembros de las comunidades Ch'orti' de Guatemala

América Latina y el Caribe es una región étnica y culturalmente diversa. Hay al menos 44,8 millones de indígenas y 150 millones de afrodescendientes,<sup>22</sup> que representan el 30% de la población de la región.<sup>23</sup> Las mayores poblaciones indígenas se encuentran en México, Perú, Bolivia y Guatemala,<sup>24</sup> y en la región se hablan aproximadamente 420 idiomas indígenas.<sup>25</sup> En países latinoamericanos como Brasil, Venezuela y la República Dominicana más de la mitad de la población es negra.<sup>26</sup>

A menudo poco reconocida y aceptada, la discriminación racial es grave en muchos países, donde tanto los grupos indígenas como los afrodescendientes experimentan directamente racismo, se enfrentan a maltratos, amenazas, violencia y sufren plenamente las discriminatorias políticas sociales, económicas y medioambientales. Muchos países de América Latina y el Caribe son conocidos por su mal desempeño en materia de igualdad de ingresos, y es bien sabido que los niveles de pobreza dentro los grupos étnicos (indígenas y afrodescendientes) son notablemente mayores que los del resto de la población. Estas comunidades son más pobres y excluidas del acceso a servicios sociales de calidad y del sistema político.

**'Discriminación fundamentada en identidad priva la oportunidad de una vida digna, dejando a las personas ya sea en estado de pobreza o dependencia'**

Christian Aid/InspiraAction

Christian Aid/InspiraAction ha expresado su compromiso con el principio de “que nadie se quede atrás” en el marco de su ambición por erradicar la pobreza en todas sus formas de aquí al 2030 con un enfoque basado en derechos humanos para el desarrollo. El monitorear el desempeño con respecto a la etnicidad es difícil en América Latina y el Caribe, ya que con frecuencia es difícil encontrar datos actualizados y desglosados por país.<sup>27</sup>

Para los grupos indígenas, que residen primordialmente en áreas rurales, el acceso a tierras es indispensable, ya es el principal recurso del que dependen para subsistir. Alrededor de un 45% de la Amazonía –espacio con mayor diversidad étnica y con la mayor proporción de idiomas indígenas de toda la región- está protegido por distintas jurisdicciones legales. Aunque el 21,5% de la zona se considera territorio indígena, hay pocas garantías de hecho para estos grupos accedan a ella, incluso para aquellos que están dentro de esas áreas protegidas.<sup>28</sup> En Brasil la sociedad civil ha acuñado el término “racismo ambiental” para describir las concepciones y estereotipos racistas utilizados para desestimar los derechos de los indígenas y afrodescendientes sobre sus tierras sobre.

## Guatemala

Guatemala es un país modelado en todo sentido por sus profundos niveles de desigualdad. Los altos niveles de pobreza y desigualdad alimentaron uno de los conflictos armados más sangrientos de la región, con violaciones a los derechos humanos de gran escala, que afectaron desproporcionadamente a poblaciones indígenas. Hay más de 6 millones de indígenas en Guatemala (el 60% de la población), entre los 22 grupos mayas, los finca y los garífunas.<sup>29</sup>

La pobreza en Guatemala se presenta principalmente en áreas rurales e indígenas, con tasas que se calculan en un 79% para los indígenas – frente al 46,6% para la población no indígena<sup>30</sup>. Para quienes viven en extrema pobreza hubo un aumento del 13,3% en el 2011 al 23,4% en el 2014. Mientras que 4 de cada 10 personas del entorno rural o perteneciente a comunidades indígenas están en la extrema pobreza, sólo 1 de cada 10 personas no indígenas o del entorno urbano están en la misma situación.<sup>31</sup>

Los indicadores sociales siguen reflejando una inversión insuficiente por parte del Estado en su población. Guatemala tiene un desempeño muy pobre con respecto a muchos indicadores de necesidades básicas. Su tasa de malnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años en el 2014 era alrededor del 46%,<sup>32</sup> y aunque ha mejorado levemente desde el año 2000, únicamente ha descendido 6,3 puntos porcentuales en años.<sup>33</sup> Al igual que en el caso de la tasa de pobreza, una vez que esa cifra se desglosa por grupo étnico emerge una imagen mucho más preocupante.

La tasa de malnutrición entre los niños y niñas indígenas es del 61,2%, casi el doble que la de los niños y niñas no indígenas (entre los que la tasa es del 34,5%).<sup>34</sup> Una mujer indígena tiene dos veces más posibilidades de morir en un parto que una no indígena. La tasa de alfabetización de las indígenas (de 15 años o más) es sólo del 57,6%, la tasa más baja por grupo étnico y sexo.<sup>35</sup> La cifra para las mujeres no indígenas es del 83,7%.<sup>36</sup>

## Huertas que transforman vidas



Sandra (a la izquierda) e Ingrid (a la derecha) son hermanas. Sandra sufrió de desnutrición a una edad muy temprana y su condición de salud era crítica. Sin embargo, la contraparte de Christian Aid, Bethania, ayudó a la madre de estas niñas, Irma, a construir una huerta, donde ahora ella planta tomates, rábanos, chipilines y moras. Vegetales que proporcionan las vitaminas y minerales necesarios para el crecimiento de estas niñas, que eran carentes en la dieta de la familia anteriormente.

Bethania ha también enseñado a Irma la importancia de la higiene y como mejorar la dieta en la familia. Dando como resultado que, Ingrid a la edad de tan solo cuatro años pese más que su hermana de 6. Irma atribuye esto a la mejor dieta que hay en su familia.

Christian Aid, Guatemala: Hunger and Urban Violence, reporte interno, 2014.

En Guatemala la brecha de género en educación es también preocupante, encontrándose mayor discrepancia entre la cantidad de niños y niñas que terminan la educación primaria de toda América Latina. Como es el caso de muchos otros países de la región, Guatemala ha avanzado hacia el logro de la educación primaria universal y las estadísticas nacionales dan la impresión de un progreso aceptable. Sin embargo, los datos sobre la tasa de finalización de educación primaria entre las niñas indígenas de áreas rurales no están disponibles. Según un informe del Banco Mundial, más de una quinta parte de esas niñas abandonan la escuela antes de finalizar su formación, y Guatemala no ha logrado su meta que en el 2015 el 100% de los niños y niñas completen su educación primaria.<sup>37</sup>

Las muertes infantiles por malnutrición en Guatemala siguen siendo motivo de profunda preocupación. Es uno de los cinco países con serios problemas en términos de malnutrición, superado sólo por Afganistán y Yemen.<sup>38</sup> A pesar del continuo descenso en las tasas de malnutrición (del 62% en 1987 al 46,5% en 2014/15<sup>39</sup>) no es claro cuánto se está haciendo para resolver esta situación. Durante los últimos 11 años Bethania, contraparte de Christian Aid/InspiraAction, ha reforzado su trabajo para combatir la desnutrición crónica infantil en comunidades Ch'orti.

## Brasil

En lo que concierne a la desigualdad, Brasil tiene el dudoso honor de registrar un coeficiente Gini del 0,62% durante varios años, “casi un récord histórico y mundial”.<sup>40</sup>

A pesar de los avances, aún existen fuertes desigualdades en este país. Se ha incrementado la asistencia a la escuela y ha habido mejoras en logros educativos por parte de las mujeres y niñas, con excepción de las comunidades indígenas y afrodescendientes, donde es más probable que las niñas se queden atrás y no exista mejores resultados laborales para ellas. También, sigue habiendo una brecha de salario y empleo además de segregación ocupacional y jerárquica para estas comunidades.<sup>41</sup> El origen étnico y la desigualdad razas es un problema cada vez más profundo en Brasil.

La población total es de 207 millones.<sup>42</sup> Los afrodescendientes representan el 53,6% del total de la población, mientras que la población blanca representa el 45,5%.<sup>43</sup>

Los Quilombolas son descendientes de la población negra que huyeron de la esclavitud en el siglo XIX y comenzaron una nueva vida en la selva. Entre las poblaciones afrodescendientes los Quilombolas merecen especial atención, debido a las altas tasas de exclusión y criminalización a la que se han visto sujetos.<sup>44</sup> Hay más de 2.800 comunidades Quilombolas presentes en todo Brasil,<sup>45</sup> principalmente en áreas rurales, que suman alrededor de 1,7 millones de habitantes.<sup>46</sup>

Dada la reputación progresista del Brasil de los últimos años, es pertinente preguntar cómo estas políticas públicas promueven la igualdad entre distintos grupos étnicos. Las comunidades Quilombolas proporcionan un estudio de caso útil. Ha habido indudables éxitos, como por ejemplo el Artículo 68 de la

La población indígena de Brasil es pequeña pero diversa. Hay 305 distintos grupos étnicos y 274 lenguas diferentes.<sup>1</sup> Los tikúna son el mayor grupo indígena. Hay 1.500 guaraníes viviendo en siete estados<sup>2</sup> y se calcula que 80 comunidades indígena viven sin contacto con el mundo exterior o en aislamiento voluntario.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> 'En Brasil, la población indígena es de 896.9 mil', Portal Brasil, 2015.

<sup>2</sup> Indios brasileños, Survival International.

<sup>3</sup> *El Mundo Indígena 2011*, Grupo Internacional de Trabajo para Cuestiones Indígenas, 2011.



Constitución brasileña, que concede el derecho colectivo a la tierra en estas comunidades. También ha habido algunos programas gubernamentales enfocados específicamente para estas poblaciones, como el Programa Brasil Quilombola. Este y otros programas de apoyo establecidos a nivel estatal les han proporcionado agua, electricidad, hogares, ayuda alimentaria y de salud, y servicios educativos. Programas que se necesitaban desde hace tiempo, dada la crítica situación en que muchas comunidades han estado viviendo. La malnutrición crónica en niños y niñas Quilombolas ha descendido un 38,2% en los últimos años (desde 18,6 % en el 2012 al 11,5% en 2014),<sup>47</sup> no obstante, continúa siendo un lamentable testimonio de una gran desigualdad.

Durante la década pasada el movimiento Quilombola ha emergido con más fuerza y presencia que nunca. La garantía constitucional con relación a la propiedad de tierra de los Quilombolas es única, no ha habido ningún otro caso de derecho colectivo a la tierra en Brasil. Más de 25 años después de los cambios constitucionales, sólo unas 230 comunidades Quilombolas han adquirido títulos de propiedad de sus tierras,<sup>48</sup> lo que representa sólo el 8% de las más de 3.000 comunidades que se calcula que existen. Esto se problemática se tratará más a fondo en el capítulo 3.

Los obstáculos incluyen una agencia de regularización de la propiedad de tierra ineficiente a la hora de manejar fondos asignados, y la introducción de procesos burocráticos más lentos y costosos. Esta inercia ha dejado a las comunidades Quilombolas vulnerables a las presiones del sector público y privado. Que, a su vez, ha traído conflictos locales, criminalización contra jefes de las comunidades y contra los defensores y defensoras de derechos humanos, además de campañas de difamación contra los Quilombolas y las comunidades indígenas, exacerbando aún más su exclusión social.<sup>49</sup>

La acción política para abordar esta problemática ha sido discontinua y mal gestionada. De hecho, tal y como mencionamos antes en este informe, se tomaron decisiones para reducir el presupuesto en el año 2016, incluido un recorte del 56,3% en recursos potestativos para la Secretaría brasileña de Políticas de Promoción de la Igualdad Racial. Una de las contrapartes de Christian Aid/InspiraAction, INESC, afirma que estos recortes limitarán la capacidad de coordinar políticas de discriminación positiva para fomentar la igualdad racial y acciones de desarrollo local para los grupos Quilombolas y otras comunidades tradicionales.<sup>50</sup>

Los conflictos por el uso de tierra involucran también afectan también a las comunidades indígenas. Un informe del 2014 del Consejo Indigenista Misionero destacó más de 130 asesinatos de indígenas, muchos de ellos ligados al conflicto de tierras, con el fin de minar la resistencia y provocar miedo en los líderes indígenas.<sup>51</sup> El mismo informe subrayó además que 600 territorios indígenas fueron reclamados por las familias, pero sólo dos fueron oficialmente reconocidos por las autoridades como territorios indígenas: Xeta Herarekã, en Paraná, y Xakriabá, en Minas Gerais. Aun así, ninguno de los dos, ha sido oficialmente puesto en manos de las familias.<sup>52</sup>

## Las mujeres Quilombola y los mercados institucionales

La falta de capacidad de poner en el mercado sus productos o acceder a los programas de comercialización institucionales son problemas que se encuentran especialmente las mujeres Quilombolas. Esto es así en parte porque la documentación oficial requerida es asignada

sólo a sus maridos, aunque el acceso a la educación y la responsabilidad de los cuidados y el trabajo doméstico también son factores que cuentan.

La CPI (Comisión Pro-Indio de São Paulo), contraparte de Christian Aid, ha estado trabajando con una comunidad en la remota zona de Oriximiná, en la parte norte de la Amazonia brasileña, para crear las condiciones que hagan que estas mujeres se sientan con capacidad y preparadas para pedir a los representantes del gobierno que se apliquen programas institucionales de comercialización en sus comunidades. En 2016, 30 mujeres obtuvieron licencias que les permitían oficialmente comercializar sus productos en mercados normales e institucionales.

Esto les permite emitir facturas y vender sus productos a programas del gobierno como el Programa Nacional de Alimentación Escolar y el Programa Nacional de Abastecimiento de Alimentos.

---

CPI-SP, "Mujeres Quilombolas de Oriximiná celebran la emisión de la DAP (Declaración de Aptitud para el Pronaf)", [www.cpisp.org.br/html/atuacao.html](http://www.cpisp.org.br/html/atuacao.html)



No se puede subestimar la fortaleza de la oposición al progreso en las desigualdades de la propiedad de la tierra particularmente en poblaciones étnicas minoritarias. Es fuerte, bien organizada y acompañada de violencia cuando es necesario. Es una situación volátil que trae al primer plano ‘dos de las más antiguas heridas nacionales: el acceso a tierra y el racismo’.<sup>53</sup> La lucha desigual de los trabajadores rurales, campesinos sin tierra, Quilombolas y pueblos indígenas contra poderosas élites agrarias y empresariales no da señales de retroceso.

## Bolivia

La desigualdad política es otro ámbito de gran envergadura en América Latina y el Caribe. Históricamente el racismo y la discriminación han logrado excluir a los pueblos indígenas y afrodescendientes de la toma de decisión. Sin embargo, esto está cambiando en algunos lugares de la región, ya que los movimientos indígenas y afrodescendientes aparecen como agentes políticos claves.

Tanto en Ecuador como en Bolivia hay partidos políticos indígenas organizados y, por supuesto, en Bolivia hay un presidente indígena.

Allí el cambio ha sido rápido y desde la elección de Evo Morales en el 2005 el gobierno empezó a aplicar un ambicioso programa de reformas para consagrar derechos políticos, sociales y económicos para las comunidades indígenas y afrodescendientes. Morales recibió un considerable apoyo de la mayoría indígenas del país (y de la reducida población afrodescendiente), con un claro mensaje: para revertir las históricas desigualdades a las que se enfrenta la marginada mayoría boliviana. Pero desde el comienzo el gobierno ha tenido que enfrentar una fuerte oposición política al abordar las desigualdades estructurales.<sup>54</sup>

Si bien es cierto que la nueva Constitución reconoce a los 36 grupos indígenas del país y aspira garantizar numerosos derechos para estas comunidades, el proceso de reforma de Morales ha estado plagado de problemas, no sólo por la oposición política sino también por la ambiciosa agenda de las reformas. Aun así, se han dado cambios, en especial con relación a la participación política de las poblaciones indígenas.

A pesar de los avances en la reducción de la pobreza – que ha caído desde el 63,1% en 2004 hasta el 39,3% en 2014- y la reducción la pobreza extrema en las áreas rurales desde un 65,6% (2005) a un 36% (2014),<sup>55</sup> dramáticas desigualdades persisten. La discriminación socioeconómica continúa afectando a los indígenas, en particular a las mujeres y a los habitantes del medio rural<sup>56</sup>.

Bolivia sigue siendo una sociedad en profundo conflicto, con frecuentes protestas. Los conflictos surgen tanto de los choques de los gobiernos con las élites, que se resisten a las reformas estructurales que podrían comprometer su poder político y económico, y a los choques entre el presidente Morales y aquellos grupos a los que se suele considerar como su núcleo de apoyo. La muestra más reciente es el controvertido proyecto de carretera conocido como TIPNIS (véase el caso de estudio “La Amazonia en peligro”).

## La Amazonia en peligro

En octubre del 2011 el presidente de Bolivia se dio marcha atrás espectacularmente en lo concerniente al proyecto de la construcción de una un proyecto de carretera en la Amazonia que había desatado protestas de los indígenas. La construcción de la carretera se paralizó en el 2011, cuando las organizaciones indígenas llevaron a cabo durante dos meses una dura marcha de protesta de 425 kilómetros, desde la cuenca del Amazonas hasta los picos de los Andes, donde está la sede del gobierno en La Paz. La marcha, que obtuvo miles de simpatizantes entre la población urbana y la atención de la prensa mundial, obligó al gobierno a paralizar el proyecto. Sin embargo, más de cuatro años de conflictos políticos esporádicos llegaron a su punto máximo en junio de 2015 cuando el presidente Evo Morales anunció sus planes de reanudar la construcción de una controvertida autopista que atravesaría directamente un parque nacional y reserva protegida indígena conocida como TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure)

“La Bolivia de Morales lleva adelante la controvertida autopista TIPNIS”, Mongabay, 2015.

La expansión de las industrias extractivas también pone de manifiesto algunas de las mayores contradicciones del discurso del gobierno de Morales sobre los derechos indígenas y ambientales de la Madre Tierra. Durante su mandato las operaciones de hidrocarburos han aumentado significativamente en la cuenca del Amazonas<sup>57</sup>, en el norte del país. Aun cuando la propiedad de las industrias extractivas haya cambiado – dada la mayor propiedad y participación del Estado en el sector– las implicaciones medioambientales y sociales no han variado. El aumento de las explotaciones de hidrocarburos ha generado también una notable tensión entre los grupos indígenas por todo el país y las autoridades. Es muy probable que los conflictos en torno al uso de la tierra también continúen.

## República Dominicana

A pesar de compartir la isla de La Española, hay marcados contrastes entre Haití y República Dominicana. Haití fue el primer Estado caribeño independiente y la primera república gobernada por negros, mientras que en el siglo XV la República Dominicana se convirtió en el primer asentamiento permanente de europeos en América. En las últimas décadas el desigual desarrollo económico y social entre los dos países ha llevado a un constante flujo de haitianos migrando a la República Dominicana con la esperanza de que este país -relativamente más rico- les dará las oportunidades económicas que no tienen en su país.

A pesar de la contribución que hacen a la creciente economía dominicana, los migrantes haitianos y sus descendientes son los más pobres entre los pobres. Reciben un trato desigual y sufren el generalizado racismo y discriminación a causa de su origen y el color de su piel.

Aunque el objetivo 16 de los ODS (paz, justicia e instituciones fuertes) es brindarle a todos una identidad legal, incluidos registros de nacimiento de aquí al 2030, miles de dominicanos de ascendencia haitiana (dominico-haitianos) viven sin el reconocimiento de la nacionalidad dominicana y carecen de acceso a servicios sociales básicos y de calidad por su percibida o inducida falta de legalidad en el país.

Aun cuando hace una importante contribución a la economía dominicana y continúan siendo una fuente esencial de mano de obra para muchos empresarios -por ejemplo, en la agricultura, la construcción y el servicio doméstico-, los migrantes ilegales haitianos y la población dominico-haitiana reciben frecuentemente un trato injusto por parte de quienes los emplean a causa de su falta de documentación legal.

Los patrones de migración históricos llevaron a un gran número de migrantes y a sus descendientes a vivir en *bateyes* (originalmente comunidades de trabajadores temporales de las plantaciones de azúcar). A pesar que la industria azucarera decayó, estas comunidades permanecen allí, con crecientes niveles de desempleo. Las condiciones de vida en los *bateyes* son muy malas y sólo pueden ser descritas como desoladoras. Con mayor frecuencia, los migrantes haitianos y sus descendientes se han ido concentrando más y más en los barrios urbanos pobres de las ciudades del país.

El 23 de septiembre del 2013 el Tribunal Constitucional de la República Dominicana dictó una sentencia que revocaba la nacionalidad a los hijos e hijas de migrantes no autorizados nacidos en la República Dominicana a partir de 1929, considerando que estaban “en tránsito” y, por tanto, que no tenían derecho a la ciudadanía. El gobierno propuso un plan de nacionalización al que algunos podían optar.<sup>58</sup>

Para los dominicanos descendientes de haitianos, las vías para que se reconozca su ciudadanía o para su nacionalización, continúan siendo complicadas, dado que carecen de la documentación requerida y al coste del proceso, entre otras razones. Miles de ellos están aún en un limbo legal contrario a lo que dice el gobierno en sus discursos. El apoyo de la opinión pública y las acciones políticas para que se garantice la devolución de la plena ciudadanía a los hijos e hijas de migrantes haitianos nacidos en la República Dominicana, han perdido fuerza. Para los trabajadores migrantes haitianos la situación sigue siendo incierta, con el riesgo de una repatriación obligatoria o “voluntaria” desde la República Dominicana.

En ambos países el acceso a los documentos de identidad es una cuestión crítica y falta voluntad política clara, para resolver el problema. Por la parte dominicana, décadas de objeciones sistemáticas son el principal obstáculo al acceso a documentos de nacionalidad. En Haití, un desinterés de décadas por la mayoría de derechos humanos y una escasa capacidad del gobierno son los principales responsables.

En cualquier caso, el efecto es el mismo en ambos países: miles de personas sin documentos de identidad haitianos o dominicanos, que son necesarios para ejercer los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos básicos. Al mismo tiempo, la negativa de ambos países para configurar una política migratoria acordada y mutuamente asumida ha condicionado las vidas y las fuentes de ingresos de cientos de miles de personas que tienen una muy limitada -o inexistente- posibilidad de recurrir a la ley.

Christian Aid/InspiraAction, en colaboración con contrapartes locales como el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes y el Movimiento de Mujeres Dominico-haitianas, han hecho campaña durante muchos años para proteger y defender los derechos de los migrantes haitianos y sus descendientes.

En 2016 Christian Aid/InspiraAction, con la Iglesia Episcopal dominicana, World Vision, Norwegian Church Aid y Centro Bonó organizó el primer congreso ecuménico del Caribe sobre migraciones en la región, con 25 representantes de países entre los que estaban la República Dominicana, Haití, Cuba, Puerto Rico, Estados Unidos, Panamá, Costa Rica y Guatemala. El principal objetivo era colaborar en la construcción de una cultura de paz en las sociedades caribeñas y promover una cultura migratoria basada en los derechos, la solidaridad y la fe. Esta conferencia permitió a los participantes entender cómo mejorar la acción pastoral para los migrantes centrándose en los derechos y desde una perspectiva de fe cristiana.<sup>59</sup>

## Relacionando desigualdades en República Dominicana

La situación de mujeres dominico-haitianas es más preocupante que la de los hombres. Las mujeres - normalmente pobres, sin educación, negras y con frecuencia residentes en áreas rurales - enfrentan una discriminación y marginalización más incidente debido a las diferentes maneras que las desigualdades de relacionan entre sí y el impacto que tienen sobre sus vidas.

Con frecuencia las mujeres entablan una relación con hombres para establecer una figura masculina en sus vidas que las proteja de la persecución local y les ayude a obtener sus documentos de identidad en el país.

La persecución contra estas mujeres puede tomar diferentes formas. Algunas mujeres, soleteras, son obligadas a salir de sus comunidades e ir a Haití, un país del que ellas no saben mucho, excepto que sus abuelos son procedentes de allí.

En los *bateyes* (anteriormente plantaciones de caña de azúcar), 43% de niños y niñas por debajo de los 5 años no tienen certificado de nacimiento y 35% por debajo de los 16 años no tienen documento de identidad.<sup>1</sup> La falta de ID excluye a estos jóvenes de ingresar a la escuela, conseguir un trabajo formal, casarse, ir a la universidad, abrir una cuenta bancaria, entre otras actividades cívicas.

<sup>1</sup> Encuesta Sociodemográfica y sobre VIH/SIDA en los Bateyes Estatales de República Dominicana, USAID, 2015.

Sin embargo, el país aún está lejos de aplicar las reformas necesarias y disminuir genuinamente la generalizada discriminación y desigualdades que persisten en la República Dominicana. Al parecer las violaciones de los derechos humanos que sufren los inmigrantes haitianos y la población dominico-haitiana pasan desapercibidos para muchos en esta isla, un destino turístico de primer orden para europeos. Esta tremenda situación merece mucha más atención de la comunidad internacional de la que ha recibido hasta ahora.

## **Conclusión**

La discriminación por razones culturales y étnicas es claramente un asunto pendiente en la región, lo que lleva a actos discriminatorios y racistas. Las desigualdades entre grupos étnicos imperan. Las brechas son grandes y hay claras pruebas de que en algunos casos están aumentando. Debería haber una profunda preocupación en la región porque, si bien los avances de la última década han sido moderadamente favorables, los grupos indígenas y afrodescendientes se están quedando atrás. La falta de datos fiables, coherentes y desglosados agrava el problema, haciendo mucho más difícil evaluar y abordar correctamente esta problemática.

El asunto de la tierra continua sin resolverse, afectando desproporcionadamente a las comunidades indígenas y afrodescendientes. Hay claramente en marcha una lucha sumamente desigual entre las privilegiadas élites políticas y económicas blancas y las poblaciones indígenas o negras pobres y aisladas, a menudo vistas como 'inferiores' y como una sub-clase campesina. En conjunto la región, es carente del reconocimiento de las desigualdades étnicas y la discriminación. Hay escasez de políticas públicas específicas para abordar dichos problemas y corregir los desequilibrios en beneficio de los grupos y territorios más vulnerables y menos favorecidos.



## 2. Desigualdad, gobernabilidad y poder



**Arriba:** Niños indígenas y afrodescendientes durante el acto que marcó la extensión del “espacio humanitario” de Buenaventura donde se incluía al puerto comunitario de Punta Icaco. La frase que forman, “Sin olvido”, hace referencia al historial de violaciones de los derechos humanos.

La desigualdad no es sólo cuestión de distribución de ingreso, sino primordialmente una cuestión de quién tiene el poder. El uso de los indicadores macroeconómicos para medir la desigualdad es deficiente, ya que no refleja esta realidad. Los abusos de poder han llevado a enormes escándalos por la corrupción en Brasil, Aun así, Honduras y Guatemala, desencadenando protestas generalizadas. Aun así, dichos actos no resultaron en reformas, sino reacciones de supresión y una reducción del espacio cívico. Esto muestra una clara advertencia sobre el creciente populismo o el creciente apoyo cada vez mayor a líderes con ideologías menos democráticos en América Latina y el Caribe. A menos que se lleven a cabo reformas, es probable que el electorado de la región no sólo vote por un humorista como Jimmy Morales (en Guatemala) o fuerce un aplazamiento del voto, como ocurrió en Haití, sino que vote por candidatos similares a Donald Trump en Estados Unidos o Rodrigo Duterte en las Filipinas, lo cual es más preocupante. Los hechos indican que la región tiene mucho trabajo pendiente por cumplir con el ODS 16: “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el

**‘La sociedad civil está cuestionando las formas establecidas de liderazgo, pero aún se tienen que crear otras. Aunque los latinoamericanos no tienen tanta simpatía por los dictadores como en el pasado, podrían emerger nuevos tipos de política antidemocrática. A menos que los políticos electos den respuesta al crimen, el bajo crecimiento, la desigualdad y la corrupción’**

Marta Lagos, directora fundadora de Latinobarómetro.

desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficientes, responsables e inclusivas a todos los aspectos”.<sup>60</sup>

Las sociedades crean: poderosas instituciones (gobiernos locales y nacionales), el sector privado y las agencias intergubernamentales. Dichas instituciones tienen la capacidad de servir a los ciudadanos, pero en ocasiones sus actos son irresponsables, afectando a grupos vulnerables y marginados. Para acabar con la pobreza hay que hacer que se escuchen las voces de los más vulnerables y marginados, y las instituciones tienen que responder ante todo a los ciudadanos según el principio de igualdad.

Todo el mundo tiene el derecho de ejercer el poder para proyectar su futuro y tomar parte en las decisiones claves que afectan lo afectan, independientemente de su riqueza, estatus, género o identidad sexual o étnica/racial.

Aunque parece una realidad que el dinero compra el poder, en América Latina y el Caribe, las preexistentes estructuras desiguales de poder han dado lugar a resultados socioeconómicos altamente desiguales. El papel y la influencia de la élite, tanto económica como política, ha exacerbado durante siglos un desequilibrio en las estructuras de gobierno, lo cual ha llevado a una persistente desigualdad y a un mayor conflicto social. Esto se ha fomentado por la creciente influencia que las empresas multinacionales tienen en los gobiernos de la región y que afecta a la toma de decisiones en esos países. Haití, el país más pobre del hemisferio oeste, ha estado en manos de un gobierno provisional desde febrero del 2016, cuando protestantes y partidos de la oposición forzaron un aplazamiento después de que el candidato de la oposición Jude Celestin alegase fraude y se negase a participar en la segunda vuelta. Las elecciones finalmente concluyeron, pero más de seis meses después de lo planeado.<sup>61</sup>

En el informe anterior analizamos la influencia de las élites y, más específicamente, la relación con la reforma agraria en el marco de acuerdos políticos.<sup>62</sup> Un documento especial de Christian Aid/InspiraAction sobre los acuerdos políticos señalaba que “poderosas élites locales y nacionales un problema importante y obvio que nadie quiere mencionar durante los debates sobre desarrollo internacional. Siempre están en condiciones, y por definición en capacidad de incumplir, frustrar o incluso revertir reformas de gobernabilidad y cambios institucionales favorables al desarrollo”<sup>63</sup>

### **Derechos sobre las tierras**

La propiedad de la tierra es otra área clave responsable de la arraigada desigualdad estructural de la región. El centrarse en las agroindustrias orientadas a la exportación y en las industrias extractivas ha llevado a una reconcentración de la propiedad de la tierra en los últimos 10 años – en una región donde la riqueza y la propiedad de la tierra ya han sido durante décadas motivo de preocupación.

Las élites (con fuertes vínculos con empresas

multinacionales) se benefician notablemente de esta situación. No sólo la tierra está concentrada en manos de unos pocos individuos (predominantemente hombres blancos) y grandes empresas, sino que además los sistemas fiscales nacionales no les exigen que tributen lo justo por ese patrimonio.

Es más, en algunos casos en que se han hecho intentos de mejorar la situación, las reformas agrarias que benefician a los pobres en áreas rurales han hallado una oposición violenta. *Página siguiente*

*Continuación de la página 26*

Christian Aid/InspiraAction en Irlanda describe los desequilibrios de poder asociados a la tierra así: “Los desequilibrios de poder en lo relativo a las tierras pueden perpetuar la desigualdad por razones de género. En muchos países el acceso y derecho sobre las tierras se basan en sistemas jerárquicos, patriarcales y de segregación en los que los pobres, los menos educados y una gran mayoría de mujeres no tienen ninguna seguridad de poder conservar las tierras<sup>64</sup>”

Muchos de esos problemas afectan gravemente a los indígenas y afrodescendientes. Para los grupos indígenas – muchos de los cuales están ubicados en áreas rurales – la problemática de la tierra es crítica, ya que es su principal recurso, del que dependen para subsistir. En ningún otro punto son más evidentes las brechas étnicas que en relación con la propiedad de la tierra.

La expansión de las agroindustrias, las industrias extractivas, el turismo, las industrias de biocombustibles y otras es, en el mejor de los casos, permitida y, en el peor, promovida activamente – incluso cuando dichas actividades van directamente en detrimento de las comunidades étnicas más pobres.

Esta rápida expansión territorial es un rasgo de muchos países en los que Christian Aid/InspiraAction trabaja (Bolivia, Colombia, Brasil y, cada vez más, América Central, sobre todo Honduras, Guatemala y Nicaragua). Los gobiernos fallan en general en la protección de estas comunidades de amenazas y perjuicios y la cuestión del acaparamiento de tierras es algo que se ha abordado deficientemente en la región.

### **Brasil: la mayor concentración de tierras del mundo**

Aunque los gobiernos de Lula y Dilma supervisaron cierta expansión de programas de distribución de tierras rurales e incrementaron la cantidad de registros de pequeñas y medianas propiedades rurales, el área total es aún diminuta.

De hecho, en Brasil – que era ya el país del mundo donde la propiedad de la tierra está más concentrada – ha habido un aumento de la concentración de la propiedad agraria en las manos de grandes terratenientes nacionales e internacionales durante la pasada década. Los grandes terratenientes usan ahora más intensivamente el capital y la tecnología, lo que les permite ganar rápidamente cuotas del mercado externo y concentrar aún más su posición dominante. Hay un enorme potencial para que los

impuestos sobre el patrimonio fomenten la igualdad si se diseñan correctamente. Las 5.000 familias más ricas poseen un patrimonio calculado en un 40% del PIB del país y aun así los impuestos sobre el patrimonio siguen siendo pasados por alto como una fuente viable, y equitativa, de ingresos tributarios. Actualmente el principal impuesto sobre el patrimonio gestionado por el gobierno federal es el impuesto sobre la propiedad rural. Su contribución al total de ingresos tributarios es irrisoria, siendo tan sólo el 0,06% de la recaudación en 2008.<sup>65</sup>

### **La titularidad de tierras como obstáculo para el desarrollo en Haití**

Haití es un perfecto ejemplo de cómo los derechos de propiedad y de titularidad de las tierras actúan como una barrera para el crecimiento y la reducción de la desigualdad. La tierra está concentrada en las manos de unos pocos. Además, un sistema informal de derechos a la tierra combinado con un sistema legal complejo y arcaico constituyen un gran obstáculo para el desarrollo. El Fondo Monetario Internacional señala que un sistema claro que identifica debidamente los límites de cada parcela y establece claramente la propiedad permitiría que las tierras se usasen como aval, además de aminorar los costosos y largos conflictos en torno a los derechos sobre los terrenos.<sup>66</sup> Es más, un sistema de propiedad agraria claro y transparente también sería un punto de partida para una fiscalidad más justa de la tierra y el patrimonio.

### **Las tierras, en la base del conflicto armado en Colombia**

Los intereses económicos y la adquisición de tierras han estado en el fondo del conflicto armado interno en Colombia. Un reciente informe de ABColombia, contraparte de Christian Aid/InspiraAction, afirma que a la fecha de mayo del 2016 casi 7 millones de personas se habían visto involuntariamente desplazadas dentro del país.<sup>67</sup>

Se espera que, finalmente, el acuerdo revisado de paz que han acordado el Senado y el Congreso de Colombia <sup>68</sup> ponga fin a la grave violencia que ocasiona que las personas pierdan su hogar y sus tierras. Por ejemplo, ABColombia señala que en dos meses de la primera mitad del 2016 más de 6.000 personas huyeron de sus hogares en Chocó (uno de los 32 departamentos del país).

Escapaban de las escaramuzas armadas entre grupos que luchaban por controlar el territorio. Muchos terratenientes que habían obtenido sus tierras como resultado del desplazamiento forzoso de campesinos

*Siguiente página*



### Continuación de la página 28

por parte de grupos paramilitares de extrema derecha estuvieron entre los que votaron “no” en el referéndum sobre el acuerdo de paz en Colombia.

Es más, aún es necesario apoyar a aquellos que han conseguido recuperar sus tierras, según la Ley 1448, que reconocía la propiedad de la tierra y los derechos

de las víctimas por recuperar sus parcelas, las comunidades pueden embarcarse en un proceso de restitución de tierras.

Sin embargo, ABColombia también señalaba que los campesinos y los grupos étnicos que han recuperado sus tierras gracias a esta ley informan de una falta de apoyo estatal a largo plazo.<sup>69</sup>

## Megaproyectos

La proliferación de los llamados megaproyectos (grandes proyectos de infraestructuras o minería) es otro ejemplo de desequilibrios de poder – en este caso el poder de las compañías multinacionales sobre las comunidades y el control de sus tierras y fuentes de ingresos. Este asunto es cada vez más preocupante para las comunidades (predominantemente indígenas o afrodescendientes) en toda la región. Los proyectos de extracción y minería extensiva, las represas de energía hidroeléctrica o las grandes vías de comunicación como las autopistas o el propuesto canal de Nicaragua muestran una amenaza para comunidades de toda la región. Entre esto y el derecho a la tierra hay un estrecho lazo de unión, pero la cuestión va más allá: es una amenaza para el desarrollo sostenible, el medio ambiente local y los derechos humanos.

La aplicación de incentivos fiscales a los tratos con compañías extranjeras para llevar a cabo megaproyectos significa que a menudo el país deja de percibir ingresos tributarios.

Muchos consideran que los megaproyectos son una amenaza para la justicia social en América Latina. Si bien proponen grandes programas de producción de energía, transporte o minería, también cuentan con la desregulación, la concentración de riqueza y las injustas políticas fiscales para obtener los éxitos que obtienen, incrementando al mismo tiempo la desigualdad y, en ciertas zonas, la violencia general y de género.

La legislación y el control de la tierra, así como los insuficientes o inexistentes procesos de consulta locales, e incluso la criminalización de quienes protestan son recursos cada vez más usados por los gobiernos para asegurarse de que los megaproyectos salgan adelante.

Esto es así a pesar de que muchos gobiernos han firmado el Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT C169) sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales.

En octubre del 2015, conscientes del alto grado de preocupación por este asunto en toda la región, 12 organizaciones de mujeres (incluida la contraparte de Christian Aid/InspiraAction en Colombia Brigadas Internacionales de Paz) presentaron un informe sobre la criminalización de las mujeres defensoras de los derechos ambientales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Expusieron casos documentados de abusos y acciones a nivel regional. Contrapartes Christian Aid/InspiraAction como el Movimiento Nacional de personas Afectadas por represas (MAB, por sus siglas en portugués), en Brasil, están dando visibilidad y se manifiestan en contra de las amenazas a la tierra, el medio ambiente y los derechos humanos, así como también cuestionan la inversión en proyectos de este tipo en toda la región.

En Brasil en abril del 2016 alrededor de 160 hombres y mujeres Quilombolas viajaron durante dos días desde sus comunidades en Oriximiná, en la selva amazónica, hasta la ciudad de Santarém para protestar contra el retraso en recibir los títulos de propiedad de sus tierras, tal y como les garantiza la Constitución brasileña. Los Quilombolas informaron de que los procesos empezaron hace más de 10 años y ahora están paralizados. Esta situación hace a la población más vulnerable al desarrollo de la minería en sus tierras.

---

“Para autorizar la minería y la explotación maderera el gobierno no tiene problema en tomar la pluma y firmar, pero cuando se trata de otorgar títulos de propiedad de las tierras Quilombolas, parece que no encuentran la pluma. Queremos los títulos de propiedad de nuestras tierras. Estoy aquí junto con todos los Quilombolas para decir “¡Derecho a la tierra, ya!”, Aluizio Silverio dos Santos, miembro del liderazgo Quilombola

---

En Oriximiná hay en torno a 10.000 Quilombolas. Los derechos de los Quilombolas a poseer sus tierras

*siguiente pagina*



*Continuación página 28*

fueron reconocidos en 1988 en la Constitución brasileña y están fundados por el Convenio número 169 de la OIT.

A pesar de todo, los Quilombolas tienen dificultades para obtener la titularidad de sus tierras y proteger sus bosques. Sin embargo, en claro contraste, la explotación maderera y la extracción de bauxita han sido autorizadas, lo que indica una amenaza para los Quilombolas y las familias ribereñas asentadas en esas zonas.

Tras una visita a zonas afectadas facilitada por CPI, contraparte de Christian Aid/InspiraAction, la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas alertó sobre la situación de los Quilombolas de Brasil en su informe del 2016 y declaró que “hay cierto número de megaproyectos con graves efectos potenciales para los derechos de los indígenas. Entre ellos hay proyectos sobre los cuales no se hizo una consulta previa a los pueblos indígenas u otros grupos minoritarios como los Quilombolas de Oriximiná, en Pará”.<sup>70</sup>

MAB, contraparte de Christian Aid/InspiraAction, también trabaja en Brasil con mujeres afectadas por la construcción de represas, capacitándolas para influir en la comunidad y en las autoridades locales en lo referente a sus derechos. Las mujeres afectadas por estos proyectos de infraestructuras cuentan que los cambios en la comunidad se dan incluso antes de que los proyectos sean aprobados.

Debido a la noticia de que se iba a construir la represa la gente empezó a tener miedo de invertir en su producción.... agrícola y perder todo después por culpa de la represa. Algunos ya han empezado a poner en venta sus tierras. Yo no me quiero ir.” Josefina Maria das Graças Oliveira, jubilada, residente desde hace 50 años en la comunidad Pimental, que se ve ahora amenazada por la construcción de una represa para energía hidroeléctrica.’

El ICEFI afirma que los problemas asociados a la minería en Guatemala están causando conflictos sociales y ambientales en las comunidades rurales próximas a las minas.<sup>71</sup> Los desplazamientos de población y la contaminación de la tierra, el aire y las fuentes de agua, además del incremento de casos de violación de derechos humanos y la ausencia de consultas y de transparencia en cuanto a los acuerdos y beneficios contribuyen a que dichos proyectos sean conflictivos. En Guatemala las compañías mineras de propiedad extranjera llegan habitualmente a acuerdos con el gobierno para pagar poco o ningún IVA u otros impuestos, generando así pocos ingresos para reinvertir en proyectos de desarrollo.

El ICEFI subraya la necesidad de más debate público sobre los costes y beneficios de la minería como opción de desarrollo. Esta afirmación parece cierta en lo relativo a megaproyectos en toda América Latina y el Caribe. Su coste en términos ambientales y sociales, especialmente para las comunidades indígenas y afrodescendientes, no puede menospreciarse.

Merece la pena investigar más a fondo las percepciones regionales sobre el permanente problema relacionado con la gobernabilidad, el poder y la desigualdad examinando los resultados del Latinobarómetro del 2016, un estudio sobre la opinión pública.<sup>72</sup> Según éste, la proporción de latinoamericanos que piensan que las élites gobiernan en su propio interés es en promedio del 73% - el porcentaje más alto en los últimos 12 años. Por primera vez la proporción de personas que dicen que su país está retrocediendo es mayor a la de aquellos que dicen que están progresando.<sup>73</sup>

En los países donde los “espectáculos” de los líderes políticos generan más rechazo, el apoyo a la democracia ha descendido. En un giro insólito, aunque comprensible, entre 2015 y 2016 el apoyo a la democracia en Brasil cayó 22 puntos porcentuales, hasta un nivel de tan sólo el 32%, y está claramente vinculado con la actual lucha contra la corrupción y con la crisis política. En tres de los cuatro países de América Central en que trabaja Christian Aid/InspiraAction -El Salvador, Guatemala y Nicaragua- el nivel de apoyo es el más bajo de los últimos 10 años.<sup>74</sup>

En Bolivia y Brasil la corrupción es el primer o segundo motivo de preocupación para la población y en la región, en general dos quintos de la población consideran que la corrupción está aumentando. Será importante monitorear cómo estos países muestran voluntad política de “reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas”, como se afirma en el ODS 16 (Meta 16.5)

La reacción de los guatemaltecos fue elegir a un humorista como presidente. Jimmy Morales no tenía ninguna trayectoria política. Hizo campaña con un programa contra la corrupción en un momento en que los escándalos por esta, especialmente el caso “La Línea”, llevaron a la renuncia del Presidente y la Vicepresidenta en su momento. La Línea es el caso de una red de fraude aduanero que reduce impuestos a los importadores a cambio de comisiones. Las pruebas halladas en grabaciones parecen indicar que el Presidente y Vicepresidenta supervisaron las operaciones de la red.<sup>75</sup> Los fiscales afirman que se pagaron millones de dólares en sobornos.

Dada la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos en noviembre del 2016, se podría decir que la reacción de rechazo en toda la región a la “élite política” refleja una tendencia mundial. Aunque la encuesta del Latinobarómetro muestra que un 54% de los encuestados aún cree que la democracia es mejor que cualquier otro sistema, hubo una reducción de dos puntos porcentuales con respecto al 2015.<sup>76</sup> Los acontecimientos en la región ponen de manifiesto la creciente frustración de la población por la falta de reformas, lo que podría llevar a apoyar tácticamente a “líderes con ideas menos democráticas”. “Puede que digan que la democracia es mejor, pero ya que no ha podido resolver nuestros problemas, vamos a probar con algo distinto” afirma algunos cuidados. La sociedad civil de toda la región está canalizando su indignación por la corrupción política e institucional a través de multitudinarias manifestaciones como las de Brasil, Guatemala y Honduras.

En algunos casos, como en Guatemala, las protestas en las calles han llevado a cambios políticos de alto nivel. Sin embargo, éstas se han encontrado a menudo con una respuesta violenta del Estado, lo cual da indicios de que hay una tendencia general a reducir el espacio cívico. A lo largo de los últimos años – y aprovechando su papel de anfitrión del Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos del 2016- en Brasil se ha visto un aumento de las protestas en las calles. En principio esto se debió a la indignación pública por la corrupción, los malos servicios públicos y el aumento del crimen, con el fondo del enorme gasto público (asumido) por esos acontecimientos. Gradualmente las protestas se convirtieron en una vía de expresión contra la clase política, a medida que un creciente número de escándalos de corrupción salía a la luz. Las organizaciones de derechos humanos expresaron su preocupación por la criminalización de las protestas sociales y la persecución de los movimientos sociales y de la sociedad civil.<sup>77</sup>

## La desigualdad y la participación en la vida política en Bolivia



**Arriba:** Blanca Pia Poma Coronel (izquierda) es consejera en su gobierno municipal local, en Laja.

La participación de las mujeres y los indígenas en ámbito político sigue siendo un asunto pendiente en la región. En Bolivia las cuotas y las normas legales sobre paridad de género pueden tener éxito a la hora de incluir mujeres en el parlamento, pero, una vez ahí, están bajo presión para votar de acuerdo con la línea partidaria, impidiéndoles cuestionar lo establecido y limitando su potencial de promover “los intereses de las mujeres” y avanzar en la agenda de igualdad de género. Ha habido informes sobre acoso e incidentes de humillación pública contra mujeres electas para cargos oficiales con el fin de obligarlas a renunciar, de manera que el candidato alternativo, normalmente un hombre, pudiera asumir el puesto.<sup>78</sup>

Es oportuno mencionar que, ha habido significativas áreas de progreso político para los indígenas y afrodescendientes y se están viendo pruebas de una tendencia a nivel nacional en relación con mejoras socioeconómicas.

En 11 de octubre del 2016, Día Nacional de la Mujer

en Bolivia, el gobierno aprobó una ley para: “Establecer mecanismos que prevengan, ocupen y establezcan sanciones contra los casos de acoso político y/o violencia contra las mujeres para garantizar sus derechos políticos.”<sup>79</sup>

La creación por ley de cuotas ha dado como resultado desde 1997 una mayor presencia de mujeres en las elecciones y un 47% de puestos en los consejos municipales ocupados por mujeres en Bolivia.

Aun así, quedan muchos retos en la aplicación de la ley. Ésta no incluye la protección de las mujeres que pertenecen a organizaciones de la sociedad civil y muchos funcionarios públicos no están al tanto de esta ley o de lo que esta ley establece. Además, el acosador a veces se convierte juez y las mujeres en el parlamento que quieren denunciar una situación de acoso o violencia sufrida ante la corte tienen que renunciar antes.

Aunque es progresista, esta ley no afecta los papeles tradicionales de género en la sociedad boliviana y, por lo tanto, no ayuda a eliminar las barreras para la participación de las mujeres. Con frecuencia no se las percibe como la mejor opción para el liderazgo ya que tienen una doble carga de trabajo: la responsabilidad de los cuidados como también labores productivas – lo cual les deja poco tiempo para la participación en asuntos políticos.

A pesar de los avances en el nivel educativo en Bolivia, las mujeres de las zonas rurales aún tienen que hacer esfuerzos para llegar a los mismos niveles educativos que los hombres. En algunos casos no saben leer o escribir tan fácilmente el español ni tienen el mismo acceso a las reuniones en que los hombres aprenden sobre legislación y medidas estatales. Además, a los hombres se les suele ver como los cabezas de familia porque son los únicos que pueden poseer tierras. Eso quiere decir que normalmente será el esposo o el hijo mayor el invitado a representar a la familia.

## El reducido espacio cívico: organizaciones de la sociedad civil amenazadas

Un reducido espacio para la sociedad civil es una tendencia global que se puede observar en países de todo el mundo tan distintos como las Filipinas, la República Democrática del Congo y los Estados Unidos, entre otros. Pero es una tendencia que ha afectado desproporcionadamente a ACL, tal y como muestran los resultados del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil 2016 de Civicus.<sup>80</sup>

El informe documenta graves violaciones de la libertad de asociación, expresión y reunión pacífica durante el 2015 en 109 países, 14 de ellos de América Latina, entre los que están El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Brasil y Colombia.

Oxfam hace eco de esta impresión en su informe *Los riesgos de defender los Derechos Humanos*, que documenta el aumento en la oleada de ataques a activistas de derechos humanos en la región. Oxfam cree que eso está “ligado a un modelo económico que crea una extrema desigualdad y mina los derechos fundamentales de las personas. Otros factores claves son el manejo de las instituciones estatales por parte de grupos de poder y la escasa atención que los gobiernos prestan a cumplir con su obligación de respetar, proteger y promover los derechos humanos.”<sup>81</sup>

### **Bolivia se enfrenta a una ardua lucha**

Evo Morales, Presidente indígena de Bolivia elegido en el 2005. Con un amplio apoyo popular y mayoría gubernamental, fue capaz de impulsar robustas reformas en el ámbito económico y social. Sin embargo, en los últimos años tanto medios de comunicación independientes como ONG nacionales e internacionales que cuestionan al gobierno han sido acusados por éste de querer instaurar un libre mercado dominado por los extranjeros para minar los intereses del estado. Los movimientos sociales, especialmente aquellos de la región amazónica, han sido deslegitimados por constantes acusaciones y se han establecido organismos paralelos apoyados por el estado.

### **Defensores de los derechos humanos en peligro en Colombia**

Colombia es aún uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de los derechos humanos (DDH).<sup>82</sup> Desde el comienzo oficial de las conversaciones de paz en el 2012 en La Habana entre el gobierno colombiano y el grupo de guerrilla de izquierdas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC), el número anual de DDH asesinados ha ascendido año tras año y ha resultado ser el más elevado del mundo en el 2015.<sup>83</sup>

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) en Bogotá, entre 1994 y 2015, 729 DDH fueron asesinados en Colombia con una impunidad casi total por estos crímenes.<sup>84</sup> Mientras que esto resulta en 33 asesinatos al año en promedio, desde el principio del proceso de paz en octubre del 2012 los asesinatos de DDH han sido más numerosos. Por ejemplo, en el 2015, 63 fueron asesinados y 682 atacados (un incremento del 9% respecto al 2014)<sup>85</sup>, incluidas 310 mujeres.<sup>86</sup> Los DDH en los que más se han centrado estos ataques han sido víctimas que trabajaban en temas de tierras y medio ambiente. Recientemente han aumentado los ataques contra aquellos implicados en el activismo por la paz y el liderazgo político.<sup>87</sup> Durante el mandato del presidente Juan Manuel Santos ciertos cargos gubernamentales han reconocido públicamente la importancia de la labor de los DDH, pero en ese aspecto falta un mensaje constante.<sup>88</sup>

El Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de Civicus afirma que el 2015 fue un año funesto para “la sociedad civil en todo el mundo”. Se identificaron graves amenazas a alguna o más de una libertad civil en más de 100 países. En especial para los activistas que desafiaron a las élites y políticas. Algunos de los más valientes e inspiradores activistas de Brasil, Colombia, Honduras, Perú, las Filipinas y Sudáfrica pagaron en el 2015 el más alto precio simplemente por ejercer sus derechos a organizarse y movilizarse como ciudadanos.”

### **Ataques contra los defensores de los derechos humanos en Colombia**

- La OACDH afirma que las agresiones y asesinatos en el 2015 se centraron en cuatro áreas: Conflictos por tierras, en particular los territorios de indígenas y afrodescendientes, en el contexto de la oposición a la minería ilegal y legal y actos para proteger sus territorios.
- Casos en que los defensores reclamaban justicia para las víctimas – se ha atentado contra los representantes de las víctimas, especialmente aquellas que han llevado ante la justicia violaciones de los derechos humanos por parte del estado. La vigilancia de los DDH y el robo de información que coinciden con momentos clave de los procesos judiciales.
- Líderes sociales y políticos.
- Pacifistas – personas y organizaciones que han participado en las conversaciones de La Habana.

Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Addendum, Situación de los derechos humanos en Colombia, 2016.



Los DDH en el medio rural han sufrido desproporcionadamente los ataques y asesinatos. Somos Defensores informó de que en los últimos cinco años los asesinatos más frecuentes eran los de DDH indígenas.<sup>89</sup>

Las pruebas muestran que los principales autores de los ataques y asesinatos de DDH rurales son grupos paramilitares de derechas desmovilizados, que llevaron a cabo un 66% de los ataques en el 2015.<sup>90</sup>

Por tanto, el acuerdo de paz con las FARC no garantizará un descenso de ataques a los DDH. ABColombia, en su labor de incidencia, cree que un factor clave para crear un entorno más seguro y facilitador para los DDH es acabar con la impunidad. Aunque los DDH de zonas rurales se han visto desproporcionadamente afectados, aquellos de las ciudades, como Buenaventura, tampoco están a salvo.

### La opinión pública de Guatemala se levanta ante el mal gobierno

En un informe del 2015 sobre la corrupción ICEFI junto con Oxfam, afirmó que los países de la región aún consideran que la corrupción es un obstáculo casi insalvable para la consolidación de sus sistemas democráticos.<sup>91</sup> En Guatemala la corrupción ha sido la característica constante de la administración pública, sobre todo a nivel gubernamental, con la complicidad del sector privado. En cualquier caso, el año 2015 marcó un cambio de rumbo cuando, entre abril y agosto, fueron revelados graves casos de corrupción en los que estaban implicados el Presidente y la Vicepresidenta, Ministros, Jueces, Parlamentarios, Alcaldes y Empresarios.<sup>92</sup> La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público descubrieron una red de corrupción dentro de los sistemas nacionales de salud y de aduanas.

La reacción de la población no se hizo esperar y las redes sociales se convirtieron en la plataforma de una convocatoria para mostrar el descontento público.<sup>93</sup> Decenas de protestas se dirigieron a la Plaza de la Constitución, en Ciudad de Guatemala. Cada sábado, durante horas, hombres, mujeres y niños y niñas se reunieron para expresar su repudia al entonces Presidente Otto Pérez Molina y a la Vicepresidenta Roxana Baldetti, además de al Parlamento. Desde entonces la sociedad guatemalteca ha expresado un enérgico rechazo a la corrupción y ha pedido un cambio profundo para garantizar servicios públicos transparentes (de acuerdo con el ODS 16, Meta 16.6: “Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.”)<sup>94</sup>

### Las defensoras de los derechos humanos en Honduras, entre las más perseguidas

Un ejemplo más de la reducción de espacios para la sociedad civil se manifiesta en el aumento de las amenazas a los DDH. La hondureña Berta Cáceres, líder indígena lenca y coordinadora del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) fue asesinada en su hogar el 3 de marzo del 2016<sup>95</sup>, a pesar de recibir medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2009.<sup>96</sup>

“Hubo un incremento en los delitos contra periodistas y activistas de la sociedad civil, especialmente los defensores de los derechos de la comunidad LGBTI y las mujeres defensoras de los derechos humanos. Aunque se promulgó una ley para proteger a los defensores de los derechos humanos, no se aplicó adecuadamente ni se consultó ampliamente a la sociedad civil. Se habló de que el gobierno había comprado programas informáticos espía. La sociedad civil continua enfrentándose a pesados requisitos administrativos.”

Civicus

Había denunciado repetidas veces la grave situación de peligro en que se encontraba. Cáceres defendía los derechos territoriales y culturales de los indígenas Lenca, los grupos Garífuna y los campesinos. Gozaba de un reconocimiento nacional e internacional como defensora de los derechos humanos, en particular de los derechos de las mujeres y los indígenas.

En los últimos años Cáceres había sido víctima de acoso, persecución, intimidación, estigmatización y discriminación tanto por parte de agentes del estado como ajenos a él debido a sus actos en defensa de los derechos territoriales y humanos de las comunidades que se oponían a los proyectos hidroeléctricos y mineros que les imponían en sus territorios sin haber dado antes su consentimiento libre e informado.<sup>97</sup> Como mujer defensora de los derechos humanos Cáceres se enfrentaba a riesgos adicionales asociados a su género, como las amenazas de violación y la intimidación a miembros de su familia, incluidos sus hijos, en el intento de desanimarla y hacerle abandonar su labor.

“La muerte de Berta Cáceres no fue un resultado casual del crimen común, sino parte de la preocupante ola de graves ataques para silenciar a los activistas que trabajan en Honduras defendiendo los derechos de los demás” afirmó Inés Pousadela, Responsable de Política e Investigación en Civicus.

Activista de largo recorrido y cofundadora del COPINH, Cáceres era la cara visible del combate contra el proyecto que intentaba construir una represa para energía hidroeléctrica que inundaría tierras de grupos indígenas y desplazado a la población local.<sup>98</sup> Denunció repetidamente el conflicto entre los intereses políticos y económicos, lo cual la llevó a enfrentar acoso judicial, junto con intimidación y agresión desde varios frentes.

## Conclusión

A menos que se solucione la desigualdad América Latina y el Caribe, como todo el resto del mundo, se dirige hacia el apoyo a líderes menos democráticos. Es urgente que los gobiernos y las sociedades civiles de la zona empiecen a defender convincentemente la idea de que la igualdad es buena para todos.

Los ciudadanos quieren reformas y cambios decisivos para mitigar el crimen, el bajo crecimiento económico, la desigualdad y la corrupción. Aunque aún hay apoyo a la democracia, la frustración está contribuyendo a que se dé un -quizá irreversible- acercamiento a los populismos. Los gobiernos alternativos, como el de Evo Morales en Bolivia, han sido incapaces de cumplir sus promesas o están respondiendo a las protestas con cada vez más represión. En toda la región hemos percibido que se acelera la tendencia global a la reducción del espacio cívico impuesta por las autoridades, lo cual a su vez hace que el apoyo internacional sea aún más crucial.

La desigualdad está frenando el crecimiento y atrofiando el desarrollo del sector privado ya que hace que los mercados internos sean poco activos – algo poco sorprendente dado el extremadamente bajo poder adquisitivo de millones de familias pobres y la baja productividad de trabajadores poco calificados y con problemas de malnutrición.

Hay una necesidad urgente de que los gobiernos y la sociedad civil, incluidas las élites, se reúnan para negociar nuevos acuerdos políticos para los países de la región. Las voces progresistas de las élites no siempre serán oídas, pero es seguro que existen. Estas voces deben ser animadas y encauzadas como parte del continuo esfuerzo por lograr el cambio.

En la región la desigualdad va más allá de la riqueza y tiene sus profundas raíces en las desiguales estructuras de poder: quién lo tiene y quién queda excluido. Los países con las tasas de pobreza más altas también tienen algunas de las sociedades más divididas de la región, tanto política como económicamente. La inestabilidad política está alimentada por los extremadamente altos niveles de desigualdad de ingresos y los cambios estructurales necesarios para mitigar la desigualdad continúan encontrando una fuerte oposición por parte de las élites. Lograr unas profundas reformas estructurales puede traer significativas ventajas para los pobres y sólo será posible (y sostenible) con la cooperación de las élites de la región. Sin esto, los intentos de reforma seguirán acabando en vía muerta y lo más probable es que conduzcan a una polarización aún mayor de la sociedad.

### 3.Desigualdad y violencia



**Abajo:** Jóvenes mostrando sus armas caseras en una barriada de Managua.

Acabar con la violencia es un objetivo clave dentro de los ODS.<sup>99</sup> Por ejemplo, el Objetivo 5.2 busca “Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.”

La violencia, que es común en toda América Latina y el Caribe, está entre los principales motivos de preocupación para las personas de la región y es un importante obstáculo para el desarrollo.

Según una encuesta del 2016,<sup>100</sup> los latinoamericanos aseguran que la violencia por delincuencia callejera es la más usual; que el problema más grave de un país es el económico y que la forma de violencia que más daño hace a su país es la violencia doméstica. Por tanto, la desigualdad social y económica se percibe como el germen de la violencia.

América Latina tiene la mayor tasa de homicidios del mundo. Aproximadamente una de cada tres personas asesinadas intencionalmente es asesinada en América Latina,<sup>101</sup> aunque sólo un 8% de la población vive allí. Alrededor del 25% de los homicidios tienen lugar en cuatro países de la región: Brasil, Colombia, México y Venezuela. De las 50 ciudades más violentas de la lista, 41 están en América Latina, incluidas 21 de Brasil.<sup>102</sup>

“Las desigualdades de poder, en forma de niveles radicalmente desiguales de acceso a la toma de decisiones, los procesos legislativos, la educación y las libertades civiles, se describen a menudo como formas de violencia “estructural”. Y eso debería ayudarnos a entender por qué las desigualdades en esas áreas son tan usualmente el germen de otros tipos de violencia.”

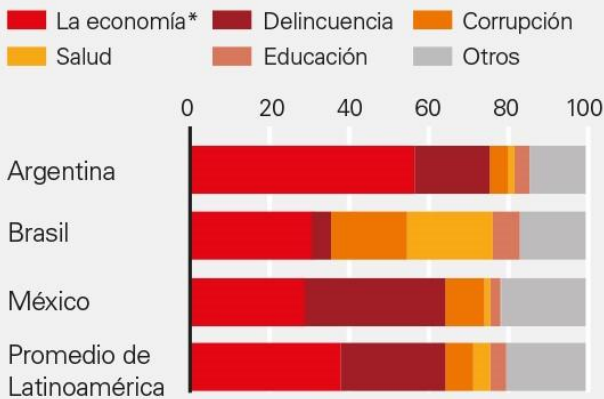
Rowan Williams, Redistribuir el poder es crucial para acabar con la violencia y la pobreza, mayo de 2014



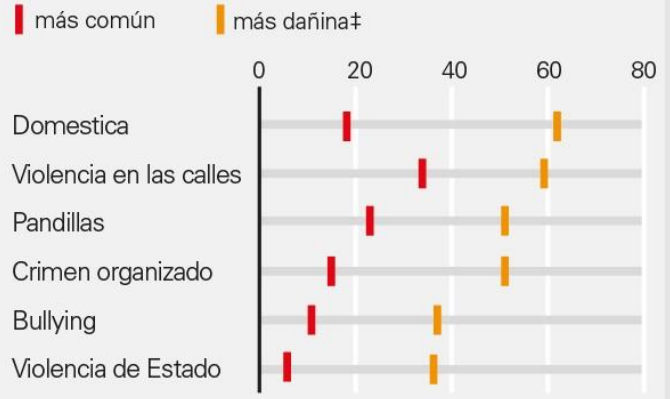
## Grafica 1: Percepciones sobre el crimen y la violencia en Latinoamérica

Encuestados del Latinobarómetro, 2016, %

Problema más importante del país



Tipos de violencia para los latinoamericanos:†



Fuente: Latinobarómetro

\*Economía, inflación, desempleo, pobreza

†Múltiples respuestas

‡Para países en desarrollo

### Definir la violencia

El objetivo estratégico de cambio para Christian Aid/InspiraAction, de acabar con la violencia y construir la paz, reconoce la importancia de mitigar la violencia en un mundo en el que la mayoría de las muertes violentas ocurren fuera del contexto de un conflicto armado. Pero la violencia física directa está a menudo dirigida por la violencia estructural que surge cuando las estructuras de la sociedad sistemáticamente exponen a ciertos grupos a riesgos, o les impiden acceder a servicios y oportunidades. Esta insidiosa forma de violencia tiene resultados casi idénticos a los de la violencia más directa: heridas, traumas y muertes tempranas. Y la violencia cultural se manifiesta en actitudes como el machismo en América Latina y el Caribe, que normalizan la violencia directa o estructural.

### La violencia en América Latina y el Caribe

En Christian Aid/InspiraAction la idea de acabar con la violencia y construir la paz es el núcleo de nuestros programas en Colombia y en América Central. Nuestros programas en Bolivia, Haití, República Dominicana y Brasil también abordan la violencia.

Mitigar la violencia y construir la paz es asimismo la base de nuestra labor en otras partes del mundo, como Egipto, Israel y los territorios palestinos, Siria, Irak, Angola, la República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Zimbabue y Myanmar. Muchos de estos países se enfrentan a retos similares a los de América Latina y el Caribe en relación con la represión de los defensores/as de los derechos humanos y los altos niveles de desigualdad.

El final de un conflicto formal y el retorno del crecimiento económico no significan necesariamente el final de la violencia. Los acuerdos de paz terminaron formalmente con las guerras civiles en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Pero, según la Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo, más personas mueren hoy violentamente debido al crimen que durante las guerras

civiles de esos tres países.<sup>103</sup> La violencia lo impregna todo en esas sociedades.

La violencia y el desplazamiento tienden a recaer sobre los más vulnerables y pobres. La proporción de personas obligadas a abandonar municipios debido a la violencia en América Central es cuatro o cinco veces que de personas que abandonan municipios no violentos, con las mismas condiciones socioeconómicas.<sup>104</sup>

Existen desplazamientos forzados de población, tanto interna como internacionalmente, y migración de menores no acompañados. La gran parte de los 566.700 desplazados internos de El Salvador, Guatemala y Honduras se han visto obligados a huir como resultado del crimen organizado y la violencia de las pandillas.<sup>105</sup> Guatemala, además, no ha aceptado que sus ciudadanos están siendo desplazados involuntariamente. Ninguno de los países del Triángulo Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala) ha promulgado una ley nacional sobre desplazamientos de población.

Haití y República Dominicana tienen niveles críticos de crimen y violencia sexual, así como también son países de tráfico de drogas. Continúa la violencia en República Dominicana contra los migrantes y los dominicanos de origen haitiano.

Según ONU Mujeres, Bolivia tiene las mayores tasas de violencia física contra las mujeres de toda América Latina,<sup>106</sup> y en cuanto a la violencia sexual, sólo la supera Haití. Brasil sufre la violencia de s criminales a niveles críticos, especialmente en las barriadas de las principales ciudades del país. La violencia contra mujeres y niñas está generalizada y en Brasil - una sociedad muy marcada racialmente - mientras que los asesinatos de mujeres negras o mulatas aumentaron un 54% entre 2003 y 2013, los asesinatos de mujeres blancas descendieron un 10% en el mismo periodo.<sup>107</sup>

Colombia emerge recientemente de un conflicto armado interno que empezó hace 50 años y ha dejado 8 millones de víctimas que han sido asesinadas, desaparecidas, maltratadas, desplazadas o han sufrido violencia sexual. También tienen una de las mayores cantidades de desplazados del mundo. En paralelo, el país tiene también un alto nivel de crimen organizado, lo cual de alguna manera lo convierte en invisible y difícil de detener ya que el conflicto armado hace sombra a otros problemas. Recientemente el gobierno alcanzó un acuerdo de paz con el mayor grupo insurgente, las FARC, y en febrero del 2017 empezó oficialmente las conversaciones con el segundo mayor grupo insurgente, el Ejército de Liberación Nacional.<sup>108</sup>

Tal y como se ha expuesto anteriormente en este informe, la región experimenta la violenta persecución de grupos marginados, defensores de los derechos humanos, activistas y trabajadores de ONG. A pesar de los avances en el ámbito legislativo, hay una alarmante tasa de acoso, violencia física y asesinatos selectivos dirigidos a estos grupos, tanto por agentes del estado como ajenos a él. Estos hechos están muy ligados a la grave violencia estructural de la región – muchos estados están fracasando a la hora de proteger el espacio de la sociedad civil y a sus agentes. En Brasil y Guatemala los activistas que luchan por los derechos de los indígenas y aspectos ambientales se han convertido en las dianas preferentes de ataques y asesinatos. Colombia es el lugar más

peligroso del mundo para un periodista o un defensor de los derechos humanos. En El Salvador y Honduras los defensores de los derechos de las mujeres sufren una especial persecución.

## ¿Por qué hay tales niveles de violencia?

La desigualdad es la raíz de la violencia en la región. Mientras que en el aspecto económico los niveles de pobreza han descendido en la última década, las desigualdades sociales y políticas persisten. América Latina tiene la distribución de ingresos más desigual del mundo,<sup>109</sup> y la calidad de la movilización social ha sido deficiente, por ejemplo, con la prevalencia de puestos mal pagados y las transferencias monetarias en lugar de un empleo digno.<sup>110</sup> Las normas sociales relacionadas con género como el machismo exacerban la violencia, sobre todo en el ámbito doméstico.

La baja inversión en educación pública por parte del gobierno en la región en general exacerba también los niveles de violencia. La calidad y el acceso a este derecho humano básico se ven afectadas. Entre el 2000 y el 2010 sólo hubo un ligero incremento en la inversión en educación –del 14% al 16%–<sup>111</sup>, a pesar del sustancial crecimiento económico en toda la región.

Esto ha limitado las oportunidades de los jóvenes marginados, en particular los hombres, algunos de los cuales han encontrado en la violencia la forma de obtener una seguridad económica y un sentimiento de pertenencia (en el caso de las pandillas) ya que sufren el peso de las profundamente arraigadas desigualdades sociales.

El alto nivel de desempleo juvenil persiste (13% en América Latina y el Caribe),<sup>112</sup> especialmente en áreas rurales, lo cual detona la migración de los hombres jóvenes y desarraigados que llegan a barriadas urbanas donde a veces son reclutados por las pandillas.

Instituciones débiles no hacen cumplir la ley y, aun peor, perpetúan la violencia en nombre de la protección de las poderosas élites y el mantenimiento de las estructuras de poder en tiempos de gobiernos militares y en conflictos. El crimen organizado prolifera en un entorno de débil gobernabilidad, en particular el tráfico de drogas. Un urbanismo no regulado y la tenencia de armas son también problemas claves.

## La violencia por razones de género

La conclusión, mencionada antes en este capítulo, de que los encuestados consideraban la violencia doméstica más dañina que la delincuencia callejera, las pandillas y el crimen organizado, pone de manifiesto la necesidad de dar prioridad a mitigar la violencia por razones de género.<sup>113</sup> Aunque la falta de denuncias y la ausencia de datos de calidad hace que sea difícil conocer el verdadero alcance del problema, sabemos que la violencia de género persiste y –en algunos lugares– puede estar agravándose.

Según un estudio del 2013<sup>114</sup>, a nivel regional, las mujeres que declaraban sufrir violencia física o sexual por parte de un compañero sentimental también era más probable que declaren embarazos no deseados. En Bolivia más del 50% de las mujeres declararon experimentar violencia física o sexual por parte de su compañero sentimental.

El Doctor Rowan Williams ha destacado el papel de las mujeres del mundo en la construcción de la paz, al tiempo que sufren unos desproporcionados niveles de violencia. Uno de los más duros e inquietantes factores al tratar de resolver los conflictos es, dijo, “la prevalencia de la violencia y discriminación contra las mujeres en tantas situaciones de conflicto, privaciones, o ambas cosas, lo cual despoja a la mitad de la especie humana de la libertad de nutrir, educar y desarrollar sus propias capacidades y las de la siguiente generación.”

Redistribuir el poder es clave para atajar la violencia y la pobreza, Rowan Williams, Christian Aid, 2014.

En Colombia las estadísticas del PNUD muestran que el 37,4% de las mujeres entre 15 y 49 años sufrían algún tipo de violencia física y el 9,7% declaraban sufrir algún tipo de violencia sexual. Esos porcentajes también son altos en Bolivia (24,2% y 6,4%), en Haití (20% y 10,8%) y en República Dominicana (17,2% y 5,5%).<sup>115</sup>

Las políticas públicas y las normas sociales tienen son las culpables, ya que ambas pueden afectar los niveles de desigualdad de género en cualquier país. Las políticas de libre mercado, el conservadurismo religioso, una cultura predominantemente machista –basada en un sistema patriarcal en general- y otras actitudes sociales han contribuido a agravar la desigualdad entre género.

### Violencia de género y pandillas en El Salvador

En agosto del 2015 El Salvador tuvo una tasa de mortandad que sobrepasó a la de la guerra de Irak. De los 5,7 millones de habitantes de El Salvador, 70.000 son miembros de pandillas y otras 280.000 personas están indirectamente afiliadas a ellas o dependientes de alguna otra manera de estas pandillas. Un informe reciente destaca que entre el 2007 y el 2012 El Salvador tuvo la mayor tasa de feminicidio del mundo, con aproximadamente 14 asesinatos por cada 100.000 mujeres.

¿Por qué la violencia? Las causas incluyen la exclusión social y la desigualdad, que afectan sobre todo a las comunidades pobres y marginadas y a los jóvenes, además de la desintegración de la familia a causa de la migración, una cultura de machismo y la impunidad debida a un sistema de justicia criminal ineficiente.

Las mujeres sufren a menudo la violencia física de los miembros masculinos de las pandillas que aseguran que “no se han portado bien”, reforzando el modelo de dominación perpetuado en toda la sociedad. Los miembros de pandillas también invaden hogares donde no hay una figura masculina para escapar de las patrullas policiales o exigir cuidados.

Con frecuencia la violencia psicológica se ejerce sobre mujeres que se niegan a las exigencias de los hombres y a veces se asesina a las parejas de las mujeres que no pertenecen a una pandilla para asegurarse de que pueden complacer sus deseos sexuales o necesidades económicas. Si una mujer no está tiene pareja y rechaza las muestras de interés de un miembro de una pandilla, puede que sea asesinada. Las escuelas no han quedado al margen de esta violencia: hay casos de estudiantes a las que se han forzado a ejercer la prostitución.

Entre las formas más comunes de violencia está la violencia por razones de género contra las mujeres y la violencia de las pandillas, asociada a menudo con el crimen organizado. En los últimos 20 años el fenómeno de las pandillas se ha desarrollado como resultado de la deportación de jóvenes salvadoreños desde los Estados Unidos. El área más afectada es la capital, San Salvador.

El reciente estudio de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), contraparte Christian Aid/InspiraAction, explora la violencia que experimentan las mujeres que viven en comunidades donde operan las pandillas.<sup>116</sup> Las políticas públicas de seguridad de El Salvador están muy centradas en el fenómeno de las pandillas pero estas políticas carecen de una perspectiva de género y no tienen en cuenta el distinto impacto de la violencia en hombres y en mujeres, ni el grave problema de violencia - especialmente sexual - sufrida por las mujeres y jóvenes de El Salvador.

En las prisiones las mujeres de los presos se ven obligadas a mantener relaciones sexuales con otros miembros de la pandilla ya que los cuerpos de esas mujeres se consideran “propiedad” de todos. A consecuencia de la violencia sexual de las pandillas, El Salvador tiene una alta tasa de embarazos en adolescentes, basada en la creencia socialmente aceptada de que las mujeres deben comenzar su vida sexual y su actividad reproductiva a una temprana edad, lo cual da muestra de la cultura patriarcal que promueve el machismo.

ORMUSA y otras contrapartes de Christian Aid/InspiraAction en El Salvador trabajan sin descanso para dismantelar las estructuras institucionales que reproducen relaciones de poder desiguales en las que los hombres son percibidos como seres superiores y la violencia se tolera.



## Fe en acción contra la Violencia de género

La violencia de género queda enormemente oculta en Colombia y por lo tanto es difícil de abordar. Más de la mitad de las 8 millones de víctimas del conflicto armado colombiano son mujeres. Los casos de violencia doméstica contra mujeres se incrementaron en un 36% entre el 2014 y el 2015,<sup>117</sup> y en el 2015 se supo de 147 feminicidios.

Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, cada día de tres a cuatro mujeres son asesinadas, 156 sufren violencia doméstica y 45 son víctimas de violencia sexual.

El acuerdo de paz nacional entre el gobierno y las FARC ha llevado al establecimiento de un subcomité especial sobre género que escuchó los testimonios de las víctimas de violencia sexual, gracias a las incesantes peticiones de los grupos de mujeres.

A pesar de que el conflicto ha acabado, la violencia sexual continúa debido a las profundamente arraigadas discriminación y desigualdad que permiten la violencia de género y su impunidad, en especial cuando quienes la perpetran son militares.

A pesar de que en los últimos años ha habido importantes logros en el empoderamiento de las mujeres en temas de acceso a la educación, a puestos de toma de decisiones, participación política y exigencias de justicia y de que el acuerdo de paz reconoce la violencia sexual como un crimen grave en el contexto del conflicto armado, en Colombia subsiste un pronunciado orden patriarcal que favorece la desigualdad y la violencia de género.

Christian Aid/Inspiration ha apoyado a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP) para que desarrolle su labor contra la violencia de género, de lo cual se han beneficiado casi 400 personas hasta ahora. La comisión ha intercambiado experiencias con el Servicio Anglicano de Diaconía y Desarrollo (SADD) en Brasil y la Misión Social de las Iglesias Haitianas (MISSEH, por sus siglas en francés).

Todas estas organizaciones se han unido a “Lado a Lado”, un movimiento regional y mundial de líderes y comunidades religiosas, organizaciones religiosas e individuos con fe que están comprometidos con la eliminación de los obstáculos para alcanzar la justicia de género.

Estas organizaciones de fe trabajan en países donde la VG está asociada a los más altos niveles de desigualdad del mundo.

CIJP representa las víctimas de violaciones de los derechos humanos y acompaña a las comunidades marginadas y desplazadas. Gracias a lo aprendido en su experiencia con ellas, CIJP pudo llevar a cabo un estudio de base sobre documentación de los casos, atención psicosocial a las víctimas, estrategia de litigación, comunicación y campañas, reflexiones sobre el feminismo, la masculinidad, el empoderamiento y liderazgo de las mujeres, además de una reflexión sobre las creencias religiosas, las tradiciones y los valores que pueden perpetuar la exclusión de las mujeres y la VG.

Todo esto permitió a CIJP reforzar su análisis sobre el elemento de la fe para obtener cambios significativos en las percepciones religiosas que legitiman un orden patriarcal y la exclusión de las mujeres.

Tanto en América Latina como en el resto del mundo, el discurso religioso se ha usado para oprimir a la mujer. Pero la teología de la liberación contribuyó a cambiar las estructuras injustas y construir nuevas relaciones sociales. La teología se usó de manera positiva para crear conciencia e influir en las normas sociales que contribuyen a la desigualdad por motivos de género.

MISSEH y SADD también aprendieron algo de la experiencia vivida por CIJP. El SADD subrayó la capacidad de CIJP de trabajar en distintos contextos y con distintos grupos sociales como los indígenas, las comunidades de afro-colombianos, agricultores y víctimas de la violencia urbana, algo que inspirará y mejorará su trabajo en Brasil. El amplio enfoque de CIJP a la construcción de la paz es ahora más preciso: la organización está profundizando su análisis de la relación entre la identidad de género y la fe.

La comisión se está involucrando también con otras contrapartes colombianas de Christian Aid/Inspiration, incluidas organizaciones no religiosas, que has reaccionado con respecto a la violencia sexual en el entorno del post-acuerdo de paz.

## Un enfoque teológico a repensar desde una perspectiva de género en Nicaragua

En Nicaragua Christian Aid/InspirAction ha trabajado con su contraparte de inspiración religiosa Centro Intereclesial de Estudios Teológicos y Sociales, en colaboración con la Universidad Evangélica, en el diseño e implementación de un curso con 30 líderes religiosos que representan a varias iglesias nicaragüenses.

El curso “Repensar las masculinidades desde una perspectiva de género: un enfoque bíblico-teológico” parte de la premisa del papel que las iglesias desempeñan en la construcción de normas socio-culturales, simbólicas y religiosas a través de la palabra y la iconografía.

Las temáticas de conocimiento, poder y sexualidad tienen una dimensión de género en que el asunto de la masculinidad requiere de una profunda reflexión y diálogo que contribuya a la deconstrucción de las representaciones sociales hegemónicas (legítimamente) afirmadas por las enseñanzas teológicas.

El trabajo con líderes religiosos locales, que mantienen estrechos lazos comunitarios y cuya palabra goza de respeto, proporciona a Christian Aid/InspirAction una oportunidad inigualable de contribuir a la reducción de la VG. Los participantes, ahora sensibilizados y conocedores en temas de masculinidad, pueden tomar posiciones en favor de la igualdad de género, rechazando la VG y apoyando nuevos modelos de masculinidad desde una perspectiva bíblica liberadora.

## La violencia y la diversidad sexual

Muchas comunidades lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intergénero (LGBTI) saben lo que es sufrir a causa de su sexualidad o su identidad sexual. La exclusión, la humillación y la violencia son habituales. La injusticia de la desigualdad se basa en la identidad, cuando los poderosos discriminan a otros por lo que son.

A pesar de que ha habido notables avances en relación con los derechos del colectivo LGBTI, los altos niveles de violencia que sufren están aumentando en toda la región, según un informe del 2015.<sup>118</sup> Los hombres y mujeres homosexuales y transgénero sufrieron la mayor parte de los asesinatos. Las mujeres lesbianas y bisexuales les afectaba más la violencia doméstica y sexual.

## Los transgénero en El Salvador



Arriba: Karla Avelar, Directora Ejecutiva de Comcavis Trans.

La inspiradora activista transgénero Karla Avelar ha sobrevivido a la violación, intento de asesinato, secuestro y encarcelamiento en una prisión de hombres. Ahora es directora ejecutiva de Comcavis Trans, una organización que lucha por los derechos de la población transgénero de El Salvador.

Los problemas de Karla empezaron en su hogar, en la infancia. “Me escapé de casa cuando tenía 11 años”, cuenta. “Me aterrorizaba que mi familia se enterase de mi verdadera identidad de género. Además, me habían violado unos primos. Uno de ellos me echo de casa diciendo ‘En esta familia no hay maricones’. Me trasladé a la capital y empecé a prostituirme. Cuando no tienes qué comer ni dónde vivir, es la única opción que te queda.”

En las calles de San Salvador Karla halló violencia por todas partes.

*Siguiente pagina*

*Continuación página 42*

Las mujeres transgénero mayores que ella, también trabajadoras sexuales, estaban celosas y la trataban mal, al tiempo que miembros de las tristemente famosas pandillas de la ciudad trataron de sacarle dinero a cambio de protección. “Jamás les di nada”, recuerda Karla. “Por eso trataron de matarme. Tras uno de los intentos acabé con 14 balas en el cuerpo – y sólo porque no cedí a la extorsión y pagué. Mientras estaba en el hospital recuperándome me diagnosticaron el VIH. Aquello me destrozó, pero nunca perdí la esperanza.”

Implicada en actos violentos, que Karla afirma que fueron en defensa propia, acabó encerrada en una prisión masculina durante seis años. Enseguida se convirtió en la diana tanto de las autoridades como de las pandillas. “El día que me encerraron me violaron más de 100 hombres. Mi salud se deterioró rápidamente.”

Cuando salió en libertad estaba decidida a hacer algo. Junto con otros activistas transgénero fundó Comcavis Trans, una organización que defiende a los transgénero y sus derechos humanos en El Salvador y que tiene el apoyo de Christian Aid/InspiraAction a través de su contraparte FESPAD.

“Creo que hay algo muy importante que nos une (a las comunidades transgénero): nuestra realidad. Lo mejor que podemos hacer es colaborar. Buscar estrategias que permitan el reconocimiento de la igualdad y de nuestros derechos.”

La labor de Karla y otros los pone constantemente en peligro. Así que, ¿qué la lleva a seguir, cuando ya ha soportado tanto? “Sobrevivo por amor, por la lucha, por la dignidad. Tuve la oportunidad de dejar este país, pero me negué a hacerlo por amor propio. Para mí, no es justo que nos traten así. Y es eso lo que me da la fuerza y el coraje. Por eso no me voy.”

La orientación sexual se relaciona con otros elementos de identidad como el origen étnico, raza, estatus migratorio, situación económica, etc. Estos grupos pueden sufrir un proceso de continua discriminación a causa de la impunidad y la falta de acceso a la justicia.

Las personas LGBTI que viven en la pobreza son los más vulnerables al acoso policial, con los mayores niveles de encarcelamiento. La ineficacia de los gobiernos en prevenir, investigar y castigar los asesinatos y otros delitos está estrechamente ligada al alto grado de prejuicios que los agentes del estado tienen hacia el colectivo LGBTI. Cada vez que la impunidad gana, se envía un claro mensaje a la sociedad de que la violencia es tolerable.

## Conclusión

Los climas económicos de América Latina y el Caribe enmascaran unas desigualdades que motivan las notables cifras de violencia física y estructural de la región. Las desigualdades que se entrecruzan basadas en el género, raza, sexualidad, grupo étnico y situación económica, agravan aún más el problema.

Christian Aid/InspiraAction y sus contrapartes se dedican a implementar programas que mitiguen las causas de la violencia. Los gobiernos tienen que tener en cuenta que las políticas que generan empleo, dan protección, proporcionan acceso a la justicia y buscan cambios de actitud son igualmente importantes. Las instituciones de los distintos niveles de gobierno tienen que colaborar para garantizar que se respeten y ejerzan los derechos humanos para poder vivir en una sociedad con justicia, paz y democracia, con mujeres a salvo de la violencia. Las leyes tienen que tener en cuenta el distinto impacto de la violencia en hombres y mujeres.



## 4. Desigualdad y justicia fiscal



**Arriba:** Iara Pietricovsky de Oliveira, de INESC, uno de las contrapartes brasileñas de Christian Aid/InspiraAction, durante una campaña de Christian Aid/InspiraAction sobre fiscalidad en Londres.

Políticas fiscales justas tienen el potencial de desempeñar un importantísimo papel en la reducción de la desigualdad en América Latina y el Caribe. La justicia fiscal debería ser una prioridad para los gobiernos de la región, dados los reducidos niveles de ayuda internacional al desarrollo y la necesidad de financiar servicios públicos esenciales para garantizar un desarrollo inclusivo y los derechos humanos en la región, como prevén los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Los ODS son realmente ambiciosos, pero, para convertirlos en realidad, el mundo necesita cerrar una brecha de financiación de unos 2,5 billones de US\$ anuales.<sup>119</sup> En el intento de cubrir esa brecha se ha recalcado el papel de la inversión del sector privado en ámbitos relacionados con los ODS— con peticiones de que los países menos desarrollados aspiren a duplicar la actual tasa de crecimiento de la inversión privada.

### Sistemas fiscales injustos

Actualmente los bajos niveles de recaudación y las estructuras fiscales regresivas son un mal propio de la región.

**“La recaudación de fondos no debería servir jamás para apoyar a las estructuras del estado en deterioro y, desde luego, no debería servir como un mecanismo para mantener los privilegios de las élites. Los impuestos que sirvan al bienestar de la sociedad permitirán la redistribución de la riqueza y la reducción de las desigualdades.”**

Christian Aid, *Impuestos para el bien común: un estudio sobre los impuestos y la moralidad*, 2014



La tabla 1 muestra los ingresos tributarios porcentuales del PIB en los países en que Christian Aid/InspiraAction desarrolla su labor (con la excepción de Haití, de cuyos datos no disponemos).

La mayor parte de los países latinoamericanos, además de República Dominicana, recaudan un nivel mucho más bajo de impuestos de lo que deberían dado su nivel de desarrollo. Según la CEPAL, el 20% es la cantidad mínima que tendría que recaudarse para alcanzar los ODS.<sup>120</sup>

Globalmente América Latina es una de las regiones rezagadas en términos de recaudación de impuestos, con alrededor del 21,7% del PIB – por debajo del África subsahariana, los Estados Unidos, la UE y los países de la OCDE.<sup>121</sup> Es decir, que hay un margen considerable para aumentar la recaudación tributaria.

**Tabla 1:** Recaudación tributaria como % del PIB

País	Recaudación tributaria como % del PIB <sup>122</sup>
Bolivia	28,7
Brasil	33,4
Colombia	20,3
República Dominicana	14,1
El Salvador	16,5
Guatemala	12,6
Haití	n/a
Honduras	19,8
Nicaragua	20,3
Media de América Latina y el Caribe	21,7
Media de los países de la OCDE	34,2

La política fiscal en América Latina y el Caribe tiene un enorme potencial como instrumento de redistribución: debería corregir los excesos en la desigual distribución de ingresos.

Ha habido algunos buenos ejemplos, como en Bolivia, donde la reforma del régimen fiscal de los hidrocarburos ha proporcionado recursos dedicados a un nuevo programa de protección social. Pero en general, en América Latina y el Caribe, los pobres sufren una carga fiscal mucho mayor que los ricos. Por tanto, en muchos casos los sistemas fiscales inciden poco en incrementar la redistribución. La recaudación de impuestos procede sobre todo de los impuestos indirectos (como el impuesto sobre el valor añadido a bienes y servicios, casi la mitad de toda la recaudación) y en menor medida de los impuestos directos, principalmente de las rentas del trabajo en lugar del patrimonio. Esto significa que la carga fiscal recae sobre aquellos con menos posibilidades, dejando grandes concentraciones de riqueza prácticamente intactas. En América Latina y el Caribe la recaudación promedio sobre la renta de las personas naturales es del 1,4% del PIB, comparado con un 8,4% en los países miembros de la OCDE.

## Sistemas fiscales injustos – el caso de Guatemala

La economía de Guatemala ha crecido en las dos últimas décadas y ahora clasificado como de ingresos medios. Aunque en los Acuerdos de Paz de 1996 se incluyó una reforma fiscal, ésta no se ha aplicado en favor de los más pobres. Persiste una casi total ausencia de servicios públicos y protección social, altos niveles de desigualdad y concentración de la riqueza – algunos de los motivos claves del conflicto interno.

Guatemala sigue teniendo la más baja tasa de recaudación de impuestos como porcentaje del PIB (el 10% o el 13%, según distintas estimaciones) y uno de los presupuestos nacionales más pequeños de la región. Es decir que hay una dura escasez de recursos públicos para afrontar los graves problemas del país, entre los que se encuentran un alto nivel de desnutrición infantil y tasas de pobreza que duplican el promedio de la región.

En un reciente informe del ICEFI,<sup>1</sup> que trata sobre el efecto de la política fiscal en la pobreza y desigualdad en Guatemala, concluye que las intervenciones fiscales en general (los impuestos y el gasto social) incrementan la pobreza. El gasto social, específicamente la inversión en educación y salud, al igual que las transferencias monetarias, tienen una leve influencia en la reducción de la desigualdad.

Los resultados generales de la política fiscal dan un incremento de la pobreza. “El incremento de pobreza ocurre cuando los ingresos disponibles se convierten en ingreso post-tributación, esto es, tras el pago de los impuestos indirectos. Esto es así porque dichos impuestos son regresivos.”

<sup>1</sup> Por qué los impuestos aumentan la desigualdad en América Latina?, Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe

Como puede ser el impuesto más progresivo, un mayor peso del impuesto sobre la renta de las personas naturales en el total de la recaudación podría significar una gran contribución a la equidad en el marco del sistema fiscal.

Si comparamos el impuesto a rendimientos del capital, en la zona OCDE se capta el 11,4% del PIB, comparado con el 5,2% en América Latina y el Caribe, lo cual vuelve a favorecer a los más ricos. En los peores casos –Paraguay, República Dominicana y Guatemala- ese porcentaje es de menos del 3,5%.<sup>123</sup> En América Latina la tasa realmente pagada por las personas que pertenecen al 10% más rico de la población es, en promedio, sólo de un 5,4%, comparado con el 20% de la Unión Europea.<sup>124</sup> La redistribución también se ve obstaculizada por los bajos niveles de impuestos sobre la propiedad, que en América Latina supone sólo el 0,85% del PIB – un porcentaje absurdamente bajo. Tres de los países con un bajo rendimiento son la República Dominicana, Honduras y El Salvador, los tres con menos del 0,2% del PIB.<sup>125</sup> Según la CEPAL, el efecto de la política fiscal en la mejora de la distribución del ingreso sigue siendo limitado – después de impuestos, el coeficiente Gini en América Latina baja sólo 3 puntos porcentuales, mientras que en los países de la OCDE baja 17 puntos.<sup>126</sup>

Como afirma Latindadd, contraparte de Christian Aid/InspiraAction: “Para combatir la desigualdad en la región necesitamos que los estados inviertan más en políticas de protección social con una perspectiva feminista y de derechos humanos. Aun así, eso no es posible si mantenemos un sistema fiscal injusto que permite que los ricos paguen poco o ningún impuesto y proporciona ventajas fiscales injustificadas a las multinacionales que, además, usan complicadas estrategias para evitar tributar.”<sup>127</sup>

## Evasión fiscal

La evasión fiscal sigue siendo una problemática clave en cuanto a la pérdida de ingresos tributarios en la región. Se calcula que en el 2014 se perdió el equivalente a 2,2 puntos del PIB por falta de pago del IVA, además de 4,1 puntos del PIB en el caso del impuesto sobre la renta – lo cual da un total de 320 mil millones de US\$. La evasión del impuesto de sociedades llega al 70% en algunos países.<sup>128</sup>

Los factores estructurales que explican los niveles de evasión fiscal incluyen la complejidad de los sistemas, la falta de concienciación o formación fiscal y los altos niveles de informalidad.

### Los impuestos y el género

La política tributaria y fiscal tiene un papel esencial que desempeñar, más allá de la redistribución general, a la hora de reducir la desigualdad de género. Los impuestos pueden generar recursos que contribuyen a la reducción de la desigualdad de género, pero hace falta un cambio más profundo en las políticas fiscales para eliminar los arraigados sesgos de género que afectan a la desigualdad económica de las mujeres.

Un reciente informe sobre mujeres y política fiscal del IEEPP, contraparte de Christian Aid/InspiraAction, destacó los siguientes tipos de sesgo del sistema tributario nicaragüense que perjudican a las mujeres:<sup>129</sup>

♀ Normalmente las mujeres se ocupan de la compra diaria para el hogar, contribuyendo más en concepto de IVA de esta manera. Es más, productos más usualmente adquiridos por mujeres (compresas, acondicionador para el pelo) tienen un tipo de IVA

*siguiente pagina*

*Continuación de página 46*

más elevado que aquellos consumidos por los hombres como la espuma de afeitar.

♂ El sistema fiscal nicaragüense tiene tipos fiscales más bajos para el capital (rentas del patrimonio, cuentas bancarias...) que, para el impuesto sobre la renta, lo cual beneficia a los hombres, que tienen más propiedades y riqueza que las mujeres.

Christian Aid/InspirAction apoyó en Colombia el lanzamiento de la campaña *Menstruación Libre de Impuestos*. El objetivo era concienciar a la opinión pública sobre la injusticia del sistema tributario con las mujeres y convencer a los políticos para que lo corrigieran. La injusticia no reside sólo en el hecho de que los productos de higiene femenina lleven un tipo de impuesto similar a los productos de lujo, sino también en el hecho de que las mujeres paguen más impuestos que los hombres en proporción a sus ingresos.

En diciembre de 2016, el congreso colombiano aprobó la reforma tributaria. Aunque esta reforma no era abiertamente progresiva, sí consiguió que los productos de higiene como los tampones y las compresas pasaran de tributar del 19% (tipo de IVA general) al 5%.

Eso son buenas noticias para los aproximadamente 13 millones de mujeres colombianas que usan dichos productos. La victoria llegó cuando la intensa campaña fue apoyada por más de 50 miembros del congreso de seis partidos políticos distintos.

Las mujeres son a menudo las cabezas de familia y gastan más de su dinero en productos para la casa, incluida comida, ropa y medicinas, lo cual quiere decir que pagan más IVA.

Hay una falta de enfoque de género en la política fiscal y la situación actual da como resultado un esfuerzo extra para los bolsillos de las mujeres, incluidas las madres solteras o las mujeres en empleos mal pagos. En general, en Colombia las mujeres ganan un 20% menos que los hombres por trabajos similares y tienen menos oportunidades de acceder al mercado laboral.<sup>130</sup>

Demandar presupuestos públicos más sensibles al género ha sido una de las maneras en las que la sociedad civil ha pedido responsabilidades al gobierno. En Guatemala la CODEFEM, contraparte de Christian Aid/InspirAction, junto con otros grupos pro derechos de la mujer, hizo campaña durante más de 10 años para conseguir una legislación que garantizase el uso de un Clasificador Presupuestario con enfoque de género. Esto tenía el objetivo de dejar atrás el problema de tener que negociar con el gobierno, año tras año, para conseguir que inversiones para el desarrollo de las mujeres se reflejasen en los presupuestos, desde el nivel local al nacional.

La CODEFEM compartió información, formó a autoridades públicas y organizó actos de concienciación para explicar cómo se usa dicho instrumento y para denunciar su falta de aplicación por parte de los organismos públicos. El uso del clasificador declaró que, en el 2014, a pesar de un incremento en el presupuesto relacionado con temáticas género (esto es, dinero marcado con el clasificador) del 1,33% (2012) al 8,6% (2014), el resultado sigue siendo menos de 2 US\$ al día por mujer – lo cual mal se puede considerar una inversión en las mujeres guatemaltecas.

Hay a nivel nacional y mundial una creciente conciencia de que la evasión fiscal se tiene que frenar. Las consecuencias económicas, son la exacerbación de la desigualdad, pero además significa que el estado es incapaz de adoptar políticas fiscales apropiadas. La falta de ingresos tributarios significa que no hay fondos para mantener las políticas públicas de desarrollo y redistributivas.

El Salvador es un perfecto ejemplo de esto. Iniciativa Social para la Democracia, contraparte de Christian Aid/InspirAction, publicó en el 2016 un informe que recalca que el sistema fiscal salvadoreño, caracterizado por su naturaleza regresiva, también mostraba altos niveles de evasión fiscal (en el 2013 se evadió el 40% del impuesto sobre la renta y el 53% del IVA).<sup>131</sup> Esta situación sólo servirá para discriminar a las poblaciones más pobres de El Salvador ya que el gobierno no tiene los medios económicos suficientes para proporcionar adecuados servicios básicos como la salud, educación y agua.

En este momento algunas prácticas de evasión y elusión fiscal no están contempladas en la ley, lo que limita la capacidad del estado de actuar.

Un problema aún mayor, señalado recientemente en la República Dominicana, es que cuando los contribuyentes no ven calidad en la manera en que se invierten sus impuestos es poco probable que reduzcan sus prácticas de evasión fiscal en general. La Red de Justicia Fiscal dominicana descubrió que la confianza en el estado y en la utilización de los impuestos es importante para garantizar que los cambios positivos en el sistema fiscal se reconozcan y apoyen.<sup>132</sup>

### **Poniendo de manifiesto la (in)justicia fiscal en la región**

Latindadd, organización coordinadora de la Red de Justicia Fiscal de América Latina (contraparte de Christian Aid/InspiraAction), aspira a mejorar la comprensión de los temas de justicia fiscal y cómo éstos afectan a la población de América Latina y el Caribe.

Latindadd trabaja a través de organizaciones miembros para promover la educación popular sobre ciertos asuntos claves. También entabla un diálogo con altas autoridades fiscales de la región para animarles a buscar alternativas y mejoras en justicia fiscal.

Latindadd es miembro de la Alianza Global por la Justicia Fiscal, lo cual significa que puede relacionar cuestiones de justicia fiscal mundial como la evasión y elusión fiscal (por ejemplo, el traslado de beneficios por parte de las multinacionales y la financiación de los ODS) con los efectos que éstas tienen en América Latina y el Caribe.

Latindadd ha promocionado “Que las Transnacionales paguen lo justo”, la campaña mundial organizada por la AGJF. Tras el primer año de esta campaña, en el 2015, afirmó: “Todo lo hecho en los primeros 365 días, con actos y manifestaciones en distintos países de la región, ayuda a concienciar de los problemas de la evasión y elusión fiscal.”<sup>133</sup>

Latindadd coordina habitualmente reuniones con organizaciones de la sociedad civil y gobiernos.

Por ejemplo, en octubre del 2016 mantuvo una reunión con miembros de 14 administraciones tributarias de la región. Ese fue uno de los actos de una serie anual que aspiran a crear un espacio para el diálogo sobre fiscalidad internacional entre los gestores tributarios y la sociedad civil para reforzar la lucha contra la evasión y elusión fiscal por parte de las multinacionales y combatir la acumulación de riqueza en territorios “offshore” y paraísos fiscales.

El Centro Interamericano de Administraciones Tributarias ha aplaudido a la labor de la Red para la Justicia Fiscal de América Latina, considerando una forma de reforzar la cooperación de las administraciones tributarias y crear más espacios para el diálogo.

La filtración de los Papeles de Panamá en el 2016 sirvió para poner de manifiesto una vez más la naturaleza mundial de la evasión fiscal e implicó a figuras claves de la región, incluido el presidente de Argentina, Mauricio Macri. También expuso la enorme cantidad de dinero que se oculta en paraísos fiscales. Por ejemplo, sólo en Colombia, salió a la luz que hay alrededor de unos 100.000 millones de US\$ en paraísos fiscales.<sup>134</sup>

Entre el 2002 y el 2015 las fortunas de los millonarios de América Latina crecieron, en promedio un 21% y Oxfam calcula que eso es seis veces lo que ha crecido el PIB en toda la región. Como esa riqueza se mantiene predominantemente en paraísos fiscales, una gran cantidad de los beneficios del crecimiento económico de la región permanecen en manos de unos pocos y los beneficios no llegan a la mayoría de la población.<sup>135</sup> La CEPAL calcula que la evasión y elusión de los impuestos sobre la renta personal y los de sociedades le costaron a América Latina más de 190 mil millones de US\$, o lo que es un 4% del PIB, en el 2014.<sup>136</sup>



## La moralidad de los impuestos

“Sistemas tributarios mal diseñados, evasión y elusión fiscal le están costando a América Latina miles de millones de dólares en ingresos tributarios no percibidos – ingresos que podrían y deberían invertirse en eliminar la pobreza y la desigualdad”<sup>137</sup>

Christian Aid/InspiraAction ha reflexionado sobre los aspectos teológicos y morales de una fiscalidad justa, algo que ha obtenido mucho eco en nuestras contrapartes eclesiales en Brasil.

En *Impuestos para el bien común: un estudio sobre los impuestos y la moralidad*,<sup>138</sup> el reverendo Francisco de Assis da Silva, Obispo Primado de la Iglesia Episcopal Anglicana de Brasil, afirma: “Si el estado se va a basar en unos cimientos hechos de valores éticos y morales, debe asegurarse de que esos valores se extienden a todas sus instituciones y sus procesos, para poder cumplir con su propósito.”

“En este sentido, si los impuestos son la mayor fuente de ingresos del estado, la distribución de los fondos obtenidos por medio de esos impuestos siempre dependerá del criterio de las distintas autoridades de ese estado. Lo recaudado podría usarse para reforzar la dominación o podría encauzarse por criterios éticos y políticos de servicio a la sociedad, particularmente en los sectores vulnerables o excluidos (en la Biblia, estos están representados por los pobres, extranjeros, huérfanos y viudas).”

De hecho, en toda América Latina y el Caribe la teología de la liberación resaltó el papel del estado como pilar de la justicia social. Recientemente, sectores más conservadores de la iglesia han adquirido protagonismo en el discurso en la región, pero muchas iglesias y organizaciones de fe siguen destacando la moral y la fe que deberían ir asociadas a un estado justo y transparente

## Los incentivos fiscales

En América Latina y el Caribe los sectores más dinámicos y rentables son a menudo los que se benefician de más concesiones fiscales. Los incentivos fiscales – deducciones, exclusiones o exenciones de obligaciones fiscales ofrecidas para atraer a los inversores- son una parte importante del panorama general de la política fiscal y de cómo ésta contribuye o no a reducir la desigualdad. Desde la década de los ochenta los incentivos fiscales han sido un mecanismo de control habitual usado por los gobiernos de la región, ostensiblemente para atraer a la IED (inversión extranjera directa). Los incentivos pueden ser una forma legítima de estimular ciertos sectores de la economía, pero si se plantean mal o se otorgan como parte de acuerdos opacos o corruptos pueden significar un incremento de la carga fiscal de los contribuyentes más pobres, disminuyendo los presupuestos del gobierno y creando una competencia desleal.

Action Aid calcula que en América Latina y el Caribe el impuesto de sociedades ha dejado de percibir como resultado de los incentivos fiscales alrededor de 33,2 mil millones anuales.<sup>139</sup> Las ventajas asociadas a los incentivos fiscales incluyen la captación de inversión extranjera, la competitividad, la creación de empleo y el impulso a la economía local. Pero en muchos casos las decisiones sobre inversión en el extranjero se basan en otros factores como la mano de obra especializada, las infraestructuras y la estabilidad económica y política, más que en los incentivos fiscales.

## Sin incentivos para la igualdad de género

Ningún impuesto –ni incentivo fiscal- es neutro desde una perspectiva de género y siempre tendrá consecuencias distintas para uno y otro, dada la existente desigualdad social y económica entre ellos.

Sin embargo, si se usan eficientemente, una fiscalidad progresiva y unos incentivos bien planteados podrían ayudar a reducir la desigualdad y el desequilibrio de género. Por ejemplo, se podrían diseñar incentivos para reducir la brecha salarial y la desigualdad tanto entre trabajadores como entre contribuyentes. Pero, en vez de eso, lo que a menudo vemos son incentivos que llevan a más desigualdad y explotación, como en el caso de las trabajadoras de las Zonas Económicas Especiales.

El CEDLA ha analizado la fiscalidad y las políticas de gasto en Bolivia desde una perspectiva de género y

encontró pocos incentivos para apoyar a las empresas que desearan ayudar a reducir la desigualdad de género.

Por ejemplo, no hay ninguna herramienta fiscal especial para ayudar a que las empresas con trabajadores informales formalicen la situación de sus empleados – la mayoría de esos trabajadores informales tienden a ser mujeres.

Tampoco hay incentivos para priorizar la creación de empleo para aquellos más discriminados y desfavorecidos, como podría ser el ofrecer descuentos fiscales a empresas que dan formación y trabajo a más mujeres, jóvenes o minorías étnicas.

Finalmente, no hay rebaja tributaria alguna para las empresas que faciliten servicios como las guarderías en el centro de trabajo, den becas para educación, creen comedores o permitan el trabajo flexible. Está claro que con ventajas fiscales se podría animar a quienes crean empleo a incorporar esos extras.

## Popularizar una cuestión compleja



Las Jugadas de la FIFA fue una campaña sobre fiscalidad encabezada por InspirAction España (Christian Aid/InspirAction en España) en conjunto con Christian Aid/InspirAction y contrapartes de toda América Latina y el Caribe.

El mundial de fútbol del 2014 proporcionó una oportunidad de hacer campaña sobre las amplias exenciones fiscales impuestas a Brasil por la FIFA y sus patrocinadores, como parte de las condiciones exigidas a los países anfitriones de un mundial de fútbol.

El Tribunal de Cuentas brasileño calculó que las exenciones ascendían aproximadamente a 228 millones de libras esterlinas.

Esa es una cantidad que Brasil, un país con una extrema desigualdad y altos niveles de pobreza, no puede permitirse. Especialmente porque la enorme factura total de la cita deportiva significó unos 7 mil millones de £ - la mitad de los cuales fueron aportados por las autoridades federales, estatales y locales de Brasil.<sup>140</sup>

La campaña alcanzó apoyo público gracias al ya existente descontento por el enorme coste financiero y social del acontecimiento, además el modo accesible en que la campaña expuso los lazos entre los incentivos fiscales, la pobreza y la desigualdad.

El captar la atención de los medios de comunicación en España, América Latina y el Reino Unido también ayudó a esta campaña a crear conciencia sobre este asunto poco conocido.

Un estudio sobre la región llevado a cabo por la CEPAL descubrió que los incentivos tendían a tener sólo un papel secundario en la decisión de invertir en un país en particular,<sup>141</sup> mientras que un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo llegó a la conclusión de que los incentivos en Colombia no habían logrado estimular la IED.<sup>142</sup> Lo que sí se ha descubierto que es decisivo a la hora de atraer la IED son los factores que facilitan los negocios como una

mano de obra formada, la estabilidad económica y política del país, la seguridad jurídica, la seguridad en general y el acceso a los mercados.

Todos esos elementos requieren un estado capaz de proporcionar bienes, servicios e instituciones públicas que se pagan con los impuestos. Sin embargo, los gobiernos parecen estar atrapados en un círculo vicioso: tratan de usar incentivos para atraer la inversión, pero al hacerlo disminuyen sus ingresos tributarios y reducen su capacidad de invertir en lo que realmente incrementaría sus perspectivas de atraer una IED útil.

Además de incrementar la competitividad, los incentivos fiscales pueden llevar a una especie de “subasta a la baja”, en que los países tratan de superar a los demás en las rebajas. El empleo que se crea está a menudo mal pagado, es precario y los trabajadores (generalmente mujeres) carecen de derechos laborales básicos. La inversión extranjera aporta, frecuentemente, pocas ventajas para la economía local y los beneficios se exportan.

## El gasto social

Además de la recaudación y las estructuras fiscales regresivas, hay otras áreas de la política fiscal que también tienen un papel en el aumento de la desigualdad en la región – en particular las decisiones de los gobiernos en cuanto a gasto social. Las dos décadas que precedieron al 2012 vieron un aumento del gasto social, sobre todo en seguridad social y asistencia/bienestar, en parte por el creciente envejecimiento de la población.

Algunos países del Caribe han sido la excepción a este incremento de gasto. No es sorprendente, teniendo en cuenta el gran terremoto de enero del 2010 y los continuos problemas del país, que las tendencias de gasto social de Haití sean erráticas. El acceso de la población a los servicios sociales básicos es especialmente preocupante. El gasto en educación ha aumentado, representando el 4,2% del PIB en 2014, lo cual se acerca al promedio para América Latina y el Caribe, pero el acceso a la educación sigue siendo problemático.<sup>143</sup> Un aumento de la inversión en salud, vivienda y seguridad sigue siendo esencial.

Un tipo de gasto social que ha llamado mucho la atención son los programas de transferencias monetarias condicionadas. Este modelo proporciona auxilio social en efectivo directamente a los hogares pobres – seleccionados tras un estudio - con frecuencia en combinación con el cumplimiento de ciertas condiciones. Dichas condiciones pueden incluir los exámenes prenatales o la escolarización de los niños. Como el dinero va directamente a manos de la población pobre (a menudo vinculado a la recepción de educación o servicios médicos), hay un gran potencial de se reduzca la desigualdad de ingresos. Los programas de asistencia social como éstos son críticos para garantizar que los más pobres tengan al menos un ingreso mínimo para asegurar el derecho esencial de alimentación.

Pero los programas de transferencia monetaria son muy distintos entre los países. En América Central, República Dominicana y Haití la asistencia social básica es principalmente deficiente. Una de las principales razones de que el aumento del gasto social no haya

Hay, por supuesto, mucha diferencia de país a país y está claro que las prioridades no son las mismas. Los que menos gastan de América Latina son Guatemala, Honduras, Nicaragua y Bolivia (todos los cuales gastan menos de 300 US\$ per cápita).<sup>1</sup>

En el caso de Honduras el porcentaje del presupuesto destinado a gasto en educación y salud fue del 32,8% y el 14,7%, respectivamente, en el 2010. Pero para el 2016 estos porcentajes había caído hasta el 20,1% y el 10,1%. Mientras tanto, el gasto en seguridad y defensa aumentó del 11,7% en el 2010 al 13,6% en 2016.<sup>2</sup>

El grupo de los que más gastan incluye a Argentina, Chile, Costa Rica y Uruguay, que gastan más de 2.000 US\$ per cápita. En Colombia el gasto social es del 30,6% del presupuesto total comparado con el 39,5% en Perú y el 63,5% en Argentina.<sup>3</sup> Aun así, el gasto social no ha tenido un gran efecto redistributivo en la región. Una razón es la amplia proporción de gasto que se destina a seguridad social - y eso beneficia más a aquellos con los ingresos más altos.

1 El Panorama Social de América Latina, CEPAL, 2015.

2 ¿Hacia Dónde va la Política Fiscal Hondureña?, ICEFI, 2016.

3. Mario Valenciana, de la Red por la Justicia Tributaria, citado en *El Tiempo*.

tenido un gran efecto es que las cantidades destinadas a los programas de transferencia monetaria son en realidad muy pequeñas. Quizá no sea una sorpresa, pero la conclusión es que para tener un impacto significativo en la pobreza y la desigualdad los programas nacionales deben alcanzar a un gran número de habitantes pobres y transferir unas cantidades suficientemente generosas. Otros desafíos pendientes son, por ejemplo, remodelar las transferencias monetarias para que se relacionen con otras políticas educativas, de salud o de inclusión en el lugar de trabajo.<sup>144</sup>

Un problema esencial de los programas de transferencia monetaria es que pueden reforzar las ideas convencionales respecto a la división del trabajo por género, ya que las madres deben llevar a cabo trabajo no remunerado, asistir a reuniones y citas médicas (y a veces más) con el fin de cumplir con las condiciones que conllevan los pagos, mientras que también se ocupan del cuidado de los hijos. Además, mujeres de toda América Latina han expresado una preferencia por recibir formación para mejorar sus perspectivas laborales, por ejemplo sobre creación de microempresas, marketing y gestión financiera, en vez de acudir a talleres sobre salud y educación.<sup>145</sup> Como los programas de transferencia monetaria no están combinados con la creación de empleo para mujeres, se encuentran con un obstáculo para ejercer sus derechos y su potencial de subsistencia, que limita su capacidad de implicarse en papeles que vayan más allá del de proveedora de cuidados básicos.

Desde el 2012 la ralentización de las tasas de crecimiento y el debilitamiento de las economías han reducido las oportunidades de aumentar el gasto social. El final de los altos precios de las mercancías, el cambio político y el impacto de las crisis económicas a nivel mundial han tenido sus efectos en el gasto social de la región. El gasto social no debería estar sujeto a los ciclos económicos y algunos países han establecido un mínimo de gasto en ciertos sectores, como la salud y la educación. En muchos países es necesario encontrar nuevas fuentes y mecanismos de financiación para salvaguardar los avances ya logrados.

Muchas organizaciones están ahora destacando la necesidad de que los servicios sociales universales vayan más allá de los programas de transferencia de efectivo y lleven a una reducción a largo plazo y sostenible de la desigualdad. La CEPAL mantiene que los servicios sociales universales son esenciales para lograr los ODS en la región.<sup>146</sup> El predominio de la selección de beneficiarios es algo que básicamente sigue el modelo estadounidense, pero las pruebas demuestran que la creación de servicios y subsidios públicos universales es el mejor instrumento para garantizar la redistribución del ingreso.<sup>147</sup>

Este último es un modelo que la región no debería pasar por alto. Conlleva un conjunto de ventajas – incluido el apoyo de las clases medias, sociedades menos segmentadas y una mayor calidad en la provisión de servicios.



## Conclusión

La política fiscal tiene un enorme potencial en lo que respecta a reducir la desigualdad. Los programas condicionales de transferencia monetarios son muy elogiados, pero su alcance deja aún mucho que desear y no es un modelo que pueda transformar genuinamente la sociedad a menos que se combine con medidas complementarias. Hace falta mucho más gasto social para acercarse a la provisión universal de servicios sociales de calidad. El gasto social, además, tiene que garantizarse frente a los baches económicos o los cambios políticos. Se necesita una profunda transformación de los sistemas fiscales de la región - regresivos y con un sesgo de género-. Hay que prestar atención a aumentar la recaudación fiscal sobre la renta de las personas naturales y por el impuesto de sociedades y los impuestos al patrimonio.

Hay mayor reconocimiento de que el crecimiento económico en América Latina y el Caribe, que se basó predominantemente en el aumento de las exportaciones, no ha combatido la pobreza y la desigualdad. Los beneficios de ese crecimiento no han alcanzado a amplios sectores de la población y se han visto notablemente disminuidos por el uso de los incentivos fiscales. Es más, este modelo es insostenible desde el punto de vista económico, social y ambiental. Los ODS han subrayado esa necesidad de equilibrar los factores económicos, sociales y ambientales a la hora de planear los futuros modelos de desarrollo. Las políticas fiscales relacionadas a la inversión –tanto pública como privada- deberán tenerlo en cuenta. Luchar contra la evasión y la elusión fiscal, además de asegurarse de que los incentivos fiscales son justos y transparentes, son otras medidas clave para transformar los sistemas fiscales. Ya es hora que más ricos de la región paguen impuestos justos.

## 5. Desigualdad y trabajo digno



**Arriba:** Una familia planta semillas de judías en un alta ladera en el pueblo de Despagne, cerca de Jeremie, en Haití

Todo el mundo debería tener acceso en igualdad de condiciones al mercado laboral, tener acceso a un empleo seguro y de calidad y a una justa parte de los beneficios del crecimiento económico. El nexo entre el trabajo digno y el desarrollo se ha manifestado como una de las maneras más efectivas para asegurarse que los beneficios del desarrollo se compartan.<sup>148</sup>

El Objetivo 8 de los ODS tiene como objetivo: “Promover un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, un empleo pleno y productivo y un trabajo digno para todos.”

En un documento especial sobre el trabajo digno, Christian Aid/InspiraAction afirma: “Hay dos dimensiones para la sostenibilidad que son importantes tanto para el medio ambiente en si como también para que las personas puedan disfrutar de un nivel de vida digno y de derechos fundamentales en su lugar de trabajo. Una agenda inclusiva debería, por lo tanto, dar oportunidades de empleo *digno*; un empleo en condiciones de trabajo seguras con un salario que como mínimo permita vivir y que ofrezca progreso y seguridad.”

El acceso a empleos dignos constituye uno de los grandes desafíos de la región, y también es un obstáculo para reducir la desigualdad a futuro. Hay un creciente consenso en cuanto a que la pobreza, la extrema pobreza y la desigualdad en América Latina y el Caribe no pueden superarse sosteniblemente sin medidas para crear empleo

**“El empleo y los cambios en el empleo afectan a la desigualdad en América Latina más que lo que hace el crecimiento económico”**

Banco Mundial, *La educación y productividad, clave en la reducción de la desigualdad en periodos de bajo crecimiento.*

sostenible en áreas urbanas y rurales, en particular para los más marginados.

## La economía informal

La región se caracteriza por un alto nivel de trabajo precario, informal y de escasa productividad. Más de la mitad de los 300 millones de trabajadores de América Latina y el Caribe trabajan en microempresas, como trabajadores independientes no cualificados o como mano de obra no remunerada.

Es más, de las 50 millones de pequeñas y medianas empresas de la región, 37 son del sector informal, lo cual destaca el enorme problema de la economía informal en la región.<sup>149</sup> El porcentaje de trabajadores informales no se ha reducido en los últimos años a pesar del crecimiento económico, llevando a la OIT a identificar el trabajo informal como uno de los retos claves para el desarrollo humano y el fin a la desigualdad en la región.<sup>150</sup> La informalidad afecta en particular a las mujeres, migrantes, indígenas, afrodescendientes y aquellos con un menor nivel educativo, lo que contribuye a se perpetúe la desigualdad.

Aquellos que trabajan en la economía informal no tienen ningún tipo de red de seguridad social. Las mejoras en las políticas de pensiones, atención médica y licencias por maternidad son vitales tanto en el trabajo formal como informal para reducir la vulnerabilidad de mujeres y hombres. Otra política crítica es el manejo del salario mínimo, el cual tiene un gran potencial de reducir la desigualdad y la pobreza de trabajadores con bajos ingresos. Ya sabemos que los sindicatos tienen un papel vital en la reducción de la desigualdad salarial y en la mejora de las condiciones de trabajo y otros beneficios que reciben los trabajadores. Sin embargo, los sindicatos, no tienen una historia muy favorable en la región, donde hay unas políticas y prácticas anti-sindicales generalizadas.

### Derechos para los trabajadores informales de Brasil



**Arriba:** Una de las vendedoras informales en São Paulo

En São Paulo el Centro Gaspar Garcia para los Derechos Humanos (CGGDH), contraparte de Christian Aid/InspiraAction, trabaja con algunas de las categorías de trabajadores informales más excluidos

de la ciudad, como los migrantes bolivianos, que a menudo trabajan en condiciones de semi-esclavitud.

São Paulo es una metrópolis de más de 20 millones de personas. Una gran proporción de personas vive en la pobreza ya que ganan un salario insuficiente para satisfacer sus necesidades y las políticas sociales públicas no cubren la esta brecha.

El CGGDH apoya a los vendedores ambulantes con una serie de acciones que incluyen la consejería legal, la ayuda para organizarse y hablar en su defensa ante las instituciones locales y las autoridades para hacer que tengan más visibilidad y para poner de manifiesto las necesidades de los trabajadores informales (por ejemplo, la falta de acceso al crédito, a las ayudas sociales y a la vivienda). Además de lo anterior facilitar el diálogo y las negociaciones de derechos con las autoridades locales.

La creación del “Foro de Vendedores Ambulantes” ha conseguido apoyar a estos para que se relacionen con las instituciones *siguiente pagina*



### Continuación de la página 55

y autoridades locales a nivel de toda la ciudad. Así se ha ayudado a crear un espacio democrático para que dichos trabajadores se organicen. Hace poco el CGGDH ha reforzado su labor de empoderamiento de las vendedoras del sector informal, que con frecuencia sufren de un mayor nivel de acoso y violencia policial, que se suma a la violencia que soportan en casa y en la calle.

Su labor actual se centra en reforzar la participación de las mujeres en el Foro de Vendedores Ambulantes y crear más oportunidades para que éstas se conviertan en líderes en su sector y organicen la defensa de sus derechos. Esto incluye ayuda legal, consultas legales y talleres de concienciación para abordar la violencia de género. Las mujeres con las que han trabajado ya han sido capaces de influir en líderes locales y asimismo formar a otras mujeres que se enfrentan a situaciones similares.

## MIPYME

El progreso de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) es crítico, dado el volumen de empleo creado por éstas en América Latina y el Caribe. Más de la mitad de los 300 millones de empleados de la región trabajan como asalariados en microempresas con menos de cinco trabajadores, así como trabajadores independientes no cualificados o como mano de obra no remunerada. En estas condiciones trabajan 7 de cada 10 personas que viven en la pobreza o que están en situación de vulnerabilidad.<sup>151</sup>

La inversión en y el apoyo a las MIPYME ha sido mínimo y aun así tiene el potencial de crear empleo en zonas económicamente marginadas. Pero esto es poco sorprendente que la atención se ha centrado claramente más en el modelo extractivo orientado a la exportación, promocionando sectores como la agro exportación, los biocombustibles, minería y gas y petróleo. La última década ha sido testigo de una enorme expansión de esos sectores. Hay muchas deficiencias inherentes a ese modelo, en particular la concentración de tierras y todas las consecuencias sociales, ambientales y de derechos humanos que conlleva. Otro resultado de esto son las escasas políticas para promover un desarrollo sostenido de las MIPYME. Hacen falta políticas que incluyan más acceso al crédito, procedimientos que faciliten el registro de trabajadores y estructuras fiscales más progresivas y menos beneficios injustos otorgados que se les otorgan a las grandes compañías extranjeras a través de incentivos fiscales.

## Salarios (in)decentes

Las políticas tributarias como la utilización de incentivos fiscales se traducen que en muchos casos la calidad y los salarios de los empleos creados por la inversión extranjera sean deficientes. Muchos países de la región tienen sueldos mínimos establecidos por ley. Estos a menudo no reflejan las verdaderas necesidades de los trabajadores y pueden llegar a legitimar a los empresarios que pagan bajos salarios. Las agrupaciones de trabajadores (es decir, no sólo los sindicatos sino también las organizaciones de trabajadores informales) han empezado a solicitar el derecho a un salario digno, que permita subsistir. Según un estudio de trabajadores del sector textil entre el 2001 y el 2011, el valor real de los salarios en México, Honduras y El Salvador descendió aproximadamente un 14,6%, mientras que el salario promedio de los trabajadores textiles sólo era el 41% del salario mínimo vital estimado en El Salvador, 50% en Guatemala, 47% en Honduras y

## Apoyo a los pequeños productores lácteos de Haití

En Haití Christian Aid ha apoyado el programa Lèt Agogo de su contraparte Veterimed en su búsqueda de acciones sostenibles para promover la producción local de leche y permitir a los pequeños campesinos participar en el relanzamiento de la producción láctea nacional. Desde la primera vez que sacó al mercado leche esterilizada en 2006 hasta hoy, Veterimed ha abierto 36 centros en todo Haití.

Veterimed había empezado a explorar la posibilidad de diversificar la producción y en 2015 reiniciaron la producción de queso Cheddar y Gouda (detenida desde el gran terremoto). Esto puede reforzar la red de Lèt Agogo y continuar promoviendo la producción local de leche. Se han hecho muchos esfuerzos para capacitar al personal y que sean un factor de impulso a la producción de queso. Cuatro centros de la red producen queso - Forêt des Pins, Bon Repos, Verrettes y Hinche. Actualmente fabrican unos 20.000 kilos de queso al año y tienen el potencial de duplicar la producción si el mercado lo demanda. La leche que usan para el queso procede más de 260 granjas.

Los principales clientes del queso de Lèt Agogo son grandes hoteles de Puerto Príncipe, supermercados y restaurantes



40% en República Dominicana.<sup>152</sup> Un reciente estudio en Haití reveló que “el costo de vida actual es más del cuádruple del salario mínimo de referencia.”<sup>153</sup>

Se añaden dos problemas que contribuyen al estancamiento de la reducción de la desigualdad; estos son: un menor crecimiento de los ingresos laborales en la base de la pirámide de ingresos y una asistencia social menos efectiva.<sup>154</sup> Por ejemplo, en Brasil el descenso de la desigualdad durante la década del 2000 se debió más al ajuste de los salarios y planes de pensiones al salario mínimo que a las transferencias monetarias como la Bolsa Familiar.<sup>155</sup> Si los salarios y las pensiones no suben al mismo ritmo que el costo de vida, como ha sido el caso en los últimos años, estamos destinados a ver un retroceso en los avances logrados.

## Mercados laborales injustos

Los mercados laborales de América Latina y el Caribe se caracterizan por sus profundas divisiones en términos de calidad, pago de salarios, formalidad del trabajo, oportunidades de movilidad ocupacional y acceso a la protección social. Esto se entrecruza con las desigualdades de género, raza, grupo étnico, edad, ubicación geográfica y discapacidad para crear obstáculos aún mayores para disminuir la pobreza y la desigualdad en la región. Por ejemplo, una mujer indígena de un área rural tiene muchas más posibilidades de terminar en el empleo informal o en sectores donde la protección es mínima, como el trabajo doméstico.

Para romper ese círculo vicioso los gobiernos y la sociedad civil tienen que reconocer y abordar activamente el problema. Algunas posibles formas de hacerlo incluyen apoyar a las empresas informales (sobre todo a las pequeñas y microempresas) con el registro legal y el acceso a la financiación, de manera que más de sus trabajadores puedan acceder a mejores niveles de vida y al sistema de seguridad social, incluido un mejor acceso a las pensiones, licencias por maternidad, garantía de derechos laborales básicos (como la salud y la seguridad laboral, la regulación de las jornadas de trabajo y los salarios mínimos) así como invertir más en la educación de los jóvenes (incluida la formación profesional y vocacional) y en la formación de adultos, ya que la falta de capacitación se identifica a menudo como un obstáculo importante para encontrar empleo y, en última instancia, para el futuro de la economía de un país.

También es importante garantizar que todas estas medidas tengan en cuenta las diferentes dimensiones de la desigualdad y la exclusión y den prioridad a los más afectados por la discriminación por género, raza, etnia y edad.

Eso incluye fomentar cambios en las políticas y prácticas de empleo (por ejemplo, apoyando a las mujeres a entrar en sectores tradicionalmente dominados por los hombres, o instaurando cuotas para determinadas profesiones o puestos) con el fin de abordar la desigualdad de género y acelerar el cierre de estas llevando a cabo acciones afirmativas para terminar con la discriminación racial y étnica en el lugar de trabajo.

Otro ejemplo más son las Zonas Económicas Especiales de América Central. Los trabajadores, predominantemente mujeres jóvenes con sólo educación básica, reciben bajos salarios, hacen largas e impredecibles jornadas con contratos precarios y la habitual vulneración de las leyes nacionales sobre derechos y beneficios laborales (es decir, condiciones especiales en caso de maternidad, seguros de salud y contribuciones a las pensiones).<sup>1</sup> Las brechas salariales de género son comunes.

1 Agenda de los derechos laborales de mujeres trabajadoras de la industria maquiladora en Centroamérica

## El trabajo y la brecha de género

**Oportunidades laborales:** Aunque la brecha se ha cerrado un poco, las mujeres aún participan menos en el mercado laboral en comparación con los hombres: el 50% contra el 71%.<sup>156</sup> Es más probable que las mujeres estén desempleadas en cualquier clase socioeconómica. En promedio, las mujeres ganan un 22% menos que los hombres y es más probable que tengan empleos temporales, mal pagados y precarios, sin beneficios como la licencia de maternidad.

La mayor brecha en términos de distribución del trabajo de calidad entre hombres y mujeres se da en Nicaragua, Bolivia, Perú y Colombia,<sup>157</sup> aun cuando las mujeres de América Latina y el Caribe tienen hoy más acceso a la educación que nunca. Es más, los directores hombres blancos, con subordinadas mujeres de alguna minoría es algo habitualmente aceptado como la norma.<sup>158</sup>

**Trabajo de cuidados no remunerado:** Las mujeres también llevan la carga en términos de trabajo no remunerado – el trabajo doméstico (incluida la recogida de leña y agua) y el cuidado de los miembros de la familia. Por ejemplo, en el 2009 en Honduras las mujeres empleadas dedicaron en promedio siete horas al día al trabajo no remunerado, en comparación con una hora al día en el caso de los hombres.<sup>159</sup>

Esta diferencia se refleja aún más entre los desempleados. Por ejemplo, en Colombia las mujeres desempleadas trabajan 35 horas a la semana en comparación con 12 horas por semana en el caso de los hombres.<sup>160</sup>

El trabajo de cuidados no remunerado del que se encargan generalmente las mujeres es aún mayor en las áreas rurales. La falta de servicios públicos como agua o electricidad significa que las mujeres pasan más tiempo yendo a buscar agua y leña. La falta de acceso a la electricidad significa que no se pueden usar electrodomésticos, lo cual incrementa el tiempo que se pasa haciendo tareas diarias como cocinar o lavar la ropa.

Las políticas de atención social tienen que diseñarse como políticas universales centradas en los derechos. Esto es particularmente importante en países con poblaciones que envejecen. También será necesario un cambio cultural para que las tareas domésticas se repartan más equitativamente entre hombres y mujeres. Un reciente estudio del IEEPP, contraparte de Christina Aid, resalta algunos aspectos claves y estadísticas clave sobre las mujeres y el empleo en Nicaragua<sup>161</sup>

- Las mujeres tienen menos oportunidades de trabajo debido a su no remunerada responsabilidad de proporcionar cuidados.
- Se considera que las mujeres son menos productivas. A menudo las mujeres crean pequeñas o microempresas en casa para asegurarse de que también pueden ocuparse de las labores del hogar – aunque esto les quita tiempo para dedicar a su empresa.
- Las mujeres que trabajan en los sectores de la salud, manufactura, comercio y agricultura ganan menos que los hombres.
- Es menos probable que las mujeres sean dueñas de pequeñas y medianas empresas (el 9,7% de las mujeres son dueñas de pequeñas empresas, comparado con el 58.1% de hombres). En el caso de las medianas empresas la brecha es aún mayor: 7,9% son mujeres y 61,1% son hombres.
- De las mujeres que llevan un negocio, más del 50% son además cabezas de familia, lo cual implica un doble trabajo.

El informe del CEDLA, sobre las mujeres y el desempleo ponía de manifiesto que, a pesar de los avances económicos de Bolivia en la última década y los avances en algunas áreas de la desigualdad por razones de género en la sociedad boliviana, las mujeres no han visto una mejoría en las oportunidades para encontrar empleo.<sup>163</sup> Las mujeres siguen constituyendo la mayoría de los trabajadores de la economía informal, están en empleos poco cualificados, mal pagados y precarios, lo cual limita su acceso a derechos sociales y laborales.

Según el CEDLA: “El empleo, los ingresos y otras condiciones laborales continuaron siendo las principales variables de ajuste para mantener una inserción subordinada en la economía mundial y para mitigar los efectos de la crisis capitalista sobre la economía nacional.” Esto ha hecho que aumente la naturaleza precaria del trabajo que afecta sobre todo a las mujeres. En el 2014 el 34% de las asalariadas y el 75% de las trabajadoras independientes se enfrentaban a una extrema inestabilidad laboral, con ingresos por debajo de la canasta familiar. No son sólo las mujeres del sector informal quienes lo sufren: en general las mujeres bolivianas también se enfrentan a mayores niveles de desempleo que los hombres.

### Empleo rural

La brecha de género en el medio rural es aún más impresionante. El trabajo agrícola es aún la principal actividad económica en las zonas rurales y

*siguiente página*

*Continuación de la página 59*

las mujeres con frecuencia trabajan en el cultivo de subsistencia, hacen trabajo no remunerado para apoyar a los cabezas de familia masculinos y tienen poco acceso a tierras propias o a canales de comercialización.

Uno de los obstáculos claves para las mujeres rurales es su bajo nivel educativo. En un estudio de 2010 en 13 países, más de la mitad de las mujeres rurales tenían entre cero a cinco años de escolarización, y muchos países tenían un alto índice de analfabetismo entre las agricultoras: Perú (65,9%), Guatemala (60,7%), Bolivia (45,8%) y El Salvador (37,5%).<sup>162</sup>

En áreas en que se cultiva para la exportación -como en el caso de la industria de la floricultura en Colombia- las mujeres son contratadas en mayor medida, pero tienden a tener empleos con salarios bajos, estacionales o temporales, con poco respeto a sus derechos.

En la Amazonia boliviana Christian Aid/InspiraAction ha explorado oportunidades de combinar el empleo de las mujeres con el impulso a la participación de las estas en la toma de decisiones. Christian Aid/InspiraAction ha trabajado con mujeres jóvenes de comunidades amazónicas, que frecuentemente son madres a muy temprana edad, tienen pocas oportunidades de completar su educación, aceptar oportunidades que les generen ingresos o perseguir sus sueños de desarrollo personal fuera del hogar.

Christian Aid/InspiraAction, CIP y Soluciones Prácticas se están embarcando en un proyecto para contribuir a reforzar la organización y participación de los jóvenes en foros de toma de decisiones sobre cuestiones que les afectan y a crear el compromiso y la capacidad locales necesarios para apoyar a los jóvenes emprendedores del sur y oeste de la Amazonia boliviana.

## Empleos sostenibles

El discurso en torno al “trabajo ecológico” se ha vuelto mucho más común en la agenda del desarrollo.<sup>164</sup> El Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD para el año 2015 habla del empleo como un modo para combatir la pobreza y superar la desigualdad empoderando a las minorías, además de proteger al medio ambiente a través de empleos respetuosos con la naturaleza.<sup>165</sup>

La necesidad de crear más empleo para reducir la desigualdad no puede ir en perjuicio del medio ambiente. La igualdad y la sostenibilidad están en el núcleo de los ODS y no es sólo la calidad del empleo lo que tiene que cambiar. El crecimiento en América Latina y el Caribe ha estado caracterizado por la exportación del producto de industrias extractivas y la agroindustria a gran escala.

Con la excepción de Bolivia, donde los beneficios de las industrias del gas y el petróleo se han invertido en programas de protección social, en el pasado las ganancias resultantes del crecimiento basado en la exportación no se han usado eficientemente para mitigar la desigualdad o crear economías más inclusivas y diversificadas, ni para reforzar al personal o los derechos de los trabajadores.<sup>166</sup> Eso está alejando a la región de un modelo de política fiscal y desarrollo inclusivo, respetuoso con la naturaleza y sostenible.

## La fe y la participación de los jóvenes para desarrollar la responsabilidad social y la sostenibilidad en República Dominicana

En América Latina y el Caribe los jóvenes tienen tres veces más posibilidades de estar desempleados que los adultos.<sup>167</sup> República Dominicana es uno de los

países en que la contraparte regional CREAS ofrece un diploma en liderazgo, responsabilidad social y sostenibilidad en colaboración con la Universidad Nacional Evangélica. Su fin es capacitar a jóvenes empresarios para desarrollar proyectos económicos socialmente responsables y sostenibles

*Siguiente página*

*Continuación de la página 59*

Modesto Ventura, uno de los participantes, dice que el diplomado es: “una oportunidad de intercambiar ideas y explorar nuevas formas que añaden un ángulo de sostenibilidad social a nuestro trabajo.” La empresa de Modesto, Detalles Modestos, crea muebles y decoraciones con madera en bruto y reciclada. Como él mismo explica: “Tomamos lo que las grandes empresas tiran a la basura... y usando un abanico de materiales, colores y texturas, lo transformamos en muebles exclusivo.”

Modesto está coordinando un programa piloto llamado “Estudia, aprende y trabaja” en el barrio de Los Corales, una zona muy pobre de la ciudad de Santo Domingo donde la mayor parte de los salarios vienen del trabajo informal.

El sueño de Modesto es “crear oportunidades laborales para los jóvenes que no tienen ni trabajo ni ingresos, como Pablo, que llegó hace poco hasta nosotros sin trabajo y quiere estudiar.

Le dimos la bienvenida y ahora está estudiando una carrera y trabaja en el departamento de administración de Detalles Modestos”

Esta iniciativa está creando nuevas relaciones en la comunidad y generando conciencia sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente. Modesto y su equipo están hablando con personas que reciclan el cartón para incorporarlos a su proyecto.

Y añadió: “Queremos ser una empresa que haga una contribución a la educación de la comunidad, y no simplemente sacar beneficio económico de unos bienes... no es nuestra idea hacernos ricos, sino crear más oportunidades para jóvenes líderes.”

Según Modesto hay oportunidades en República Dominicana, pero requieren una educación universitaria: “Hay mucha gente con talento, y este diploma internacional es la oportunidad de aprovechar esas capacidades y permitirnos tener acceso a la educación y romper el ciclo de la desigualdad”, dice.

## Conclusión

Aun cuando ha habido algunas reducciones en el desempleo e incrementos en la productividad, la riqueza de la región sigue estando concentrada en las manos de unos pocos y una gran porción de la mano de obra sigue concentrada en empleos informales o de poca calidad, que a menudo los derechos laborales no se respetan. En este grupo se incluyen los que se enfrentan a ya preexistentes obstáculos debido a su género, edad, clase o grupo étnico y que rutinariamente acaban siendo dejados atrás de una generación a la siguiente. Esas dimensiones de la desigualdad representan una imponente barrera, especialmente cuando no se evidencian o se ocultan. Como afirma Latindad: “Es importante poner de manifiesto los temas que hay que abordarlos juntos, como los altos niveles de economía informal, la creación de trabajo dignificado, las medidas para proteger el medio ambiente y el respeto a los derechos humanos e indígenas.”<sup>168</sup>

El trabajo digno puede crear una riqueza real y compartida. Sin embargo, no se crearán suficientes empleos decentes a menos que los estados diversifiquen sus economías, inviertan en su mano de obra (con educación y formación continua), refuercen y apliquen los derechos laborales e introduzcan mecanismos de protección social para todos.



## 6. Desigualdad y desarrollo bajo en carbono



**Arriba** Yacimiento minero en Ariquemes, estado de Rondônia, Brasil. La minería, la ganadería extensiva y el cultivo de la soja han hecho que este estado sea uno de los lugares más deforestados del Amazonas, y ha causado tensión y conflictos entre los migrantes y las poblaciones indígenas.

El antiguo Secretario General de la ONU, Ban Ki Moon, entre otros, ha reconocido que el cambio climático es “la temática que define a nuestra época”. En su informe *Progresos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible* afirma que “El cambio climático representa la mayor amenaza para el desarrollo y sus efectos generalizados y sin precedentes repercuten de forma desproporcionada en los más pobres y vulnerables. La adopción de medidas urgentes para combatir el cambio climático y reducir al mínimo las perturbaciones que provoca es esencial para poder implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.”<sup>169</sup>

Los efectos del cambio climático en América Latina y el Caribe se están sintiendo y se irán sintiendo más fuertemente por los más pobres y más vulnerables de la sociedad, aquellos que no tienen alternativas en cuanto a dónde vivir o cómo subsistir. Por lo tanto, es probable que el cambio climático traiga un aumento aún mayor de la desigualdad en la región.

La naturaleza mundial del cambio climático requiere una amplia cooperación a nivel internacional para crear resiliencia y capacidad de adaptación a sus efectos negativos, crear vías de avance hacia el futuro sostenibles, con bajas emisiones de carbono y acelerar la

**“Aunque es probable que la región continúe siendo la de menos contenido de carbono de aquí al 2050, las actuales tendencias de desarrollo económico darán como resultado mayores emisiones de carbono en la región. Por lo tanto, hay la necesidad de que los países busquen formas de hacer sus economías más “verdes” y reducir su dependencia de los combustibles fósiles.”**

Perspectivas del Medio Ambiente Mundial (GEO-6), evaluación regional para América Latina y el Caribe, 2016

reducción de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. El 22 de abril del 2016, 175 Estados Miembros firmaron el Acuerdo de París en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Este nuevo acuerdo, que oficialmente entró en vigor el 4 de noviembre del 2016,<sup>170</sup> tiene por objeto reducir el ritmo del cambio climático y compromete a los países a hacer la transición hacia un futuro con capacidad de recuperación a los efectos de clima, con cero emisiones de carbono, manteniendo el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2°C con respecto a los niveles preindustriales, y seguir con los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales.<sup>171</sup>

Hay un gran potencial aun sin explorar para la energía renovable en América Latina y el Caribe. Sin embargo, para tener alguna oportunidad de alcanzar el objetivo de los 1,5°C, los países tienen que hacer el gran cambio hacia las energías renovables y dejar de invertir en, y subvencionar, los combustibles fósiles. Esto debe ir de la mano con una estrategia de gestión de la demanda para reducir el consumo de energía y promover la eficiencia energética.<sup>172</sup>

Para que América Latina y el Caribe puedan cumplir con los compromisos del Acuerdo de París, es necesario que los países pasen de las inversiones públicas y privadas en combustibles fósiles a las energías con cero emisiones de carbono, lo cual a su vez favorecerá economías sostenibles y equitativas. Pero dado el actual modelo económico de la región, que depende de las industrias extractivas, las agroindustrias y los megaproyectos (incluidos los de combustibles fósiles, grandes instalaciones hidroeléctricas y biocombustibles industriales), esto será un considerable reto. Es más, la región aún se enfrenta a un acceso desigual a la energía – los más pobres y vulnerables, sobre todo en áreas rurales, son aquellos con menor acceso, lo que muestra que las inversiones en energía no están beneficiando a los más necesitados.

Sin embargo estos son desafíos que, al menos en teoría, los países de la región miembros del Foro de Vulnerabilidad Climática -Haití, República Dominicana, Guatemala y Honduras – se comprometieron a abordar durante las negociaciones en Marrakech del COP22 de la CMNUCC.<sup>173</sup> Creemos que aún tiene que movilizarse a la opinión pública de la región para forzar una acción decidida de parte del gobierno y del sector privado, igualmente creemos que el aspecto financiero está en el centro del problema y de la solución del cambio climático.

Los gobiernos de la región no pueden actuar solos y deben aliarse con la comunidad de inversores y empresarios progresistas que hizo una valiosa contribución al éxito de la reunión de París al apoyar un acuerdo de gran alcance.<sup>174</sup> Tanto la financiación e inversión pública como la privada deben apartarse de los combustibles fósiles y las infraestructuras y del desarrollo con altas emisiones de carbono para dirigirse hacia alternativas con bajas emisiones de carbono, limpias y resistentes al cambio climático, creando así un futuro más limpio, seguro y esperanzador.

Los países que carecen de acceso a servicios energéticos modernos deben además recibir apoyo para lograr dar un acceso universal a la energía, con prioridad para las tecnologías

Hay que romper la relación de poder entre las compañías de combustibles fósiles y nuestras instituciones financieras y políticas para facilitar la llegada de la economía sostenible que sabemos que necesitamos para prosperar. Entendemos que la solución tiene que ser sistémica y que un estratégico desplazamiento a gran escala de capital de inversión, de los combustibles fósiles hacia las energías renovables, podría detonar ese cambio sistémico.

descentralizadas no conectadas a la red nacional que rompan el círculo vicioso de la pobreza energética y proporcionen acceso directo a la energía a cientos de millones de habitantes de áreas rurales que quedan fuera del alcance de la red eléctrica y aún cocinan con carbón o leña.

La CMNUCC y los ODS tienen que convertirse en importantes impulsores de las políticas climáticas y de desarrollo de los países. El Acuerdo de París, como componente integral del ODS 13 para “Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos”, proporcionará al mundo, incluso en tiempos inciertos, la base para la acción colectiva en relación con el clima y para un desarrollo compatible con esta. Algo que no podría haberse alcanzado meramente con políticas a nivel nacional, bilateral y regional. A medida que se implementen los acuerdos, las acciones para enfrentar el cambio climático constituirán un paso hacia la solución de los problemas actuales y futuros que empeoran los niveles de pobreza de la región o minan los progresos ya hechos en ese sentido. Enfrentar el cambio climático es, por tanto, una acción fundamental para erradicar la pobreza y acercarse a la meta de garantizar un desarrollo más justo y sostenible para los habitantes y las comunidades de América Latina y el Caribe.

## La vulnerabilidad climática

Un cierto número de países de América Latina y el Caribe se encuentra entre los más vulnerables del mundo al cambio climático, un fenómeno que va acompañado de una significativa desigualdad. Es probable que el cambio climático lleve a una incidencia de la desigualdad para los países y habitantes que menos han contribuido a él pero que más sufren sus efectos y consecuencias.

El coste económico de tal destrucción para la región es potencialmente enorme. Un estudio calcula que “se estima que incrementará gradualmente para alcanzar aproximadamente los 100 mil millones de US\$ anuales en 2050.”<sup>175</sup> Esto hace aún más crucial que el cambio climático ocupe un lugar cada vez más prominente en el debate sobre el desarrollo sostenible. También ayudará a garantizar que el desarrollo sostenible se aborde integralmente, considerando no sólo sus aspectos económicos sino también las dimensiones ambiental y social.

A pesar de que en los últimos años ha habido avances en las condiciones socioeconómicas en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, el informe más reciente del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático afirmaba que “hay aún un persistente y alto nivel de pobreza en la mayoría de los países, lo cual lleva a una alta vulnerabilidad y un riesgo mayor ante la variabilidad climática.”<sup>176</sup> Es probable que esto dé como resultado un agravamiento de la desigualdad entre los que tienen y los que no. Patrones climáticos cada vez más impredecibles en la región amenazarán directamente los medios de subsistencia de miles de pequeños agricultores, el suministro de agua y los modelos de agro exportación, que dependen principalmente del agua.

Son los más pobres, que viven sin sistemas de alerta temprana, planes de emergencia, infraestructuras o apoyo económico para afrontar los desastres, los que sufrirán desproporcionadamente el cambio climático. Los efectos, cada vez más graves, del cambio

## El Índice de Riesgo Climático Global a Largo Plazo

German watch, en su Índice de Riesgo Climático a Largo Plazo del 2017, ha identificado a cuatro países de América Latina y el Caribe entre los 10 más afectados por desastres relacionados con el clima en los veinte años que van de 1996 a 2015: Honduras (el primero de la lista), Haití (el tercero), Nicaragua (el cuarto) y Guatemala (el noveno). República Dominicana y El Salvador ocupan los lugares 11 y 15, respectivamente.<sup>1</sup> Estos países están situados principalmente en el “punto caliente” de América Central y/o en lugares de paso habitual de huracanes.

“Es probable que aumenten la frecuencia e intensidad del clima. Tanto, por su ubicación geográfica, su distribución de la población y su alta dependencia de los recursos naturales, América Latina y el Caribe está en riesgo de experimentar las, a menudo irreversibles, consecuencias del cambio climático – incluida la degradación de la cuenca del Amazonas, el descongelamiento de los glaciares andinos, inundaciones, hambrunas e incluso el aumento de las enfermedades tropicales.”<sup>3</sup>

1 Índice de Riesgo Climático Mundial 2017: ¿Quién sufre más el clima extremo? Desastres relacionados con el clima en 2015 y de 1996 a 2015, Sönke Kretz, David Eckstein e Inga Melchior, German watch, 2017.

2 Cambio Climático 2014 Efectos, Adaptación y Vulnerabilidad, Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, 2014, Capítulo 27, América Central y del Sur.

3 *El Desafío del Cambio Climático y el Desarrollo para América Latina y el Caribe: Opciones para un desarrollo resiliente al clima y bajo en carbono*. Walter Vergara, Ana R Rios, Luis M Galindo, et al, IADB, 2013.

climático expondrán a los pobres de la región a cada vez mayores amenazas, con emergencias a gran escala de evolución lenta, erosionando sus ingresos y posesiones. Por tanto, el nexo entre el cambio climático y la pobreza se hace progresivamente más obvio, sobre todo en los “puntos más calientes” de América Central, que albergan a algunos de los habitantes más pobres de toda la región.<sup>177</sup>

Haití es otro país en el que la vulnerabilidad a los desastres (incluida una creciente frecuencia de eventos climáticos extremos) y los altos niveles de pobreza se superponen. En el 2016, con el huracán Matthew, Christian Aid/InspirAction y sus contrapartes reaccionaron a esta crisis humanitaria solicitando la implementación de los compromisos adquiridos en la Cumbre Humanitaria Mundial (CHM). La primera CHM, en el 2016, dio como resultado el Gran Acuerdo - un compromiso de los principales donantes y las mayores organizaciones humanitarias para hacer su gasto más flexible, eficiente, transparente y efectivo a nivel local.<sup>178</sup> Christian Aid/InspirAction y sus contrapartes en Haití pidieron una reacción al huracán Matthew que “usase las capacidades locales en lugar de reemplazarlas; garantizase que al menos el 25% de la ayuda se canalizase directamente a ONG del país; y garantizase un impulso a la rendición de cuentas ante las comunidades afectadas.”

América Latina y el Caribe albergan una parte significativa de la riqueza natural de la tierra.<sup>179</sup> El futuro de las economías de la región, además de la capacidad de esos países de luchar contra la pobreza y revertir la desigualdad, depende en gran medida del capital natural de la región y de la habilidad de los gobernantes de gestionarla eficientemente.

Hay varios factores críticos que darán forma al futuro de la región. El cambio climático es un importante motivo de preocupación para los países de América Latina y el Caribe a causa de sus previsibles efectos en el acceso al agua, la producción de alimentos, la salud, el uso de la tierra y el capital físico o natural.<sup>180</sup> Patrones insostenibles de producción y consumo están imponiendo cada vez más presión a los recursos como la tierra, el agua y la biodiversidad. Esto incluye la expansión de las actividades agroindustriales que continúan amenazando a los sistemas naturales de la región, junto con un creciente consumo regional y mundial (una mayor demanda de alimentos y materia bruta). Los mayores niveles de urbanización conllevan unos mayores niveles de pobreza y las incrementadas necesidades de consumo de una creciente población.<sup>181</sup> No prestar la debida atención a esos factores puede tener consecuencias de gran alcance en lo medioambiental y socioeconómico.

Hace tiempo que Christian Aid/InspirAction resalta que el cambio climático es un catalizador de la pobreza y que la pobreza es resultado de una desigualdad de poder. Mientras las compañías que explotan los combustibles fósiles sigan ejerciendo un poder desproporcionado en nuestros sistemas políticos, nuestras economías e incluso nuestras culturas, podemos esperar que lo hagan también en términos del clima, en detrimento de las voces de los países más afectados del Sur mundial.



## El cambio a un desarrollo con bajas emisiones de carbono para mitigar la desigualdad (energética).

En cuanto a las nulas emisiones de carbono, hay dos crisis mundiales en el sector de la energía que a menudo parecen tener soluciones contradictorias: la urgencia de frenar el cambio climático por medio de una rápida transición mundial a las energías con cero emisiones de carbono; y los más de 2 mil millones de personas que siguen viviendo en la pobreza en parte porque tienen poco o ningún acceso a la energía. La carencia de energías modernas limita el empoderamiento de las mujeres, el acceso a los servicios básicos, el desarrollo de las pequeñas empresas y, en última instancia, el disfrute equitativamente distribuido de la prosperidad o el crecimiento. Con una transición de la energía centralizada en combustibles fósiles a diversas fuentes de energías renovables podemos, de hecho, dar acceso a una energía limpia a los países en desarrollo, ayudándoles a superar la pobreza energética de un modo que no acentuará el calentamiento global.

El modelo de desarrollo de América Latina y el Caribe se basa primordialmente en las industrias extractivas y la expansión de las agroindustrias, acompañadas ambas de un abanico de efectos a menudo negativos en los ámbitos ambiental, económico y social. En el 2015 Venezuela ubicaba como uno de los mayores productores y exportadores de crudo - con 300 mil millones de barriles, el 17,7% del total mundial.<sup>182</sup> Hay una extensiva minería del carbón en Colombia, del aluminio en Brasil y Argentina, y Perú, México, Brasil y Chile están entre los mayores productores mundiales de oro.<sup>183</sup> Al mismo tiempo Brasil tiene más tierra cultivable que ningún otro país del mundo, en la cual produce soja, maíz, algodón y carne entre otros productos.

Un estudio de Christian Aid/InspiraAction en el 2014 mostró que tales modelos de desarrollo simplemente no llevan a un desarrollo económico bajo en carbono.<sup>184</sup> Aunque hay un limitado reconocimiento de esto por parte de los implicados, también hay evidencia de que los países están buscando tomar otra dirección.

Para las contrapartes de Christian Aid/InspiraAction en América Latina y el Caribe, la energía no se considera una mera mercancía sino más bien un derecho humano. Se argumenta que ejercer tal derecho, teniendo acceso a una energía sostenible y baja en carbono es más difícil, en particular (y por tanto debería ser prioritario) para las mujeres y la población pobre de zonas rurales.

Sin embargo, un cierto número de factores afectan al desarrollo de las energías renovables y la eficiencia energética en América Latina y el Caribe, incluida una ausencia de voluntad política por parte de los gobiernos, combinada a menudo con una falta de conocimientos técnicos que retrasa el desarrollo sostenible en el sector energético y refuerza el poder y dominio del mercado ejercidos por las empresas de electricidad, gas y petróleo.

En toda la región la sostenibilidad de los planes de desarrollo bajo en carbono depende de la reducción del consumo de energía mediante medidas de eficiencia y ahorro energético, el desarrollo de las energías sostenibles y renovables y la capacitación institucional y técnica de los gobiernos. Para lograrlo y superar los retos,

## Guatemala: las micro y pequeñas instalaciones hidroeléctricas

Deberíamos estar alerta ante falsas soluciones “ecológicas” como las grandes represas y los biocombustibles industriales, que pueden tener efectos sociales y ambientales perjudiciales y que plantean importantes puntos sobre el uso de la tierra y sobre los derechos.

En contraste con los problemas creados por las centrales hidroeléctricas a gran escala, las micro y pequeñas instalaciones normalmente se han revelado como un éxito. Por ejemplo, en Guatemala el colectivo Madre Selva, contraparte de Christian Aid, ha puesto en marcha pequeñas instalaciones hidroeléctricas de espíritu comunitario que benefician a los indígenas. Las instalaciones son ampliamente aceptadas por la población ya que no van acompañadas de ningún efecto negativo medioambiental o socioeconómico y, en cambio, suponen varias ventajas.<sup>1</sup>

Además del enfoque comunitario y el pequeño tamaño de este proyecto, otro valor añadido es que para los indígenas es una manera de “defender” sus tierras – con esto también queremos decir que pueden gestionar los recursos naturales de la tierra directamente, de los que son los tradicionales custodios.

<sup>1</sup> El Desarrollo Bajo en Carbono en América Latina y el Caribe: Evolución, Experiencias y Retos, documento de Christian Aid

creemos que es necesario un enfoque centrado en las personas, con niveles sostenibles de suministro y consumo energético, que sea inclusivo y cubra las necesidades de los que sufren la pobreza energética. Tal enfoque debe incorporar una mayor implicación del sector privado y un diálogo más activo entre los sectores privado y público que incluya a la sociedad civil.

### **Brasil: el vínculo entre la desigualdad de género y la energía**

El vínculo entre la desigualdad de género y la energía es particularmente evidente cuando se reflexiona sobre el impacto de los megaproyectos, como el de las grandes centrales hidroeléctricas en las mujeres.

Nuestra contraparte brasileña Movimiento Nacional de Afectados por las Represas (MAB, por sus siglas en portugués), junto con ONU Mujeres, llevó a cabo un programa de evaluaciones participativas entre mujeres de las comunidades afectadas por las represas del estado de Rondônia, en el noroeste de Brasil. Esto mostraba que, con la llegada de las represas, las mujeres se enfrentaban a una carencia aún mayor de oportunidades laborales, ya que eran desplazadas de sus hogares y tierras hacia áreas urbanas donde no había de un plan de inserción de empleo.<sup>185</sup>

Con las evaluaciones participativas también se descubrió que era más probable que las mujeres quedasen excluidas de los procesos de toma de decisiones relacionadas con su desarrollo; el estudio las catalogó como “persona afectada no reconocida”.

En general, el estudio llegó a la conclusión que las mujeres eran las principales víctimas del empobrecimiento y la marginación derivadas del proyecto, construcción y puesta en marcha de las represas, y también eran las que menos influencia tenían en esos procesos.<sup>186</sup>

El MAB también está apoyando a mujeres de las comunidades afectadas por la represa hidroeléctrica de São Luiz do Tapajós. Éste se planeó para el río Tapajós con una capacidad de 8.040 MW y una energía firme en torno a los 4.000 MW. La represa ocuparía un área de 729 km<sup>2</sup>. Hay proyectados al menos otras 40 represas más para esa cuenca. Las represas inundarían parte del territorio indígena y causarían su desplazamiento, lo cual está prohibido por ley. Con el apoyo de la Unión Europea, MAB está capacitando a estas mujeres para que influyan en la comunidad y en las autoridades locales en defensa de sus derechos. Tras varios casos éxitos, a mediados del 2016 el organismo federal brasileño para el medio ambiente suspendió la licencia del proyecto. Si bien es cierto esta decisión no significa la cancelación de la licencia, sí la dificulta.

Existen también muestras de desigualdad de género en relación con el uso de la energía.<sup>187</sup> Esto puede observarse en particular en las áreas rurales donde hay, por ejemplo, una alta incidencia de males como enfermedades crónicas respiratorias causadas por la contaminación interior a causa del humo generado al cocinar con fuegos de leña o carbón – algo que afecta desproporcionadamente a las mujeres. Facilitar un método limpio de cocina –con hornillas energéticamente eficientes- al tiempo que se tratan de cuestionar y cambiar los tradicionales papeles de género, puede ser crucial para liberar el tiempo y la capacidad productiva de las mujeres. En América Central ha habido progresos en este aspecto. Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua han creado la Red de Género y Energía, una iniciativa regional que pretende promover el acceso igualitario a la energía sostenible influyendo en la política del gobierno.

### **La Amazonía boliviana: los retos del acceso a la energía versus las soluciones bajas en carbono**

La Amazonia boliviana tiene casi 59,6 millones de hectáreas – casi 2,5 veces el tamaño del Reino Unido-

y es el hogar de más de 30 comunidades indígenas. La región boliviana del Amazonas está en el centro del debate sobre los modelos de desarrollo sostenible como un área de importancia mundial, debido a su papel clave como reguladora del clima y a su mega biodiversidad. *siguiente pagina*

*Continuación de la página 67*

Con todo esto, está cada vez más amenazada por las depredadoras compañías madereras, las industrias extractivas, las agroindustrias y los grandes proyectos de infraestructuras como carreteras y represas.

Las comunidades en la amazonia son extremadamente vulnerables a los exacerbados efectos del cambio climático como las inundaciones y los incendios debidos a las temporadas lluviosas y secas más prolongadas e intensas en las últimas décadas. De hecho, en los últimos 10 años – sobre todo en el 2008 y el 2014 – Christian Aid/InspiraAction y sus contrapartes locales han tenido que actuar ante algunas de las peores inundaciones desde que empezaron los registros en esta zona

Una de las prioridades clave del trabajo de Christian Aid/InspiraAction con sus contrapartes de la Amazonia es desarrollar planes comunitarios de contingencia ante desastres y aumentar la resiliencia con sistemas agroforestales, incrementando el acceso a mercados justos y reforzando a las organizaciones comunitarias.

Con ese fin Christian Aid/InspiraAction, a través de las organizaciones nacionales Inti Illimani, Soluciones Prácticas, Centro de Investigación y Promoción del Campesinado y la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático – UNITAS, encabezó un proyecto piloto en Bolivia para proporcionar a las comunidades amazónicas cocinas solares, reduciendo así su dependencia de la leña. Dependiendo de la leña como principal combustible para cocinar lleva a la deforestación y se calcula que cada familia usa hasta 3 kg de leña al día.

El peso de la recogida de leña recae principalmente en las mujeres (en términos del esfuerzo físico y del tiempo que les lleva). La deforestación significa que las mujeres tienen que andar cada vez más lejos de su comunidad para buscar combustible. Se calcula que las mujeres pasan aproximadamente una hora al día recogiendo leña y hasta cuatro horas diarias cocinando sobre un fuego de leña. La quema de combustibles fósiles en fuego abierto en pequeños hogares también es un riesgo para la salud y el bienestar de las familias.

Una de las principales preocupaciones fue si las familias usarían las cocinas. Después de todo, preparar la comida de cierta manera durante tanto tiempo puede ser una costumbre difícil de cambiar. Los cuatro primeros meses fueron complicados para las mujeres que los usaban, ya que los métodos de cocción eran muy distintos, pero a lo largo de ese tiempo se adaptaron a la cocina solar.



**Arriba:** Un horno solar facilitado por Soluciones Prácticas, contraparte de Christian Aid/InspiraAction, a una familia del proyecto piloto.

Hasta hoy las contrapartes de Christian Aid/InspiraAction han llevado pequeños paneles solares para dar electricidad a 34 familias de tres comunidades selváticas de la Amazonia. Las baterías son ligeras y transportables y se pueden cargar en barcas de pesca por la noche o usarse para otras actividades productivas cuando el clima es más frío.

**Bombas de agua con energía solar:** En la comunidad de Altamarani el manantial local ha sido contaminado por una planta procesadora de azúcar cercana.

La alternativa para las familias era usar el agua del río, pero ésta acabó contaminada por la minería y otros procesos industriales río arriba. La labor de ir a buscar agua recayó sobre las mujeres, que normalmente llevaban los pesados cubos de vuelta al hogar. Con el apoyo de la comunidad se cavó un nuevo pozo de 30 metros de profundidad y se instaló una bomba de agua que funciona con la luz solar.

**Secaderos solares:** Mujeres de la Asociación de Mujeres Emprendedoras Tucupí, en el municipio de Palos Blancos, recibieron asistencia técnica de nuestra contraparte Soluciones Prácticas para construir un secadero para granos de cacao que funciona con energía solar. *Siguiente página* El objetivo del secadero solar es mejorar la calidad—y por lo tanto el precio que los granos pueden alcanzar en el mercado— y también ahorrarles tiempo a las mujeres, ya que así no tienen que voltear los granos constantemente durante el periodo de secado.

El cacao se cosecha durante la estación húmeda y a menudo los granos se enmohecen y se echan a perder porque no hay posibilidad de secarlos.

## Conclusión

Es necesario que el crecimiento mundial sea contenido y que sus beneficios sean repartidos más justamente.<sup>188</sup> Necesitamos modelos alternativos de desarrollo económico con bajas emisiones de carbono y una transformación de los sistemas mundiales para permitir que todas las personas tengan un papel productivo, y necesitamos también que el mundo pase a un futuro bajo en carbono a la vez que se garantiza un uso más sostenible y equitativo de los recursos para todos. Una forma de abordar la desigualdad es plantear una política energética regional basada en un enfoque sostenible que promueva la diversificación de los tipos de energía que se consume, aprovechando los recursos existentes en lugar de promover un mayor consumo.<sup>189</sup>

Durante el 2015 hubo muchas oportunidades – sobre todo los ODS y el Acuerdo de París- para encauzar al sector mundial de la energía hacia las bajas emisiones de carbono, inyectar inversión en las energías renovables y fijar metas claras. Aun cuando la creciente polarización política nos impone candidatos que cuestionan esas vías de avance e incluso el cambio climático en sí, el desarrollo bajo en carbono cada vez tiene más sentido económicamente hablando.

Para que América Latina y el Caribe logre cumplir con los compromisos del Acuerdo de París, es imperativo que los países desvíen la inversión pública y privada de los combustibles fósiles para llevarla hacia la energía baja en carbono, lo cual además cimentará economías sostenibles y equitativas. Pero dado el actual modelo económico de la región, que depende de las industrias extractivas, las agroindustrias y los megaproyectos (incluidos los de combustibles fósiles, las grandes instalaciones hidroeléctricas y los biocombustibles industriales), esto supondrá un reto considerable. Es más, la región aún se enfrenta a problemas de acceso a la energía para los más pobres y vulnerables, sobre todo en áreas rurales, lo cual demuestra que las inversiones en energía en esta región no están beneficiando a quienes más lo necesitan.

En toda América Latina y el Caribe hay un enorme potencial de energías renovables que está casi intacto. Sin embargo, para tener alguna oportunidad de alcanzar el objetivo de los 1,5° C, los países tienen que hacer la gran transición a las energías renovables y acabar con las inversiones y los subsidios a los combustibles fósiles. Esto tiene que ir de la de una estrategia de gestión de la demanda para reducir el consumo y promover la eficiencia energética.<sup>190</sup>

Romper la relación de poder entre las compañías de combustibles fósiles y nuestras instituciones financieras y políticas es necesario para permitir que se instaure la economía sostenible que sabemos que necesitamos para florecer. Entendemos que la solución tiene que ser sistémica y un estratégico desplazamiento masivo de capital de inversión desde el sector de los combustibles fósiles hacia el de las renovables podría detonar ese cambio sistémico.



## Conclusión y recomendaciones

Hay pruebas suficientes que los extremos niveles de desigualdad están frenando el progreso, la erradicación de la pobreza y negando al pueblo el gozo de sus derechos. Para abordar las raíces de la desigualdad en América Latina y el Caribe es importante ver el panorama general. La identidad (grupo étnico, género y sexualidad), las posibilidades económicas y de empleo, las oportunidades políticas y la capacidad de lidiar con los efectos del cambio climático o la violencia, todas estas desigualdades se entrecruzan y eso significa que los esfuerzos por mitigar las desigualdades tienen que ser específicos para cada contexto.

Las mujeres sufren más los efectos en todos los ámbitos de la desigualdad reflejados en este informe, que los hombres: son víctimas de la violencia con más frecuencia, los sistemas fiscales están sesgados en su contra, tienen menos oportunidades de encontrar un trabajo digno y a menudo les afecta más el cambio climático.

La discriminación por razones de raza o grupo étnico está generalizada y está demostrado que los grupos étnicos (indígenas y afrodescendientes) son más pobres y más excluidos. El poder está concentrado en las manos de las élites y multinacionales. La creciente tendencia a la concentración de la propiedad de la tierra, los conflictos que eso conlleva y la falta de avances en las reformas agrarias y la regularización de tierras deberían ser un gran motivo de preocupación para los responsables políticos, ya que ahí se puede observar la mayor parte de las caras de la desigualdad.

Los miembros de la sociedad civil y las organizaciones de fe, como parte de nuestras contrapartes, tienen un papel importante a la hora de denunciar los efectos de la desigualdad, denunciar y pedir cuentas a los gobiernos, las instituciones y los miembros del sector privado.

Tenemos que mostrar cómo los sistemas fiscales injustos hacen aumentar de hecho los niveles de desigualdad. En sociedades altamente desiguales, el crecimiento es una forma ineficiente de combatir la pobreza – ya que requiere de significativos incrementos del PIB para sacar a los más pobres de su situación. Los efectos del cambio climático son críticos y nos obliga a reflexionar más a fondo acerca de los nuevos modelos económicos sostenibles que la región necesita urgentemente. Dichos modelos, demandados tanto por el Norte como por el Sur mundial, deben ser probadamente pro-equidad. Un desarrollo bajo en carbono es vital para todos.

Para los gobiernos de la región la desigualdad debería ser la temática clave a la hora de diseñar nuevas políticas, y éstas deben ser plenamente aplicadas para ser efectivas, junto con la garantía que proporciona el acompañamiento y supervisión de la sociedad civil. Nuestras recomendaciones llaman a una transformación de los sistemas fiscales débiles y regresivos que permita hacer la inversión necesaria para superar la pobreza y la desigualdad eficientemente.

Hace falta mejorar el gasto social (con apropiadas visiones de género y etnicidad incorporadas). El gasto público debe dirigirse a programas de creación de empleo, estrategias regionales de desarrollo económico, fondos para la cohesión territorial y estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático para proteger a los pobres. Además, es urgente reformar las estrategias nacionales de desarrollo económico de la región y estudiar más a fondo qué otros modelos (justos e inclusivos) podrían servir mejor a la sociedad.

La desigualdad sigue siendo un rasgo importante del panorama de la región. La exclusión social, la desigualdad de ingresos, la marginación política y la vulnerabilidad al cambio climático son algunas de las muchas caras de la desigualdad.

Christian Aid cree firmemente que reducir las desigualdades es una forma efectiva de acelerar la disminución de la pobreza. Durante mucho tiempo los que formulan las políticas han propagado la noción de que deberíamos centrarnos primero en el crecimiento y ocuparnos después de la desigualdad. Nosotros creemos que el momento de centrarse en reducir la desigualdad es ahora. Los ODS proporcionan la oportunidad de “no dejar a nadie atrás” y la importancia de mitigar la desigualdad para el desarrollo se reconoce ahora más ampliamente, más allá de los entornos quienes se ocupan del desarrollo y los movimientos sociales.

## Recomendaciones

Los gobiernos, las instituciones internacionales y regionales, así como la sociedad civil de América Latina y el Caribe deben, urgentemente, enfrentar la desigualdad en todas sus formas y entre todos los grupos menos favorecidos. Muchas de las recomendaciones a continuación incluyen el desarrollo de medidas políticas, pero es importante enfatizar que la correcta implementación y supervisión de éstas también es vital. La sociedad civil, incluidas las organizaciones de fe, tienen un papel importante que desempeñar acompañando y supervisando la implementación de estas políticas. La sociedad civil también es clave a la hora de crear conciencia y de hacer que los gobiernos, actores regionales, donantes y sector privado rindan cuentas en relación con la desigualdad.

### Discriminación racial y étnica

Superar la desigualdad entre grupos étnicos. Las medidas deberían incluir:

- Redefinir el gasto en servicios básicos para dar más prioridad a las ayudas sociales en las áreas donde viven los grupos étnicos.
- Adoptar medidas urgentes para abordar los inaceptablemente altos niveles de malnutrición crónica entre los niños y niñas de los grupos étnicos. Esto debería ser una prioridad nacional en Guatemala, Honduras y Bolivia.
- Invertir en la creación de los datos desglosados necesarios para poder rastrear los progresos en los ODS y el desarrollo de planes de acción nacionales para “que nadie se quede atrás”, incluido el establecimiento del peldaño sobre metas de equidad.
- Adoptar medidas a largo plazo y con financiación pública para animar al cambio de actitud y comportamiento en relación con las normas sociales que refuerzan la discriminación racial.

### Gobernabilidad, tierra y poder

- Enfrentar la desigualdad ligada al control del poder político, la participación política y el acceso a la tierra. Las medidas deberían incluir:
- Llevar a cabo acciones para mejorar la rendición de cuentas y la transparencia de las decisiones gubernamentales y el desarrollo y la aplicación de políticas específicas para las comunidades vulnerables y marginadas.

- Aplicar correctamente las cuotas para promover la participación de las mujeres en la política.
- Esforzarse por revertir la tendencia a concentración de tierras promoviendo la titularización de propiedad para las comunidades pobres rurales; actuar para abordar los conflictos sobre tierras y poner límites a la concesión de tierras a las industrias extractivas y otros sectores.
- Aplicar plenamente el Convenio número 169 de la OIT para asegurarse de que el libre consentimiento, previa consulta informada, de las comunidades indígenas y afrodescendientes está garantizado antes de que se den las concesiones y se cambie el uso de las tierras.
- Adoptar medidas para superar la impunidad y garantizar la protección de los defensores de los derechos humanos.

### Violencia

Hacer frente al creciente problema de la violencia, tanto la resultante del crimen y las pandillas como la violencia por razones de género. Las medidas deberían incluir:

- Aplicar políticas e invertir en generar oportunidades para reducir la violencia – educación, empleo y acceso a tierras en áreas rurales.
- Asegurar la prestación de protección y el acceso a la justicia. La falta de acceso a la justicia y los altos niveles de impunidad se han convertido en importantes factores de estímulo para el crimen y formación de pandillas.
- Tener en cuenta los diferentes efectos de la violencia en los hombres y las mujeres y aplicar iniciativas con financiamiento público para animar al cambio de actitud y comportamiento en relación con las normas sociales que refuerzan la desigualdad por razones de género y la discriminación de la comunidad LGBTI.
- Abordar la problemática de desplazamientos de población a causa del crimen organizado y la violencia por parte de pandillas. Específicamente en países de América Central como: El Salvador, Honduras y Guatemala necesitan adoptar e implementar leyes nacionales sobre los desplazamientos de población.

*Siguiente pagina*

Continuación página 71

### Justicia fiscal

Se deberían dar pasos para utilizar el sistema fiscal para abordar decididamente la concentración de riqueza y así permitir a la región financiar plenamente su desarrollo. Las medidas deberían incluir

- Aumentar la recaudación basándose en una completa reforma de las políticas relativas al impuesto sobre la renta, el impuesto de sociedades y el impuesto sobre la propiedad.
- Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en todos los casos de exenciones fiscales y avanzar hacia la desaparición de las exenciones e incentivos discrecionales.
- Controlar la evasión fiscal transfronteriza con el desarrollo de un marco regional para el intercambio automático de información fiscal, impulsando activamente a nivel internacional el fin del secreto bancario y los paraísos fiscales y demandando la aplicación de medidas de transparencia empresarial como los informes país por país.
- Adoptar un enfoque de género en el presupuesto a nivel nacional y regional para garantizar que se tiene sistemáticamente en cuenta esta temática.
- Volver a priorizar y reprogramar el gasto social para que refleje claramente temas de equidad, incluido el compromiso de avanzar hacia la prestación universal de servicios sociales y una educación pública de alta calidad.

### Trabajo digno

Mejorar urgentemente el acceso a empleos dignos para superar sosteniblemente la pobreza y la desigualdad. Las medidas deberían incluir:

- Reformular las políticas de salario mínimo, situando los salarios mínimos a un nivel acorde con el costo de la canasta básica para el acceso a los productos esenciales y teniendo en cuenta las presiones inflacionarias.
- Vincular las estrategias de desarrollo y de desarrollo económico para dar prioridad al respaldo a las MIPYME, a los programas de desarrollo agrario y a la exploración de sectores con potencial de creación de empleos verdes y sostenibles.

Financiar estrategias contra el desempleo, incluida la formación técnica y los empleos en prácticas, particularmente en regiones menos favorecidas y para jóvenes, así como mejorar las capacidades en los sectores de trabajo intensivo y de baja productividad.

- Crear legislación laboral y supervisión práctica para promover el empoderamiento económico de las mujeres y los grupos étnicos, incluyendo el eliminar la discriminación salarial, permitir las actividades sindicales y garantizar la correcta protección de los derechos laborales.
- Diseñar estrategias de desarrollo regionales y nacionales realistas con el sector privado que promuevan las ventajas de las prácticas empresariales pro-población pobre y de modelos de negocio basados en las relaciones de respeto y confianza hacia arriba y hacia abajo de la cadena económica.

### Desarrollo bajo en carbono y desigualdad

Aceptar urgentemente el desafío que representan el cambio climático y la necesidad de cambiar a un desarrollo bajo en emisiones de carbono. Las medidas deberían incluir:

- Apoyar un desarrollo bajo en carbono como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y cambio climático y fijar objetivos de gran alcance en cuanto a las energías renovables y la eficiencia energética tanto a nivel mundial como nacional.
- Eliminar los subsidios a la producción y consumo de combustibles fósiles en la región para garantizar un terreno de juego igualitario para los inversores en energías bajas en carbono.
- Favorecer en las políticas energéticas nacionales a los más pobres y vulnerables para apoyar un acceso a la energía para todos, equitativo y sostenible.
- Adoptar medidas urgentes para centrarse en los más pobres, que son especialmente vulnerables al cambio climático y necesitan urgentemente ayuda para reducir su vulnerabilidad a los fenómenos climáticos extremos y a la pérdida de sus actuales fuentes de subsistencia.
- Crear e implementar una regulación que promueva un desarrollo bajo en carbono y que determine las normas que se deberán aplicar e incluya la participación del sector privado en la elaboración de estrategias, planes, programas, proyectos e iniciativas.

## Notas

- 1 'Latin America is the world's most unequal region. Here's how to fix it', Alicia Bárcena and Winnie Byanyima, ECLAC, 2016, [www.cepal.org/en/articles/2016-latin-america-worlds-most-unequal-region-heres-how-fix-i](http://www.cepal.org/en/articles/2016-latin-america-worlds-most-unequal-region-heres-how-fix-i)
- 2 *The Scandal of Inequality in Latin America and the Caribbean*, Christian Aid, 2012, [christianaid.org.uk/images/scandal-of-inequality-in-latin-america-and-the-caribbean.pdf](http://christianaid.org.uk/images/scandal-of-inequality-in-latin-america-and-the-caribbean.pdf)
- 3 The 2030 Agenda for Sustainable Development was adopted at the UN's Sustainable Development Summit on 25 September 2015. This Agenda is a plan of action for people, planet and prosperity to fulfil the SDGs.
- 4 *Regional Human Development Report for Latin America and the Caribbean: Progreso multidimensional: bienestar más allá del ingreso*, UNDP, 2016, <http://hdr.undp.org/sites/default/files/50228-unplac-web.pdf>
- 5 'Income distribution under Latin America's new left regimes, Giovanni Andrea Cornia, *Journal of Human Development and Capabilities*, 11(1), 2010  
'Declining Latin America inequality: market forces or state action', Nora Lustig and Luis Lopez-Calva, *VOX*, 6 June 2010
- 6 See note 5, Cornia.
- 7 *The Rise and Fall of Income Inequality in Latin America*, CEDLAS, Working Paper No 118, L Gasparini and N Lustig, 2011, [http://cedlas.econo.unlp.edu.ar/download.php?file=archivos\\_upload/doc\\_cedlas118.pdf](http://cedlas.econo.unlp.edu.ar/download.php?file=archivos_upload/doc_cedlas118.pdf)
- 8 More than a third of intentional homicides in the world occurred in the Americas in 2012. See *Global Study on Homicide 2013*, UNODC, United Nations, 2014, [www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/2014\\_GLOBAL\\_HOMICIDE\\_BOOK\\_web.pdf](http://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/2014_GLOBAL_HOMICIDE_BOOK_web.pdf)
- 9 See note 4.
- 10 See note 4
- 11 *Social Panorama of Latin America*, ECLAC, 2015, [http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39964/1/S1600226\\_en.pdf](http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39964/1/S1600226_en.pdf)
- 12 *Human Development Report 2015*, UNDP, 2015, [hdr.undp.org/sites/default/files/2015\\_human\\_development\\_report.pdf](http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report.pdf)
- 13 See note 11, ECLAC. For Haiti, see World Bank Development Indicators, People, Distribution of Income, <http://wdi.worldbank.org/tables>
- 14 'The Gini index measures the extent to which the distribution of income (or, in some cases, consumption expenditure) among individuals or households within an economy deviates from a perfectly equal distribution. A Gini index of zero represents perfect equality and 100, perfect inequality.' See <https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=4842>
- 15 See note 11, p14.
- 16 See note 11, p14.
- 17 See note 4.
- 18 'Decent work sums up the aspirations of people in their working lives. It involves opportunities for work that is productive and delivers a fair income, security in the workplace and social protection for families, better prospects for personal development and social integration, freedom for people to express their concerns, organise and participate in the decisions that affect their lives and equality of opportunity and treatment for all women and men.' – ILO
- 19 See note 4, p177.
- 20 *Percepções Sobre a Violência Doméstica Contra a Mulher No Brasil*, Instituto Avon/IPSOS, 2011, <http://compromissoatitude.org.br/wp-content/uploads/2012/08/Avon-Ipsos-pesquisa-violencia-2011.pdf>
- 21 'Austerity strikes human rights in Latin America', Grazielle David, INESC, 6 September 2016, [www.inesc.org.br/news/2016/september/austerity-strikes-human-rights-in-latin-america](http://www.inesc.org.br/news/2016/september/austerity-strikes-human-rights-in-latin-america)
- 22 See note 4, p165.
- 23 See note 4.
- 24 *Guaranteeing indigenous people's rights in Latin America*, ECLAC, 2014. p36, [http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37051/4/S1420782\\_en.pdf](http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37051/4/S1420782_en.pdf)
- 25 *Atlas sociolingüístico de pueblos indígenas en América Latina*, UNICEF, 2009, p14, [www.proiebandes.org/atlas/tomo\\_1.pdf](http://www.proiebandes.org/atlas/tomo_1.pdf)
- 26 See note 4, p166.
- 27 *Leave No One Behind – from goals to implementation*, Christian Aid, 2015, p3, [christianaid.org.uk/images/leave-no-one-behind-report.pdf](http://images/leave-no-one-behind-report.pdf)
- 28 *Indigenous Latin America in the Twenty-First Century*, World Bank, 2015, p39, <http://documents.worldbank.org/curated/pt/145891467991974540/pdf/98544-REVISED-WP-P148348-Box394854B-PUBLIC-Indigenous-Latin-America.pdf>
- 29 *The Indigenous World 2016*, International Work Group for Indigenous Affairs, 2016, p86, [www.iwgia.org/iwgia\\_files\\_publications\\_files/0740\\_THE\\_INDIGENOUS\\_ORLD\\_2016-eb.pdf](http://www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/0740_THE_INDIGENOUS_ORLD_2016-eb.pdf)
- 30 *República de Guatemala: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2014*, Instituto Nacional de Estadística, 2015, p12, [www.ine.gov.gt/sistema/uploads/2015/12/11/vjNVdb4IZswOj0ZtuivP1caAXet8LzqZ.pdf](http://www.ine.gov.gt/sistema/uploads/2015/12/11/vjNVdb4IZswOj0ZtuivP1caAXet8LzqZ.pdf)
- 31 *Guatemala: Millennium Development Goals Report 2015*, Segeplán, 2016, p33, [www.gt.undp.org/content/guatemala/es/home/library/mdg/iv\\_informe\\_odm.html](http://www.gt.undp.org/content/guatemala/es/home/library/mdg/iv_informe_odm.html)
- 32 *Principales retos del presupuesto público 2016: Elementos para la discusión ciudadana*, ICEFI, 2016, p11, [http://icefi.org/sites/default/files/contamos\\_2016.pdf](http://icefi.org/sites/default/files/contamos_2016.pdf)
- 33 Ibid.
- 34 See note 31, p32.
- 35 See note 30, p198.
- 36 See note 30, p198.
- 37 The percentage difference between boys and girls was 6.4 in 1991 and grew to 6.9 in 2006. In reality not much has changed in the last 15 years. See *Rights or Privileges? Fiscal Commitment to the Rights to Health, Education and Food in Guatemala*, ICEFI and CESR, 2009. The figure for non-indigenous girls in rural areas is 36%.
- 38 'Unicef: Guatemala ocupa el quinto lugar de desnutrición a nivel mundial', *La Hora*, 28 November 2014, <http://lahora.gt/unicef-guatemala-ocupa-el-quinto-lugar-de-desnutricion-nivel-mundial/>
- 39 See note 11.
- 40 See note 7.
- 41 *Championing Gender Justice in Latin America and the Caribbean*, Christian Aid, 2015.
- 42 World Development Indicators: Population dynamics, World Bank, 2015, <http://wdi.worldbank.org/table/2.1>
- 43 *Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Síntese de Indicadores 2014*. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, p5, [www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000024052411102015241013178959.pdf](http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000024052411102015241013178959.pdf)
- 44 The term Quilombo originally referred to communities formed of slaves fleeing the plantations. Currently, it is used to mean black communities whose land in shared use came from the freed slaves purchasing land or former slaves' peaceful possession of land abandoned by the owners or other forms of collective territorial occupation.
- 45 Quadro Geral de Comunidades Remanescentes De Quilombos, Fundação Palmares, 2016, [www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2016/06/QUADRO-RESUMO.pdf](http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2016/06/QUADRO-RESUMO.pdf)
- 46 'Brazil: Quilombo communities fight exclusion', F Frayssine, *Upside Down World*, 4 September, 2007, <http://upside-downworld.org/main/brazil-archives-63/875-brazil-Quilombo-communities-fight-exclusion>
- 47 *Soberania e Segurança Alimentar para População Negra e Povos e Comunidades Tradicionais*, Conferencia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, 2015, p2, [www4.planalto.gov.br/consea/eventos/conferencias/5a-conferencia-nacional-de-seguranca-alimentar-e-nutricional/encontros-tematicos/soberania-e-seguranca-alimentar-e-nutricional-da-populacao-negra-e-dos-povos-e-comunidades-tradicionais/carta-politica-popnegra-e-pct-pos-dk-e-me.pdf](http://www4.planalto.gov.br/consea/eventos/conferencias/5a-conferencia-nacional-de-seguranca-alimentar-e-nutricional/encontros-tematicos/soberania-e-seguranca-alimentar-e-nutricional-da-populacao-negra-e-dos-povos-e-comunidades-tradicionais/carta-politica-popnegra-e-pct-pos-dk-e-me.pdf)
- 48 Terras Quilombolas – Survey, Comissão Pró-Índio de São Paulo, 2015, [www.cpis.org.br/terras/asp/terras\\_tabela.a\\_spx](http://www.cpis.org.br/terras/asp/terras_tabela.a_spx)
- 49 See note 27, p6
- 50 See note 21.
- 51 *Violence against Indigenous Peoples in Brazil*, CIMI, 2014, p17, [www.cimi.org.br/pub/Relatorio\\_Violencia\\_2014\\_Relat.pdf](http://www.cimi.org.br/pub/Relatorio_Violencia_2014_Relat.pdf)
- 52 See note 51, p18.
- 53 *Quilombola Rights: A Study of the Impact of Ecumenical Cooperation*, Mara Vanessa Fonseca Dutra and Lucia MM de Andrade, Christian Aid and EED, 2011, unpublished
- 54 *BTI 2016 – Bolivia Country Report*, Bertelsmann Stiftung, 2016, p20, [www.bti-project.org/fileadmin/files/BTI/Downloads/REports/2016/pdf/BTI\\_2016\\_Bolivia.pdf](http://www.bti-project.org/fileadmin/files/BTI/Downloads/REports/2016/pdf/BTI_2016_Bolivia.pdf)
- 55 *Nota de prensa: CEPAL ratifica reducción de indicadores de pobreza y pobreza extrema en Bolivia*, Instituto Nacional de estadística, 2015, p1, [www.ine.gov.bo/pdf/boletin/NP\\_2016\\_16.pdf](http://www.ine.gov.bo/pdf/boletin/NP_2016_16.pdf)
- 56 *Promoting Gender Equality in Electoral Assistance: Lessons Learned in Comparative Perspective. Country Report for Bolivia*, UNDP, 2014, p4.



- <sup>57</sup> The New Extraction: Rewriting the Political Ecology of the Andes, Anthony Bebbington, *NACLA Report on the Americas*, 2009.
- <sup>58</sup> 'Dominican court ruling renders hundreds of thousands stateless', R Rojas, Reuters, 12 October 2013.
- <sup>59</sup> Caribbean Ecumenical Conference on Migration – Socio-Pastoral challenges for the churches, Centro Bono, 2016, <http://bono.org.do/realizan-conferencia-ecumenica-sobre-las-migraciones-en-el-caribe/>
- <sup>60</sup> Sustainable Development Goals, <https://sustainabledevelopment.un.org/sd>
- <sup>61</sup> Haiti protesters stoke political crisis while powers seek consensus, Joseph Guyler Delva and Frank Jack Daniel, Reuters, 23 January 2016, [www.reuters.com/article/us-haiti-election-idUSKCN0V10V0](http://www.reuters.com/article/us-haiti-election-idUSKCN0V10V0)
- <sup>62</sup> *Introducing Political Settlements*, Christian Aid Occasional Paper Number 4, E Gutierrez, Christian Aid, 2011. [christianaid.org.uk/images/final-political-settlements-paper.pdf](http://christianaid.org.uk/images/final-political-settlements-paper.pdf)
- <sup>63</sup> Ibid.
- <sup>64</sup> *Land Matters: Dispossession and Resistance*, Christian Aid, 2015, p9, <http://programme.christianaid.org.uk/programme-policy-practice/sites/default/files/2016-03/land-matters-dispossession-and-resistance-case-studies-nov-2015.pdf>
- <sup>65</sup> Reforma tributaria desmonta o financiamento das politicas sociais, INESC, 2009
- <sup>66</sup> *Haiti: Selected Issues*, IMF, 2015, p5 [www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr15158.pdf](http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr15158.pdf)
- <sup>67</sup> *Security of Human Rights Defenders and Communities*, ABColombia, 2016.
- <sup>68</sup> 'Colombia approves amnesty agreed in Farc peace deal', 28 December 2016, [www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-38455493](http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-38455493)
- 'Revised Peace Accord Ratified', ABColombia, December 2016, [www.abcolombia.org.uk/subpage.asp?subid=677&mainid=23](http://www.abcolombia.org.uk/subpage.asp?subid=677&mainid=23)
- <sup>69</sup> See note 67
- <sup>70</sup> *Report of the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples on her mission to Brazil*, 8 August 2016, p9.
- <sup>71</sup> *Minería en Guatemala*, ICEFI, 2014
- <sup>72</sup> Latinobarómetro is an annual public opinion survey that involves 20,000 interviews in 18 Latin American countries, representing more than 600 million inhabitants, [www.latinobarometro.org](http://www.latinobarometro.org)
- <sup>73</sup> 'Neither Trumpian nor Brexiteer', *The Economist*, 3 September 2016, [www.economist.com/news/americas/21706344-latin-america-has-different-worries-united-states-and-europe-neither-trumpian-nor](http://www.economist.com/news/americas/21706344-latin-america-has-different-worries-united-states-and-europe-neither-trumpian-nor)
- <sup>74</sup> See note 73.
- <sup>75</sup> 'Guatemala's Government Corruption Scandals Explained', Michael Lohmuller, InSight Crime, 21 June 2016, [www.insightcrime.org/news-analysis/guatemala-s-government-corruption-scandals-explained](http://www.insightcrime.org/news-analysis/guatemala-s-government-corruption-scandals-explained)
- 'Guatemala sets pace in corruption fight', Katy Watson, BBC, 14 September 2015, [www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-34195758](http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-34195758)
- <sup>76</sup> 'El declive de la democracia-Latinobarometro 2016', Latinobarometro, 2016, p8, [www.latinobarometro.org/latNewsShow.jsp](http://www.latinobarometro.org/latNewsShow.jsp)
- <sup>77</sup> 'Call on EU and Brazil to address the criminalisation of the social protest and violations of labor, economic and social rights in the run up to the World Cup', FIDH, 25 April 2014, [www.fidh.org/en/region/americas/brazil/15230-call-on-eu-and-brazil-to-address-the-criminalisation-of-the-social-protest](http://www.fidh.org/en/region/americas/brazil/15230-call-on-eu-and-brazil-to-address-the-criminalisation-of-the-social-protest)
- <sup>78</sup> *Bolivia: Challenges and Constraints to Gender Equality and Women's Empowerment*, World Bank, 2015, p25, <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23829/Bolivia000Chal00women0s0empowerment.pdf>
- <sup>79</sup> *Proceso de Elaboración de Política Pública y Reglamentación de la Ley No 243 "Contra El Acoso Y Violencia Política"*, 2013, [http://info.comvomujer.org.pe/catalogocomvo/21\\_Informe\\_Foro%20Nacional\\_Aplicaci%20f3n\\_Ley\\_N%b0243\\_BO\\_2013.pdf](http://info.comvomujer.org.pe/catalogocomvo/21_Informe_Foro%20Nacional_Aplicaci%20f3n_Ley_N%b0243_BO_2013.pdf)
- <sup>80</sup> Civil Society Watch Report, CIVICUS, 2016, p6, [www.civicus.org/images/CSW\\_Report.pdf](http://www.civicus.org/images/CSW_Report.pdf) CIVICUS is a global alliance of civil society organisations and activists dedicated to strengthening citizen action and civil society around the world. Founded in 1993, CIVICUS strives to promote marginalised voices, especially from the Global South, and has members in countries throughout the world.
- <sup>81</sup> *The Risks of Defending Human Rights*, Oxfam, 2016, [www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bn-el-riesgo-de-defender-251016-en.pdf](http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bn-el-riesgo-de-defender-251016-en.pdf)
- <sup>82</sup> This claim is based on global data collected annually on the numbers of HRDs killed, by organisations like Frontline Defenders; however, data is not readily available in all countries, e.g., in 2014 Asia was incomplete.
- <sup>83</sup> With the exception of 2014 when it fell slightly below those of 2013 and then rose again in 2015. 2013 was the year with the highest number recorded in Colombia – 78 HRDs killed in one year.
- <sup>84</sup> The number of murders of human rights defenders in 2015 exceeded the average figure for the past 20 years, UN OHCHR, 2015, [www.hchr.org.co/publico/comunicados/2015/onuddhh\\_Comunicado\\_Homicidio\\_defensores\\_derechos\\_humanos\\_2015.pdf](http://www.hchr.org.co/publico/comunicados/2015/onuddhh_Comunicado_Homicidio_defensores_derechos_humanos_2015.pdf)
- <sup>85</sup> *Programa Somos Defensores*, El Cambio, 2015 Annual Report.
- <sup>86</sup> *Annual Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Addendum, Situation of human rights in Colombia*, 15 March 2016, [www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session31/Documents/A.HRC.31.3.Add.2\\_AUV\\_EN.docx](http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session31/Documents/A.HRC.31.3.Add.2_AUV_EN.docx)
- <sup>87</sup> Ibid.
- <sup>88</sup> 'Gobierno pide resultados para conocer autores de amenazas a defensores de derechos humanos', *El País*, 27 May 2015, [www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/gobierno-pide-resultados-para-conocer-autores-amenazas-defensores-derechos](http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/gobierno-pide-resultados-para-conocer-autores-amenazas-defensores-derechos) *Progress in the promotion, guarantee and defense of Human Rights in Colombia. First semester of 2015. Note S-GA/II-D-15-088842*, Republic of Colombia, 14 September 2015, p61.
- <sup>89</sup> See note 85, p28.
- <sup>90</sup> See note 85
- <sup>91</sup> *La Corrupción*, ICEFI, <http://icefi.org/publicaciones/la-corrupcion-sus-caminos-su-impacto-en-la-sociedad-y-una-agenda-para-su-eliminacion>
- <sup>92</sup> See note 75, Lohmuller.
- <sup>93</sup> 'Guatemalan justice system and citizen mobilization lead to major victory in the country's fight against impunity', ICTJ, 2015, [www.ictj.org/multimedia/audio/guatemala-justice-victory-impunity-corruption](http://www.ictj.org/multimedia/audio/guatemala-justice-victory-impunity-corruption)
- <sup>94</sup> See note 91.
- <sup>95</sup> 'Civil society condemns murder of Berta Cáceres', FIAN, 4 March 2016, [www.fian.org/en/news/article/civil\\_society\\_condemns\\_murder\\_of\\_berta\\_caceres/](http://www.fian.org/en/news/article/civil_society_condemns_murder_of_berta_caceres/)
- <sup>96</sup> 'IACHR condemns the killing of Berta Cáceres in Honduras', OAS, 4 March, 2016, [www.oas.org/en/iachr/media\\_center/PReleases/2016/024.asp](http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2016/024.asp)
- <sup>97</sup> 'Stronger commitment needed to protect civil society space', ACT Alliance, 7 March 2016, <http://actalliance.org/act-news/stronger-commitment-needed-to-protect-civil-society-space/>
- <sup>98</sup> Civicus urges justice for murdered Honduran activist Berta Cáceres on International Women's Day, 2016, [www.civicus.org/index.php/media-resources/news/910-media-statement-civicus-urges-justice-for-murdered-honduran-activist-bertha-caceres-on-international-women-s-day](http://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/910-media-statement-civicus-urges-justice-for-murdered-honduran-activist-bertha-caceres-on-international-women-s-day)
- <sup>99</sup> Sustainable Development Goals, UN, <https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs>
- <sup>100</sup> See note 73.
- <sup>101</sup> 'Breaking down the silos between Latin America's homicide reduction programs', I Caro, Open Society Foundation, 22 September 2016, [www.opensocietyfoundations.org/voices/breaking-down-silos-between-latin-america-s-homicide-reduction-programs](http://www.opensocietyfoundations.org/voices/breaking-down-silos-between-latin-america-s-homicide-reduction-programs)
- <sup>102</sup> 'The most violent cities in the world: Latin America dominates list with 41 countries in top 50', *The Independent*, 25 April 2016, [www.independent.co.uk/news/world/the-most-violent-cities-in-the-world-latin-america-dominates-list-with-41-countries-in-top-50-a6995186.html](http://www.independent.co.uk/news/world/the-most-violent-cities-in-the-world-latin-america-dominates-list-with-41-countries-in-top-50-a6995186.html)
- <sup>103</sup> *Global Burden of Armed Violence, 2011*, Geneva Declaration, 2011, p23, [www.genevadeclaration.org/fileadmin/docs/2014RRC/GBAV2011\\_WEB-full-report-REV.pdf](http://www.genevadeclaration.org/fileadmin/docs/2014RRC/GBAV2011_WEB-full-report-REV.pdf)
- <sup>104</sup> *New humanitarian frontiers: Addressing criminal violence in Mexico and Central America*, Internal Displacement Monitoring Centre, 2015, p8.
- <sup>105</sup> Ibid.
- <sup>106</sup> 'Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia', *El Deber*, October 2015. La violencia en cifras, [www.coordinadoradelamujer.org.bo/observatorio/index.php/generalsim/principal/boton/1/sub/23/tem/1](http://www.coordinadoradelamujer.org.bo/observatorio/index.php/generalsim/principal/boton/1/sub/23/tem/1)
- <sup>107</sup> 'Faith paths to overcome violence against women and girls in Brazil', Sarah de Roure and Chiara Capraro, *Gender & Development*, 2016, 2(4), <http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/faith-paths-to-overcome-violence-against-women-and-girls-in-brazil-617017>
- <sup>108</sup> 'Colombia Announces Start of Official Talks with ELN Guerrillas', James Bargent, 11 October 2016, [www.insightcrime.org/news-briefs/colombia-announces-start-of-official-talks-with-eln-guerrillas](http://www.insightcrime.org/news-briefs/colombia-announces-start-of-official-talks-with-eln-guerrillas)
- <sup>109</sup> 'Latin America's poverty is down but violence is up. Why?', R Muggah, *Americas Quarterly*, October 20 2015, [www.americasquarterly.org/content/latin-america-poverty-down-violence-why](http://www.americasquarterly.org/content/latin-america-poverty-down-violence-why)

- 110 According to the International Labour Organization, the concept of decent work revolves around the availability of employment in conditions of freedom, equity, human security and dignity. Another definition of decent work is provided by the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights on the Right to Work as 'work that respects the fundamental rights of the human person as well as the rights of workers in terms of conditions of work safety and remuneration. It also provides an income allowing workers to support themselves and their families... These fundamental rights also include respect for the physical and mental integrity of the worker in the exercise of his/her employment... [Decent work] presupposes the respect of the fundamental rights of workers.'
- 111 *Situación Educativa de América Latina y el Caribe: Hacia la educación de calidad para todos al 2015*, UNESCO, 2013, [www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/images/SITIED-espanol.pdf](http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/images/SITIED-espanol.pdf)
- 112 See note 109.
- 113 According to Christian Aid's Tackling Violence Building Peace Strategy, GBV is any act that is perpetrated against a person's will and is based on gender norms and unequal power relationships. It includes physical, emotional or psychological, and sexual violence, as well as denial of resources or access to services. Violence includes threats of violence and coercion. GBV inflicts harm on women, girls, men, boys, transgender and intersex people and is a severe violation of several human rights.
- 114 *Facts about gender-based violence in Latin America and the Caribbean*, IPPF, 2014, [www.ipfwhr.org/sites/default/files/GBV-Fact-Sheet.pdf](http://www.ipfwhr.org/sites/default/files/GBV-Fact-Sheet.pdf)
- 115 See note 4, p172.
- 116 *El Salvador: Maras y violencia de género*, ORUMUSA, 2016.
- 117 Colombia Police Directive for Criminal Investigation, in 'Cada día, 171 mujeres son víctimas de maltrato intrafamiliar', *El Tiempo*, 4 February 2016, [www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/casos-de-maltrato-familiar-en-colombia/16499862](http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/casos-de-maltrato-familiar-en-colombia/16499862)
- 118 *Violencia contra personas LGBTI*, InterAmerican Commission on Human Rights/OEA, 2015, [www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaPersonasLGBTI.pdf](http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaPersonasLGBTI.pdf)
- 119 'Developing countries face \$2.5 trillion annual investment gap in key sustainable development sectors, UNCTAD report estimates', UNCTAD, 2014, <http://unctad.org/en/pages/PressRelease.aspx?OriginalVersionID=194>
- 120 *Time to tax for inclusive growth*, ECLAC, 2016, p7, [http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39950/1/S1600237\\_en.pdf](http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39950/1/S1600237_en.pdf)
- 121 'Por que los impuestos aumentan la desigualdad en america latina', Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe, 18 July 2014, [www.justiciafiscal.org/2014/07/por-que-los-impuestos-aumentan-la-desigualdad-en-america-latina/](http://www.justiciafiscal.org/2014/07/por-que-los-impuestos-aumentan-la-desigualdad-en-america-latina/)
- 122 Revenue Statistics, Latin American Countries, OECD, 2014, <https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=RSLACT>
- 123 See note 121.
- 124 Fiscal Panorama of Latin America and the Caribbean, 2016, ECLAC, p52.
- 125 *Tax Policy in Latin America: Assessment and guidelines for a second generation of reforms*, JC Gomez-Sabaini and D Moran, 2014, p42, [www.daghammarskjold.se/wp-content/uploads/2014/12/2014-Tax-policy-in-Latin-America\\_CEPAL.pdf](http://www.daghammarskjold.se/wp-content/uploads/2014/12/2014-Tax-policy-in-Latin-America_CEPAL.pdf)
- 126 See note 11, pp26-27.
- 127 'Necesitamos una nueva arquitectura tributaria para acabar con las desigualdades', Pague lo Justo, 18 November 2016, [www.paguenlojusto.org/2016/11/18/necesitamos-una-nueva-arquitectura-tributaria-para-acabar-con-las-desigualdades/](http://www.paguenlojusto.org/2016/11/18/necesitamos-una-nueva-arquitectura-tributaria-para-acabar-con-las-desigualdades/)
- 128 See note 120, p6.
- 129 *Las Mujeres y Los Sesgos del Sistema Tributario en Nicaragua*, Puntos de Encuentro and IEEPP, 2016, [www.iepp.org/wp-content/uploads/downloads/2016/10/20160920\\_Las-mujeres-y-los-sesgos-del-sistema-tributario-en-Nicaragua-FINALweb.pdf](http://www.iepp.org/wp-content/uploads/downloads/2016/10/20160920_Las-mujeres-y-los-sesgos-del-sistema-tributario-en-Nicaragua-FINALweb.pdf)
- 130 'Estructura tributaria sera mas regresiva si se aprueba la reforma', Justicia Tributaria en Colombia, 22 November 2016 <http://justiciatributaria.co/blog/2016/11/22/estructura-tributaria-sera-mas-regresiva-se-aprueba-la-reforma/>
- 131 ISD, informe de analisis sobre la evasión y elusión fiscal en El Salvador, 2016.
- 132 'Ceara Hatton demanda mejorar calidad del gasto y hacer eficiente el Estado', El Dinero, [www.eldinero.com.do/30952/ceara-hatton-demanda-mejorar-calidad-del-gasto-y-eficientizar-el-estado/](http://www.eldinero.com.do/30952/ceara-hatton-demanda-mejorar-calidad-del-gasto-y-eficientizar-el-estado/)
- 133 Un año de la campaña que las transnacionales paguen lo justo, Latindadd, 17 December 2015, [www.economiccritica.com/2015/12/17/un-año-de-la-campaña-que-las-transnacionales-paguen-lo-justo/](http://www.economiccritica.com/2015/12/17/un-año-de-la-campaña-que-las-transnacionales-paguen-lo-justo/)
- 134 'Por qué en Colombia la evasión fiscal no es delito', Marcelo Justo, BBC, 8 June 2016, [www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-36472895](http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-36472895)
- 135 See note 1.
- 136 See note 120, p6.
- 137 See note 1.
- 138 *Tax for the Common Good – A Study of Tax and Morality*, Christian Aid, 2014, p35.
- 139 *Give us a break: How big companies are getting tax-free deals*, Action Aid, 2013.
- 140 'La FIFA juega sucio en Brasil', Marta González, *El País*, 12 June 2014.
- 141 *Foreign Investment in Latin America and the Caribbean: 2006*, ECLAC, 2007, [www.cepal.org/en/publications/foreign-investment-latin-america-and-caribbean-2006-report](http://www.cepal.org/en/publications/foreign-investment-latin-america-and-caribbean-2006-report)
- 142 Ibid.
- Corporate Tax Stimulus and Investment in Colombia*, IADB, 2010, [www.iadb.org/en/research-and-data/publication-details,3169.html?pub\\_id=IDB-WP-173](http://www.iadb.org/en/research-and-data/publication-details,3169.html?pub_id=IDB-WP-173)
- 143 IMF Country Report, Number 15/158, IMF, 2015, p25.
- 144 *Horizons 2030: Equality at the Centre of Sustainable Development*, ECLAC, 2016.
- 145 'Cash transfers, gender equity and women's empowerment in Peru, Ecuador and Bolivia', Maxine Molyneux and Marilyn Thomson, *Gender & Development*, 2011, 19(2), pp195-212.
- 146 See note 143, ECLAC.
- 147 *The Political Economy of the Budget in the Americas*, D Sánchez-Ancochea and I Morgan, eds, 2009.
- 148 See note 110, ILO.
- 149 See note 4, UNDP, p18.
- 150 'La informalidad en la mira', ILO, 24 June 2014, [www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS\\_248122/lang-es/index.htm](http://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_248122/lang-es/index.htm)
- 151 See note 4, UNDP, p18.
- 152 *Global Wage Trends for Apparel Workers 2001-2011*, Workers Rights Consortium, 2013, <http://cdn.americanprogress.org/wp-content/uploads/2013/07/RealWageStudy-3.pdf>
- 153 *The high cost of low wages in Haiti*, AFL-CIO Solidarity Center, 2014, [www.solidaritycenter.org/wp-content/uploads/2014/11/Haiti.Living-Wage-Study-FINAL-updated.3-11-15.pdf](http://www.solidaritycenter.org/wp-content/uploads/2014/11/Haiti.Living-Wage-Study-FINAL-updated.3-11-15.pdf)
- 154 'Inequality is stagnating in Latin America: should we do nothing?', George Gray Molina, 27 August 2014, *The Guardian*, [www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2014/aug/27/inequality-latin-america-undp](http://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2014/aug/27/inequality-latin-america-undp)
- 155 See note 2.
- The Real Brazil: The inequality behind the statistics*, Christian Aid and CEBRAP, 2012.
- 156 *Trabajo decente e igualdad de género*, ECLAC, ILO, FAO, et al, 2013, [www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-americas/-ro-lima/-sro-santiago/documents/publication/wcms\\_233161.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-americas/-ro-lima/-sro-santiago/documents/publication/wcms_233161.pdf)
- 157 Ibid.
- 158 *New Century, Old Disparities*, H Ñopo, 2012.
- 159 See note 143, p168.
- 160 See note 143, p169.
- 161 See note 129.
- 162 See note 155.
- 163 *Día de la Mujer Boliviana ¿Celebración?*, CEDLA, 2016, [http://cedla.org/sites/default/files/Obess\\_octubre-11-Esp-Mujer.pdf](http://cedla.org/sites/default/files/Obess_octubre-11-Esp-Mujer.pdf)
- 164 Typically, the 'green agenda' has been seen as about environmentalism. For both Christian Aid and CAFOD, it is essential that the notion of a 'green job' incorporates adequate standards of fairness; just as a simple focus on inclusion will not ensure the transition to an environmentally sustainable economy, creating new 'green industries' will not automatically lead to fair outcomes or better income equality. (*Rising to the global employment challenge: decent work for all*, Christian Aid and CAFOD, 2017).
- 165 See note 12.
- 166 'Doubts come to surface after the "Decade of Latin America"', John Paul Rathbone, *Financial Times*, 12 May 2013.
- 167 *Trabajo decente y juventud en América Latina*, ILO, 2013, p11, available at: [www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-americas/-ro-lima/documents/publication/wcms\\_235577.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-americas/-ro-lima/documents/publication/wcms_235577.pdf)
- 168 *La hora de los privados: Financiamiento del Banco Interamericano de desarrollo al sector privado en América Latina*, Latindadd, 2015, p8, [www.latindadd.org/wp-content/uploads/2015/03/Financiamiento-BID.pdf](http://www.latindadd.org/wp-content/uploads/2015/03/Financiamiento-BID.pdf)
- 169 'Progress towards the Sustainable Development Goals, UN Secretary-General, 2016, [www.un.org/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=E/2016/75&Lang=E](http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2016/75&Lang=E)

- 170 'Landmark climate change agreement to enter into force', UNFCCC, 5 October 2016, <http://newsroom.unfccc.int/unfccc-newsroom/landmark-climate-change-agreement-to-enter-into-force/>
- 171 *COP 22 briefing paper: moving forward from Paris*, Mohamed Adow, Christian Aid, 2016, [christianaid.org.uk/Images/time-for-climate-justice-briefing-nov-2016.pdf](http://christianaid.org.uk/Images/time-for-climate-justice-briefing-nov-2016.pdf)
- 172 Ibid.
- 173 The CVF vision, CVF, 2016, [www.thecvf.org/marrakech-vision/](http://www.thecvf.org/marrakech-vision/)
- 174 See note 170.
- 175 *The Climate and Development Challenge for Latin America and the Caribbean: Options for climate-resilient, low-carbon development*, Walter Vergara, Ana R Rios, Luis M Galindo, et al, IADB, 2013, pp13-14, [https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/456/The Climate and Development Challenge for Latin America and the Caribbean. Options for climate-resilient%2c low-carbon development.pdf?sequence=1](https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/456/The%20Climate%20and%20Development%20Challenge%20for%20Latin%20America%20and%20the%20Caribbean%20Options%20for%20climate-resilient%20and%20low-carbon%20development.pdf?sequence=1)
- 176 Climate Change 2014 Impacts, Adaptation, and Vulnerability, Intergovernmental Panel on Climate Change, 2014, p1502, [www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-FrontMatterB\\_FINAL.pdf](http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-FrontMatterB_FINAL.pdf)
- 177 CEPALSTAT, GDP per capita 2014, <http://interwp.cepal.org/sisgen/Consultante/gradasp?IdAplicacion=6&idTema=131&idIndicador=2206&idioma=i>
- 178 *The Grand Bargain – A Shared Commitment to Better Serve People in Need*, 2016, <https://consultations2.worldhumanitariansummit.org/bitcache/075d4c18b82e0853e3d393e90af18acf734baf29?vid=581058&disposition=inline&op=view>
- 179 *Global Environment Outlook GEO-6 Regional Assessment for Latin America and the Caribbean*, UNEP, 2016, [http://uneplive.unep.org/media/docs/assessments/GEO6\\_LAC\\_Regional\\_Assessment\\_Rp\\_Final.pdf](http://uneplive.unep.org/media/docs/assessments/GEO6_LAC_Regional_Assessment_Rp_Final.pdf)
- 180 Ibid.
- 181 Ibid.
- 182 *BP Statistical Review of World Energy*, 2016, p6, [www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2016/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report.pdf](http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2016/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report.pdf)
- 183 *Mineral Commodity Summaries*, US Geological Survey, 2014, p67, <http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/gold/mcs-2014-gold.pdf>
- 184 *Low-Carbon Development in Latin America and the Caribbean*, Christian Aid, 2014, [christianaid.org.uk/Images/Low-carbon-development-LAC-November-2014.pdf](http://christianaid.org.uk/Images/Low-carbon-development-LAC-November-2014.pdf)
- 185 'Mujeres afectadas por las represas', Mundubat, 2012.
- 186 'Afectados por Represas', Informe de la Comisión Especial
- 187 *Low-Carbon Development in Latin America and the Caribbean: Evolution, experiences and Challenges*, Gaby Drinkwater, Christian Aid, 2014, [christianaid.org.uk/Images/Low-Carbon-Development-LAC-briefing-English-November-2014.pdf](http://christianaid.org.uk/Images/Low-Carbon-Development-LAC-briefing-English-November-2014.pdf)
- 188 *Partnership for Change: The power to end poverty*, Christian Aid, 2012, [christianaid.org.uk/Images/2012\\_strategy.pdf](http://christianaid.org.uk/Images/2012_strategy.pdf)
- 189 See note 183.
- 190 See note 170.

## Contact us

### Christian Aid

35 Lower Marsh

Waterloo

Londres

SE1 7RL

+44 (0) 20 7620 4444

[info@christian-aid.org](mailto:info@christian-aid.org)

[christianaid.org.uk](http://christianaid.org.uk)

